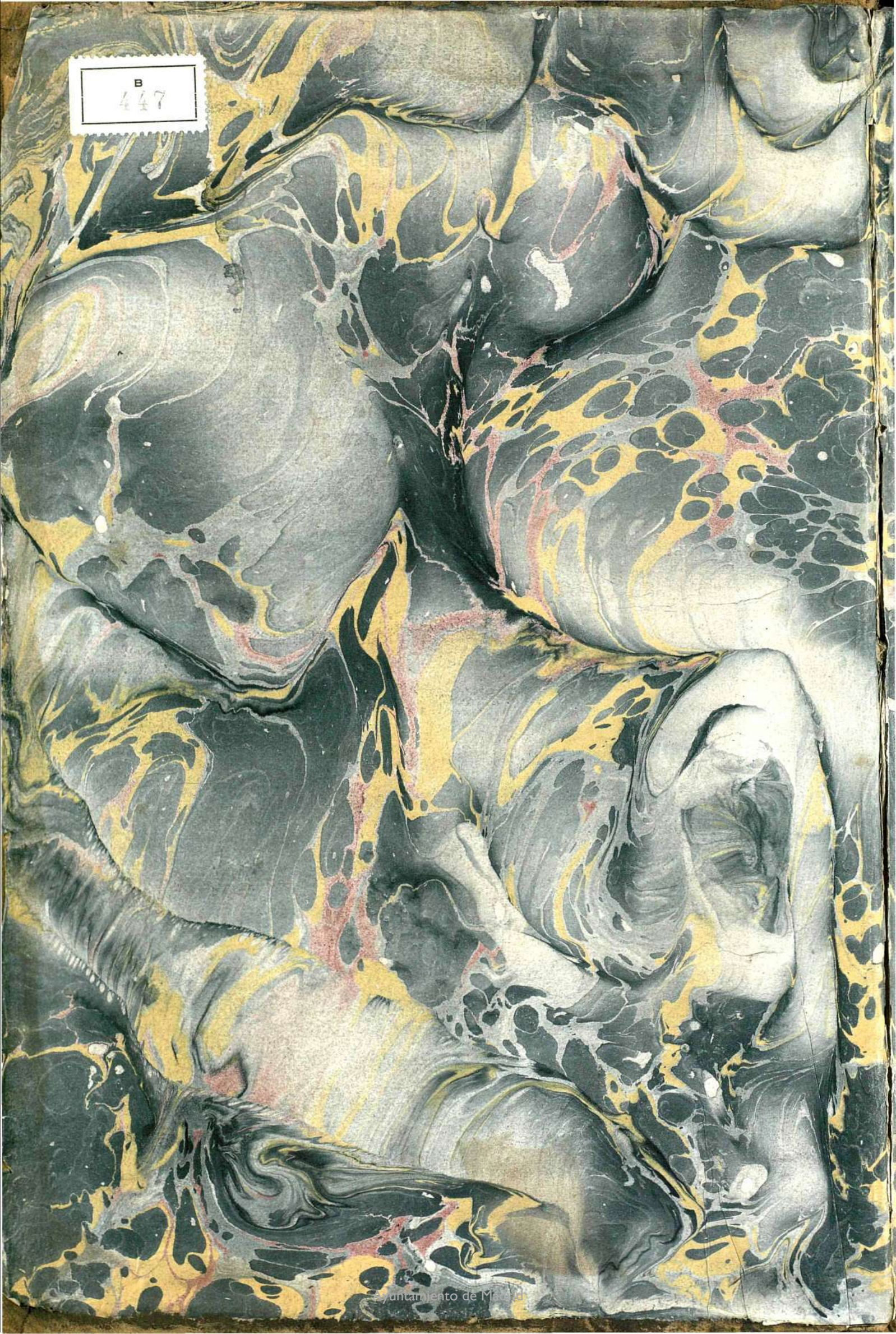




B
447





20-3

3

SUPLEMENTO
DE LA
NOVÍSIMA RECOPIACION
DE LEYES DE ESPAÑA,

PUBLICADA EN 1805.

Contiene las Reales disposiciones , y otras providencias expedidas en los dos años de 1805 y 806 , y algunas de los anteriores no incorporadas en este Código:

y se distribuyen por leyes y notas de los libros y títulos á que corresponden.



R.º 2377.

ABOGADO

MADRID

IMPRESO EN MADRID
AÑO 1807.

SUPLEMENTO
DE LA
NOVISIMA RECOLECCION

DE LEYES DE ESPAÑA

PUBLICADA EN 1807

Contiene las Reales disposiciones, y otras providencias
expedidas en los años de 1805 y 1806, y algunas de
los anteriores no incorporadas en este Código:

y se distinguen por letras y notas de los libros y títulos á que
corresponden.



IMPRESO EN MADRID
AÑO 1807.

REAL CÉDULA.

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Occéano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, &c. Á los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo como de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora son, como á los que serán de aquí adelante, y á las demas personas á quienes lo contenido en esta mi Real cédula toca ó tocar pueda en qualquier manera. SABED: Que conformándome con lo que me ha expuesto la Junta de Recopilacion en informe de treinta de Diciembre próximo, he tenido á bien mandar, que el Quaderno Suplemento de la Novísima Recopilacion, comprehensivo de las providencias expedidas en los dos años últimos de mil ochocientos cinco y mil ochocientos seis, y de algunas correspondientes á los anteriores que quedaron sin recopilar, se tenga por parte de la citada Novísima Recopilacion, y que como tal tengan todas las providencias que incluye la Soberana autoridad necesaria, y la consiguiente virtud

de Leyes. Esta mi Real resolucion se comunicó al mi Consejo de mi órden en primero del presente mes por el Marques Caballero, mi Secretario de Estado, y del Despacho universal de Gracia y Justicia, para que dispusiese se imprimiese, y coloque por cabeza en cada exemplar del referido Quaderno. Y en su inteligencia, y de lo expuesto por mis Fiscales, acordó su cumplimiento, y expedir esta mi cédula: por la qual os mando á todos, y cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones veais la expresada mi Real resolucion, y la guardéis, cumplais y executeis, y hagais guardar, cumplir y executar en lo que os corresponda, sin permitir su contravencion en manera alguna: que así es mi voluntad. Y que al traslado impreso de esta mi cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á su original. Dada en Aranjuez á diez y nueve de Enero de mil ochocientos y ocho. YO EL REY. Yo Don Sebastian Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado. = Registrada: Don Josef Alegre. = Teniente de Canciller mayor: Don Josef Alegre. = Don Gonzalo Josef de Vilches. = Don Josef Navarro. = Don Tomás Moyano. = Don Juan Antonio Gonzalez Carrillo. = Don Vicente Duque de Estrada.

LIBRO PRIMERO

DE LA SANTA IGLESIA; SUS DERECHOS, BIENES Y RENTAS:

Prelados y súbditos: y Patronato Real.

TITULO III.

De los cementerios de las Iglesias: entierro y funeral de los difuntos.

LEY I. *consiguiente á la 1.*

D. Carlos IV. por resolución á consulta del Consejo, comunicada en circulares de 26 de Abril, y 28 de Junio de 1804.

Sobre la construccion de cementerios fuera de poblado para el entierro de los cadáveres.

Para activar en todo el Reyno la construccion de cementerios fuera de los muros de los pueblos, con la eficacia que corresponde á su importancia, me he servido resolver á consulta del Consejo, que se nombren por su Gobernador los Ministros del mismo, á cuyo cargo haya de correr respectivamente en los Obispados que se les señalen, para que, acordando por sí las providencias que consideren mas conducentes segun las circunstancias de cada pueblo, y sin necesidad de acudir al Consejo fuera de los casos en que lo conceptúen conveniente por su gravedad, se simplifique aquella, y se logre el mas pronto y cumplido efecto. (1)

Y para que se proceda en este gravísimo asunto con uniformidad en todos los puntos que no pendan de circunstancias particulares, se observen las reglas siguientes.

I Promoverán los Corregidores estos utilísimos establecimientos en todo el distrito de sus partidos, poniéndose de acuerdo con los Reverendos Obispos, y procurando se realicen con preferencia en las

(1) Para el cumplimiento de lo resuelto por S. M., y prevenido en esta Real orden, nombró el Señor Gobernador del Consejo á los Ministros de él, que debian entender en su execucion; y estos como tales Comisionados dirigieron en 4 de Mayo del mismo año de 804 las correspondientes circulares á las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos de sus respectivos distritos,

ciudades ó villas capitales, pueblos en que haya ó hubiere habido epidemias, ó que esten mas expuestos á ellas; y en aquellas parroquias en que se reconozca que es mayor la urgencia por el número de parroquianos, corto recinto de las Iglesias, y otras circunstancias.

2 Se deben construir los cementerios fuera de las poblaciones, y á la distancia conveniente de estas, en parages bien ventilados, y cuyo terreno por su calidad sea el mas apropósito para absorber los miasmas pútridos, y facilitar la pronta consuncion ó desecacion de los cadáveres, evitando aun el mas remoto riesgo de filtracion ó comunicacion con las aguas potables del vecindario; y como el exámen de estas circunstancias pende de conocimientos científicos, deberá preceder un reconocimiento exácto del terreno, ó terrenos que parezcan proporcionados, practicado por profesor ó profesores de Medicina acreditados.

3 Si resultare del informe de estos que concurren las qualidades correspondientes en el terreno ó terrenos elegidos, se formarán por Arquitecto aprobado, donde le hubiere, y en defecto por el Maestro de obras ó Alarife de mas confianza del pueblo, el conveniente plano, y el cálculo prudencial de la cantidad á que podrá ascender la execucion; teniendo presente en primer lugar, que los cementerios deberán estar cercados en la altura que sea suficiente, para impedir que

previniéndoles que inmediatamente procediesen de acuerdo con los Prelados Ordinarios Eclesiásticos, y Curas Párrocos sus diputados, á dar las disposiciones convenientes para la construccion de los cementerios proporcionados en capacidad al número de vecinos de cada uno, y dándoles algunas reglas en quanto á los sitios ventilados en que debian hacerse, y al modo de costearlos.

A 2.

puedan entrar en ellos personas ó bestias, capaces de causar alguna profanacion opuesta al honor con que deben ser tratados los cadáveres, pero descubiertos en la parte en que se han de hacer los entierramientos; y en segundo, que su recinto debe ser de tal extension, que no solo puedan enterrarse los cadáveres que resulten en un año comun deducido de un quinquenio, y calculado de manera que colocándose dos cadáveres en cada sepultura, pueda darseles el tiempo de tres años para su consuncion ó desecacion, sino que quede ademas algun terreno sobrante para ocurrencias extraordinarias.

4 Se aprovecharán para capillas de los cementerios las ermitas situadas fuera de los pueblos, segun se previno en el capítulo 3. de la Real cédula de 3 de Abril de 1787. (*ley 1.^a*) Si no se pudiere verificar, ó porque no existan, ó porque no lo permitan su situacion y demas circunstancias, convendrá se construyan á lo ménos en los pueblos principales, y en que haya proporcion de fondos, é igualmente osarios para el desahogo y limpieza de los cementerios, y habitaciones para los Capellanes y sepultureros; pero ni deberán considerarse de necesidad estas obras, ni retardarse con ocasion de ellas la construccion de cementerios: pues en los pueblos cortos donde no sea facil proporcionar fondos para capilla, osario y dichas habitaciones, ó donde no se tenga por oportuno establecerlas, bastará por ahora, que cercándose hasta la altura conveniente los cementerios, se coloque una cruz en medio de ellos.

5 Para que se guarde el honor debido á los Sacerdotes, y para que conforme al espíritu de la Iglesia no se confundan con los demas los cadáveres de los párvulos, se destinarán sepulturas privativas, ó unos pequeños recintos separados para unos y otros: se podrán tambien construir sepulturas de distincion, ya para preservar en ellas los derechos que tengan adquiridos algunas personas ó familias en las Iglesias parroquiales ó conventuales, ya para que se puedan conceder á otras

que aspiren á este honor, pagando lo que se estime justo.

6 Se executarán estas obras con los fondos señalados en el cap. 5. de dicha Real cédula de 3 de Abril de 1787, observando en ellas la mayor moderacion, y la forma que sea mas capaz de conciliar la economía en el coste con el decoro exterior, aunque sencillo y sério, de estos religiosos establecimientos.

7 Luego que se hayan reconocido y elegido los terrenos, fixado el número de los cementerios que se conceptúen necesarios en cada poblacion, y formado los planos y cálculos de su coste, se hará todo presente al Ministro comisionado con la debida instruccion para su aprobacion, ó providencias que estime convenientes. Las acordará igualmente para que se realicen los fondos necesarios; para arbitrar algun medio extraordinario, en el caso que no sean suficientes los designados en la expresada Real cédula, ó en el de que, por no hallarse estos espeditos, convenga usar con calidad de reintegro de algunos otros de que se pueda disponer interinamente; y en todos los demas casos y puntos en que por su gravedad, dudas que ocurran, ó por otras circunstancias, deba intervenir su autoridad. El mismo Ministro estimará tambien si en alguna villa ó lugar de poblacion dispersa se podrá permitir que se establezca el cementerio dentro de su recinto comun, en parage bastantemente distante de las habitaciones del vecindario, y en que concurren ademas las otras circunstancias que son necesarias, para que se logren cumplidamente los objetos á que se dirigen estos importantes establecimientos. (2)

LEY II.

El Consejo en declaracion aprobada por S. M., y comunicada en circular de 17 de Octubre de 1805.

Ninguna persona ni Comunidad pueda establecer para su uso cementerio distinto de los públicos para el vecindario.

Sin embargo de lo prevenido en las órdenes circulares de 26 de Abril, y 28

(2) En circular del Consejo de 18 de Abril de 1806 dirigida á todos los Ordinarios eclesiásticos, con motivo de haber representado el Corregidor y Ayuntamiento de la villa de Sisante, que concluido ya su cementerio, se hallaban con el tropiezo de que el Cura Párroco pretendia aumentar los derechos actuales por razon del mayor trabajo, que suponía producirle la con-

duccion de cadáveres al cementerio y su enterramiento, recargando un ducado por cada uno, y nombrando un sepulturero con cinco reales por cada difunto; se acordó, que todos los Ordinarios eclesiásticos con presencia de lo representado informasen lo que se les ofreciera, teniendo en consideracion las circunstancias locales de los cementerios, manifestando lo que juzgasen en

de Junio de 804 (*ley anterior*), se han promovido en algunos pueblos dudas que entorpecen la construccion de cementerios; y á fin de que se promueva en todas partes con la eficacia y prontitud que corresponde, se declara, que no pueden las personas ó Comunidades eclesiásticas, así regulares como seculares, sean de la clase que fueren, establecer para su uso cementerios distintos de los que se construyan en los respectivos pueblos para el enterramiento de los cadáveres de todo el vecindario, aunque se debe observar lo que se prescribe en el art. 5. de dicha circular de 28 de Junio: y que en los pueblos que tienen ya cementerios provisionales, debe hacerse en estos el enterramiento de todos los cadáveres, sin excepcion alguna de estado, condicion ó sexô, hasta que se establezcan los permanentes. (3 y 4)

LEY III. consiguiente á la 6.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 23 de Enero de 1804.

Derechos de los Capellanes Castrenses en los entierros de militares.

Sin embargo de lo prevenido en las

razon de los sepultureros, que se hubiesen de encargar de la conduccion y enterramiento en el modo decente y acomodado al uso observado hasta ahora, y expresando como deberia quedar la asignacion de derechos del Cura, tenientes y demas ministros de la Iglesia por la conduccion de los cadáveres al cementerio.

(3) En Real orden de 17 inserta en circular del Consejo de 24 de Mayo de 1805, con motivo de haberse negado el Dean de la Catedral de Málaga á que la Junta de Sanidad sacase de ella el cadáver de un Prebendado, para enterrarle fuera de poblado; resolvió S. M. se le reprendiese por este exceso; y que si los Eclesiásticos seculares ó regulares se opusiesen á las providencias de la Sanidad, resistiendo el enterramiento de sus individuos, ó qualquiera otra persona, en los lugares destinados al intento, se proceda por la Justicia á la extraccion de dichos cadáveres, guardando el decoro debido á los santos templos y lugares religiosos.

Reales órdenes de 4 de Septiembre de 1779, y 31 de Octubre de 781 (*ley 6.*), he resuelto que los Capellanes Castrenses con ningun título exijan ofrenda ni quarta funeral de los militares, sean de la clase que fueren, sino los derechos de entierro que sean conformes al estilo del pais donde fallezcan los de su feligresía; y que si se enterraren en otra parte, los paguen igualmente: y asimismo que se les dé para que hagan sufragios la quarta parte de lo que dexe para este fin á otras Iglesias, Conventos y particulares: y en el caso de que sea preciso invertir en sufragios algunas sumas de los soldados de algun Cuerpo muertos en accion de guerra, naufragio ó por otro accidente semejante, dispongan los Coroneles se les dé á los Capellanes lo que buenamente se crea que puedan invertir en sufragios en el término de un año y no mas; y en quanto á los soldados, cabos y sargentos que mueran fuera de los casos dichos, que los Coroneles, sino dexasen hecha disposicion, dispongan su entierro y sufragios como les dicte su prudencia, con arreglo á su haber y circunstancias del pais, encargando los sufragios al Capellan.

(4) Y por circular del Consejo de 12 de Septiembre de 806, con motivo de recurso del Procurador general del Orden de San Francisco, solicitando se declarase, que las Comunidades de su Orden podian por sí conducir á los cementerios públicos, y enterrar en ellos los cadáveres de los Religiosos y Religiosas del mismo Orden, sin intervencion alguna de los Curas Párrocos, ni exigir éstos los derechos que pretendian; se declaró por punto general, que las Comunidades Religiosas de ambos sexôs, así las de San Francisco como todas las demas Regulares, puedan conducir á los cementerios públicos los cadáveres de sus Religiosos y Religiosas, sin perjuicio de la concurrencia que por costumbre ó derecho pueda corresponder al Cura ó Clero de la parroquia de la localidad del Convento; pero sin exigirles derechos algunos por ahora, y hasta que el Consejo determine otra cosa.

TITULO IV.

De la reduccion de asilos, y extraccion de refugiados á las Iglesias.

LEY I. consiguiente á la 6.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resolucion á cons. de 6 de Junio de 1805, y céd. del Consejo de Hacienda de 30 de Abril de 1806.

Observancia de lo dispuesto para la extraccion de reos de la Jurisdiccion ordinaria en los Tribunales y Juzgados de la Real Hacienda.

Habiendose dudado, si debia observarse con los reos sujetos á la jurisdiccion

de mi Real Hacienda lo dispuesto en la Real cédula de 11 de Noviembre de 1800, (*ley 6. de este tit.*); he resuelto, que se observe y rija igualmente en los Tribunales y Juzgados de mi Real Hacienda y sus causas; pero sin que se haga novedad en el orden observado y que se observa en la Corona de Aragon; y con la prevencion de que los art. 3, 4, 10 y 11 de la misma cédula se han de entender en tales causas con mi Supremo Consejo de Hacienda.

TITULO V.

De los bienes de las Iglesias y Monasterios, y de otras Manos-muertas.

LEY I. consiguiente á la 22.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por cédula de 15 de Octubre de 1805.

Sobre la execucion de los dos Breves de su Santidad, y reglamento para la enagenacion de bienes eclesiásticos hasta la cantidad que produzca anualmente 2000 ducados de oro de Cámara, sobre la Real Caja de Consolidacion de Vales con la especial hipoteca de todos sus arbitrios.

Con acuerdo de mi Consejo, y con motivo de la considerable disminucion que han tenido las rentas de mi Corona por las guerras, escaseces, epidemias y otras calamidades que han afligido á estos Reynos, y aun sufren en parte mis amados vasallos, tuve á bien mandar, que en mi Real nombre se hiciese presente á nuestro

muy Santo Padre Pio VII. el crítico estado de la Monarquía, los empeños en que se halla constituida, y la necesidad de proporcionar al Erario medios eficaces de ocurrir al desempeño de sus inmensas y urgentísimas obligaciones; suplicando á su Santidad, que con este importante objeto se sirviese concederme facultad para enagenar bienes eclesiásticos, con la calidad de reconocer á sus poseedores una renta igual á la que líquidamente les rindiesen los mismos bienes; estableciéndola sobre la Real Caja de Consolidacion de Vales con especial hipoteca de todos sus arbitrios. Enterado el Santo Padre de la gravedad de las causas expuestas en las preces, expidió con fecha 14 de Junio último el Breve Apostólico, que he tenido á bien mandar se inserte en la presente Real cédula. (1)

(1) Las cláusulas del inserto Breve de 14 de Junio de 1805, relativas á la gracia y facultad para la enagenacion, son del tenor siguiente: Concedemos facultad para que en todos los dominios del Rey Católico puedan enagenarse otros tantos bienes eclesiásticos, quantos sean los que en todo correspondan á la renta

libre anual de 2000 ducados de oro de Cámara, y no mas. Y para hacer esta enagenacion en las respectivas Diócesis de España, el fruto ó rendimiento anual líquido ó neto de los bienes que hayan de enagenarse, que habrá de regularse por las rentas percibidas en el espacio del quinquenio vencido desde el principio del

La necesidad y conveniencia de que en asunto tan importante se proceda con la uniformidad de sistema, y con la actividad que aseguren su execucion pronta, en alivio de los gravísimos males á que el Santo Padre destina la gracia Pontificia contenida en los Breves insertos, movieron mi Real ánimo á mandar á la Comision Gubernativa, que ha de ser executora de la parte correspondiente á mi Real Jurisdiccion, que se pusiese de acuerdo con los dos Jueces executores nombrados por el M. R. Nuncio para el establecimiento de las reglas que han de gobernar en la eleccion de los bienes eclesiásticos que se enagenen; en la averiguacion de su anual producto, deduccion de cargas y gastos, y regulacion de su ren-

ta líquida; en el reconocimiento de su importe por la Real Caxa á los actuales y siguientes poseedores; y en la sucesiva venta de las fincas desmembradas de la Iglesia y aplicadas por su Santidad á la misma Real Caxa: y tambien mandé, que formadas las reglas se pasasen al mi Consejo, para que se expidiera con insercion de ellas la correspondiente Real cédula; cuya determinacion le fué comunicada de mi orden en 10 de Septiembre próximo. La Comision Gubernativa y los Jueces executores formaron en su consecuencia de comun acuerdo, y se pasaron al mi Consejo, las reglas que tuvieron por convenientes, y se comprehenden en los capítulos que siguen.

I Luego que los Comisionados, que

año 1798 hasta en todo el año 1802, será graduado por los Arzobispos, Obispos y Ordinarios locales, juntamente con los Reales Ministros.

Y si acerca de la enunciada regulacion de la renta anual libre de aquellos bienes, ó por otra qualquiera causa se suscitaren algunas cuestiones ó dificultades de todas estas, conocerán, y las decidirán enteramente los executores, que abaxo se expresarán, de las presentes Letras nuestras. Y si aconteciere que los mismos bienes al tiempo de la desmembracion y separacion, que ha de hacerse en virtud de las presentes, estuviesen vacantes y careciesen de su Pastor, de ningun modo se dispondrá de ellos, hasta que tengan sus nuevos Rectores. Pero inmediatamente que de la manera y en la forma arriba enunciadas, se hubiere hecho la designacion de los indicados bienes, y que estuviere unánimemente arreglado ó regulado su respectivo producto ó rendimiento anual, y ademas de esto por el Rey Carlos se hubiere constituido real, efectiva y perpetuamente á qualesquiera personas y Comunidades eclesiásticas, y lugares ó fundaciones, ó legados piadosos, y tambien á los Conventos y Monasterios de las Ordenes Regulares de uno y otro sexo, aun exéntas, una igual cantidad anual correspondiente ó proporcionada á los insinuados frutos ó productos, y que ha de pagarse siempre con toda integridad, y sin ninguna ni aun la mas minima dilacion ni disminucion, aunque sea con el título de la contribucion vulgarmente llamada *valimiento*, ni de ninguna duracion, ni de los gastos que ocurran por razon de la cobranza; y libremente en dinero efectivo á cada uno por la Real Caxa de Consolidacion y Extincion (sobre lo qual grabamos la conciencia del mismo Rey Carlos); entónces, y no ántes, los enunciados bienes, sin requerirse para esto ningun consentimiento de los Prelados, ó sea Arzobispos y Obispos, Priores, Prebostes, Abades, Abadesas, Cabildos, Rectores, ó sea Curas Párrocos, Conventos, Monasterios y personas, qualesquiera que sean, que los obtengan, qualquiera dignidad eclesiástica con que se hallen distinguidos, por eminente que sea, se considerarán por desmembrados y separados de los bienes de la Iglesia, y aplicados y destinados ó apropiados libremente á la expresada Real Caxa de Consolidacion y Extincion, y para el alivio de otras gravísimas y urgentísimas necesidades del Reyno de España; segun que Nos desde ahora para entónces, en atencion á las referidas gravísimas causas, por un don de gracia especial con la autoridad Apostólica res-

pectivamente los desmembramos, y separamos y aplicamos, y apropiamos; é igualmente desde ahora para entónces substituimos y subrogamos perpetuamente la cantidad anual, que ha de pagarse por Real Erario como va arriba prevenido, en lugar de los mismos bienes desmembrados y separados, con las mismas cargas y obligaciones á favor de cada uno de sus peculiares poseedores. Hechas las quales desmembraciones y separaciones, y respectivas aplicaciones y apropiaciones, damos plena facultad al mismo Rey Carlos, para que válida, libre y lícitamente pueda, por el precio que se pudiere hallar y bien le pareciere, segun su Real prudencia y arbitrio, vender, traspasar, asignar y enagenar los mencionados bienes con sus frutos de qualquier género; los quales en la forma sobredicha serán adjudicados á la Real Corona; bien que á efecto de que el precio que se sacare de la indicada venta, traslacion, asignacion y enagenacion, se invierta puntualmente en la extincion y cancelacion de las monedas representativas, llamadas Vales Reales, y en el alivio de las gravísimas y urgentísimas necesidades del mismo Reyno; sin que ahora, ni jamas en lo sucesivo, sea lícito á ninguno de los Arzobispos, Obispos, Prelados, Prebostes, Priores, Mesas, Cabildos, Dignidades, Oficios, Ordenes aun exéntas, Monasterios, Conventos, Lugares, Fundaciones y Legados piadosos, y personas qualesquiera que sean, con qualquiera dignidad, aun eclesiástica que esten condecorados, perturbar, inquietar, ni molestar á los compradores y poseedores de los enunciados bienes, ni ocasionarles ningun, ni aun el mas mínimo perjuicio con ningun colorido ó pretexto; pues Nos tambien desde ahora para entónces con la autoridad Apostólica aprobamos y confirmamos, y queremos y declaramos que sean aprobadas y confirmadas perpetuamente las ventas, traspasos, asignaciones y enagenaciones que se hicieren, como va aquí antecedentemente prevenido, de los indicados bienes, junto con sus respectivos frutos, derechos y obviaciones á favor de los que los adquirieran, y sucesivamente los obtengan; supliendo con la misma autoridad Apostólica plenamente todos y cada uno de los consentimientos de qualesquiera interesados, y qualesquiera otros defectos, así de hecho como de derecho, ó de solemnidades que debiesen observarse en las enagenaciones de los bienes eclesiásticos: y declarando al mismo tiempo, que las enunciadas desmembraciones, separaciones, aplicaciones, apropiaciones y ventas, traspasos, asignacio-

serán nombrados por mí á propuesta de la Comision Gubernativa en las diferentes diócesis de España, reciban su nombramiento y esta Real cédula, en que se insertan los Breves de su Santidad de 14 de Junio último, con el nombramiento de los Jueces executores hecho por el M. R. Nuncio de la Santa Sede en estos mis reynos, procederán á averiguar quáles y cuántos son los bienes eclesiásticos que por su tenor se sujetan á la venta, y existen en el territorio de su comision; formando lista de ellos en que se explique su calidad, renta anual, situacion y proporciones que los hagan mas ó ménos estimables en el concepto de los vecinos del pueblo, su comarca ó provincia, y por las cuales pueda esperarse una pronta y

ventajosa venta, á fin de que con este conocimiento, se haga la eleccion de los que convengan.

2 En esta lista comprehenderán los Comisionados todos los bienes que gocen los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Prebostes, Dignidades, Cabildos de Catedrales ó Colegiatas, Abades, Abadesas, Monasterios y Conventos de ambos sexos, Mesas Capitulares, fábricas de Iglesias, Parroquias y Párrocos.

3 Igualmente deberán comprehender los bienes eclesiásticos que pertenezcan á cofradías, congregaciones, capítulos ó corporaciones de clérigos que con qualquiera otro nombre existan en los pueblos; las que correspondan á beneficios, oficios y capellanías colativas, y toda otra fun-

nes y enagenaciones, y todas y cada una de las demas cosas que aconteciere hacerse en virtud de las presentes, subsistan perpetuamente en su vigor y fuerza, y surtan y produzcan sus plenos é integros efectos, y deban en todos los tiempos sucesivos ser observadas inviolable y perpetuamente por qualesquiera Arzobispos, Obispos, Priores, Prebostes, Cabildos, Abades, Abadesas, Monasterios, Conventos y demas á quienes de qualquier modo concierna lo sobredicho, en la propia forma que si por Nos, y por la Sede Apostólica hubiesen sido los insinuados bienes desmembrados, separados, aplicados, apropiados y vendidos, traspasados, asignados y enagenados con las solemnidades requeridas por el Derecho y demas necesarias; y juntamente que tanto estas, quanto las presentes Letras, no puedan por ninguna causa ser tachadas de los vicios de obreccion y subreccion ó nulidad, ni de falta de intencion en Nos, ni de otro ningun defecto por substancial que sea, ni impugnadas; ni puedan los Arzobispos, Obispos, Priores, Prebostes, Cabildos, Abades, Abadesas, Monasterios, Conventos, ni qualesquiera otros apelar ó reclamar de modo alguno de lo sobredicho, ni de qualesquiera cosas que en virtud de estas Letras se hicieren, con ningun pretexto, aunque sea de lesion enormísima, ó por otra qualquiera causa, aunque sea la mas justa; ni puedan de ningun modo sufragarles ó servirles ningunos privilegios, aun concedidos por la enunciada Sede, baxo qualquiera fórmula ó forma y expresion de palabras, á efecto de que puedan por ninguna causa, aunque sea á pretexto de lesion enormísima, ó de no haberse observado las solemnidades requeridas por el Derecho, anular, invalidar, revocar ó impugnar las insinuadas desmembraciones, separaciones y aplicaciones, apropiaciones y ventas, traspasos y asignaciones, y demas cosas en qualquier tiempo hechas por el mencionado Rey Carlos, ó por la persona ó personas que por él se diputaren. — Por lo qual por este escrito Apostólico mandamos á las dos personas constituidas en dignidad eclesiástica preeminente, que en virtud de otras Letras expedidas en igual forma de Breve con fecha de este mismo dia serán nombradas por nuestro venerable hermano Pedro, Arzobispo de Nicea, Nuncio nuestro y de la Sede Apostólica en los reynos de España; que procediendo juntamente por sí mismos, ó por medio de otro ú otros por nuestra autoridad, pongan al dicho Rey Carlos, ó á su apoderado en su nombre, sí, y des-

pues que haya respectivamente asignado y constituido á cada uno, segun va arriba expresado, la indicada compensacion, en la posesion corporal, real y actual de los bienes desmembrados y separados, como tambien queda arriba especificado, y de sus derechos y pertenencias; á fin de disponer de ellos, segun va asimismo arriba dicho, sin solicitar para ello el consentimiento de persona alguna; y despues de puesto en ella, le defiendan en la misma, haciendo que se acuda integramente al Rey Carlos, ó al enunciado su apoderado, y á todos aquellos á cuyo favor aconteciere hacerse las referidas ventas, traspasos, asignaciones y enagenaciones, con los frutos, rentas, productos, derechos y obviaciones de dichos bienes; y publicando solemnemente las presentes Letras nuestras, y todo lo contenido en ellas, siempre que fuere necesario, y sean para ello requeridos por el mismo Rey Carlos, ú otro ú otros en su nombre, ó por aquellos á cuyo favor se hicieren las citadas ventas y enagenaciones; y asistiéndoles con el auxilio de una defensa eficaz en razon de lo aquí antecedentemente referido, hagan que el propio Rey Carlos, y qualesquiera otros que en qualquier tiempo los obtuvieren, gocen y disfruten pacíficamente de todas y cada una de las cosas arriba expresadas; y que sean por todo firme é inviolablemente observadas las desmembraciones, separaciones, aplicaciones, apropiaciones y ventas, traspasos y asignaciones y enagenaciones hechas en virtud de las presentes, y qualesquiera cosas que de ellas se sigan; sin permitir que los poseedores que en qualquier tiempo fueren de los enunciados bienes, sean indebidamente molestados, perturbados ó inquietados en su razon por los Arzobispos, Obispos, Prebostes, Priores, Cabildos, Abades, Abadesas, Monasterios, Conventos, ó qualesquiera otros; reprimiendo á qualesquiera contradictores y contumaces, y á los que les den á estos consejo, auxilio ó favor por los conducentes remedios del Derecho, y aun por medio de multas pecuniarias, que serán arregladas y aplicadas á su arbitrio, é invocando tambien para esto, si fuere necesario, el auxilio del brazo seglar. Pero es nuestra voluntad, que el mencionado Rey Carlos cuide diligentemente de que los enunciados bienes no sean de ningun modo enagenados por sus Ministros, ni de otra manera alguna en virtud de las presentes, fuera del valor correspondiente á la renta anual libre de 2000 ducados de oro de Cámara, grabando sobre esto su conciencia.

dacion ó establecimiento puramente eclesiástico.

4 Las fincas pertenecientes á ciertas fundaciones piadosas que de hecho corren sujetas á la Jurisdiccion eclesiástica, aunque falta el auto de Juez competente en que se constituyan por dote del beneficio, capellanía colativa, ú otro establecimiento verdaderamente eclesiástico que por el mismo auto se erija, por lo que pudiera decirse que conservan su calidad de profanas ó laicas, pero que sin embargo se han remitido por la Comision Gubernativa los expedientes sobre su venta á los Juzgados eclesiásticos, se tendrán presentes por los Jueces Comisionados, y comprehenderán en las citadas listas, notando en ellas su clase.

5 La eleccion de las fincas comprendidas en las indicadas listas podrá hacerse, bien hayan sido destinadas por los fundadores para dote del establecimiento eclesiástico que se propusieron por objeto, ó bien se hayan comprado con dinero de los fundadores mismos por las Iglesias, Monasterios, Comunidades y poseedores para hipoteca y seguridad de la fundacion que contenga la carga, gravámen ó servidumbre que el referido fundador señaló y les impuso por testamento, codicilo ú otra última voluntad, ó por donacion ó qualquiera contrato entre vivos.

6 De estas reglas generales se exceptuan los bienes raices ó fincas que correspondan con pleno, libre y alodial derecho á las Iglesias Catedrales y Colegiatas, y á los Monasterios y Conventos así de hombres como de mugeres, y tambien los fundos llamados vulgarmente *mansos* asignados para la manutencion de las Iglesias Parroquiales ó para las cóngruas de los Párrocos, los quales en algunas provincias de España se conocen tambien con los nombres de mansos canónicos, dextros ó iglesiarios; cuyas fincas no se sujetan á la enagenacion, segun el tenor del Breve que queda inserto expedido al M. R. Nuncio para la nominacion de las personas eclesiásticas executoras del Breve de concesion.

7 De consiguiente los Jueces Comisionados no las incluirán en sus listas; pero sí deberán averiguar y poner en ellas los bienes que posean las Iglesias Catedrales y Colegiatas, y los Monasterios y Con-

ventos de uno y otro sexó con alguna carga, gravámen ó servidumbre diaria, semanal, mensual, anual ó de otro modo, ó cuyos frutos y rendimientos no los perciban por entero, por tener obligacion de aplicar parte de ellos á otro objeto, todo en virtud de disposicion de los donadores ó fundadores; respecto de que en qualquiera de estos casos no se verifica gozarlos los poseedores eclesiásticos con pleno, libre y alodial derecho.

8 Tampoco incluirán los Comisionados en dicha lista los Señoríos temporales, y jurisdicciones que poseen las Mitras y otras Dignidades eclesiásticas de estos Reynos; ni los oficios, rentas, fincas, efectos y derechos anexos á ellos y emanados del Real Patrimonio, de que trata la Real cédula expedida por mi Consejo de la Cámara en 25 de Febrero de este año. (*es la ley 14. tit. 1. lib. 4.*)

9 Si para averiguar la calidad de la fundacion ó de los bienes, ó las cargas y gravámenes que éstos tengan, necesitan los Comisionados algunas noticias que no puedan adquirir por sí, las pedirán á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Abades, Abadesas, y Prelados Seculares y Regulares con jurisdiccion ordinaria ó privilegiada, y estos se las facilitarán, haciendo que se les pongan de manifesto los libros de visita, las tablas de cargas ó memorias, los repartimientos del Subsidio, y los demas papeles que necesiten; y que se les den las relaciones juradas que pidieren á los poseedores de los mismos bienes, qualquiera que sea su dignidad.

10 Formada por el Comisionado la citada lista, la remitirá á la Comision Gubernativa á la mayor brevedad posible, indicando los bienes que estime mas apropiado segun lo prevenido en el capítulo primero; pero sin embargo avisará de ocho á ocho dias de todas las fincas que fuere descubriendo, con la propia indicacion é informe de sus calidades.

11 Para esta operacion no se detendrá el Comisionado á investigaciones prolixas ni judiciales; y contentándose con las noticias de las quótas en que esten arrendadas las fincas, con los informes que le dieren de lo que produzcan en administracion, y con la opinion que en el pueblo ó provincia se tenga de la buena, mediana, ó ínfima calidad de la fin-

ca, y concurrencia que puede haber de compradores, reservará para la liquidacion de las rentas, que ha de servir de presupuesto á la recompensa, el exámen legal, menudo y exácto de los legítimos rendimientos y cargas de las fincas.

12 La Comision Gubernativa con presencia de estas listas ó noticias elegirá los bienes que comprehendan en el todo ó parte, si los hallare de las calidades necesarias; y en este caso, luego que el Comisionado reciba sus órdenes, hará entender la eleccion por medio oficio al muy Reverendo Arzobispo, Reverendo Obispo, Prelado ó Juez eclesiástico ordinario ó exénte, á cuya jurisdiccion toque, y al poseedor de los bienes electos, sea Comunidad, Dignidad ó particular, para que se proceda á la averiguacion y liquidacion de la renta que han producido en el quinquenio desde 1798 hasta 1802, y á sacar la que corresponde al año comun de él, hechas todas las deducciones legítimas.

13 En caso de que el poseedor de la finca ó el Juez eclesiástico promuevan alguna dificultad en que se lleve á efecto la eleccion, propondrán de un acuerdo las razones que uno y otro tengan respectivamente para sostenerla ó impugnarla, á fin de que en su vista puedan los Jueces executores del citado Breve resolver la duda y tomar las demas providencias convenientes, declarando si están ó no comprendidas en su decision general, ó en las excepciones que contiene.

14 Resuelta la duda de la reclamacion, ó no habiéndola, procederán los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos ú Ordinarios locales, ó las personas que deleguen puntualmente con los Comisionados Régios, á graduar el rendimiento líquido anual de la finca elegida, por el producto que haya tenido en el citado quinquenio.

15 Para ello se tendrá á la vista la escritura ó escrituras de arrendamiento de la misma finca, si hubiese estado arrendada, en todos ó cada uno de los cinco años; las cuentas que hayan dado los administradores, si se hubiere administrado en el mismo tiempo, con los recados de su justificacion y providencia de aprobacion, y relaciones juradas de los poseedores en el caso de que por sí propios hayan corrido con el cultivo de la hacienda, recoleccion y venta de sus frutos; y ademas será un

preciso comprobante de la produccion de la finca el recibo de los diezmos pagados en el mismo quinquenio, y tiempo en que se haya administrado.

16 Quando la renta del arrendamiento sea en frutos, dará el arrendatario una relacion jurada del valor que tuvieron en los tres tiempos de cosecha, intermedio, y próximo á la siguiente, que son las tres épocas mas oportunas y regulares para deducir el precio medio que pueda servir de regla á fixar su valor anual. Al mismo tiempo se pondrá testimonio por el Escribano de Ayuntamiento del pueblo donde se halle la finca, ó del mas inmediato en que hubiere mercado, en que se exprese el precio que hayan tenido los granos y frutos de su produccion en los tres tiempos citados; y este comprobante lo será tambien de las relaciones juradas que han de dar los poseedores, quando manejen por sí las haciendas, y de las cuentas que dieren sus administradores.

17 La falta de escritura ó papel de arrendamiento y de cuentas se suplirá por relaciones juradas de los mismos arrendatarios ó administradores junto con la de los poseedores; y en este caso, ó en qualquiera otro en que habiendo ó no aquellos documentos, tuviesen el Comisionado ó el Ordinario eclesiástico alguna duda que no puedan resolver por sí mismos, se recibirá informacion de testigos juiciosos, inteligentes é imparciales, ó se exáminarán peritos que declaren lo que les conste, y entiendan sobre los puntos dudosos para ponerlos en la claridad conveniente, de modo, que ni se perjudique al poseedor de la finca en su renta, ni se grave á la Consolidacion con una recompensa superior á la que realmente merece.

18 Por estos y otros medios que las costumbres ó las circunstancias de los pueblos pueden facilitar, se apurará el valor ó rendimiento anual de los bienes en dichos cinco años; mas para liquidarle, resta que el Comisionado y el Juez eclesiástico sean igualmente diligentes en investigar las cargas perpetuas ó temporales, ciertas ó variables que tengan sobre sí la finca y sus rendimientos, á fin de señalar la quíota neta que queda para el poseedor, y que constituye la verdadera renta que se le ha de pagar en lo sucesivo, sin descuento alguno por la Consolidacion.

19 Á este fin es preciso reconocer los

títulos de pertenencia de la finca, la fundacion á que toca, y los repartimientos del Subsidio ó de otra qualquiera contribucion á que se sujeten sus valores, cuyas cargas deben ser conocidas y ciertas, bien sean reales, como censos, treudos, enfiteusis y otras semejantes, ó bien puedan recibir diversa acepcion y nombre, qualquiera que sea, y se les dé por el fundador ó el Ordinario eclesiástico al crear y erigir el beneficio ó capellanía, ó al dotar el aniversario, la fiesta de Iglesia, la prestacion de limosna ó de dotes, ú otras cargas impuestas á los bienes dexados á las Iglesias ó Monasterios, Comunidades ó Beneficiados á favor de un tercero, para que se utilizáran de las partes restantes despues de cubiertas estas obligaciones.

20 Otras cargas son inseparables de las mismas fincas, ya para su conservacion y beneficio, ó ya para su administracion ó manejo; por exemplo, en fincas urbanas ó artefactos de molinos, batanes y otros semejantes, ó en predios rústicos en que haya acequias ó presas, es necesario regular los gastos precisos para su reparacion continúa, y para mantener corriente su habitacion ó uso. El salario del administrador, recaudador ó personas empleadas en el cuidado de la finca y sus rendimientos, es partida que disminuye la renta del poseedor, y debe deducirse para sacar el líquido de ella; y lo mismo sucede con los expendios que ocasione el cultivo, quando los poseedores lo executen de su cuenta, como se verifique si se administran las fincas, el panerage y apaleo de los granos, el costo de guardas, los huecos de los inquilinatos en las fincas urbanas, y otros gastos de esta especie.

21 Por último han de constar en estas averiguaciones todas las causas ó motivos, que por qualquier título ó nombre minoren la renta del poseedor, regulando su producto ó rendimiento neto anual, de que se le ha de establecer la equivalente recompensa; á cuyo fin, y que conste en debida forma, se instruirá un expediente informativo de cada finca en que los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y Ordinarios locales, juntamente con los Ministros Comisionados por mí, declaren unánimemente el verdadero producto líquido anual de ella.

22 En caso de no haber conformidad entre los Ordinarios eclesiásticos y los Co-

misionados Régios, ó de suscitarse algunas questões ó dificultades acerca de la enunciada regulacion de la renta líquida anual de dichos bienes, ó por otra qualquiera causa, se remitirá el expediente para su decision á los Jueces executores, exponiendo las razones y fundamentos de la diversidad de opiniones ó de las dificultades que ocurrieren, para que así puedan resolverse con el conocimiento necesario, y con la brevedad que exige la materia.

23 Si al tiempo de regular la renta de los bienes elegidos para la enagenacion estuviesen vacantes y careciesen de su Pastor, se suspenderá esta diligencia y las subsiguientes hasta que tengan sus nuevos Rectores, conforme se previene en el Breve.

24 Para que la desmembracion y venta no exceda en lo mas mínimo de la quíota de doscientos mil ducados de oro de Cámara, ó sean seis millones quatrocientos mil reales de vellon de renta libre anual señalada por el Santo Padre, dispondrá la Comision Gubernativa, que por la Contaduría general de la Real Caxa de Consolidacion se lleve una razon exáctísima de la renta líquida de los bienes que se vayan eligiendo para la venta, en la que se cesará inmediatamente que se haya llenado la expresada quíota.

25 Declarada que sea la renta libre anual de la finca, se dará aviso puntual de su importe á la Comision Gubernativa por el Ordinario eclesiástico y el Juez comisionado, quando se hallen conformes en su regulacion, y por los Jueces executores quando por discordar aquéllos la determinen estos por sí mismos; y al propio tiempo avisarán con la debida distincion el importe anual, que en la liquidacion hecha resulte deber invertirse en los objetos piadosos á que el donador ó fundador la haya destinado, gravando con esta obligacion las mismas fincas, y á sus poseedores con el trabajo y cuidado de su inversion.

26 En virtud de estos avisos se otorgará y firmará por el Presidente de la referida Comision Gubernativa á favor de los antiguos poseedores de los bienes elegidos una escritura, por la qual se obligará la Real Caxa á satisfacer con puntualidad y sin desfalco alguno la cantidad anual á que ascienda dicha renta líquida, hipotecando á su seguridad todos sus arbitrios;

y de este documento se tomará la competente razon en la Contaduría general de Consolidacion de Vales. Con las propias formalidades se otorgará tambien por el mismo Presidente de la Comision Gubernativa otra escritura ó escrituras de reconocimiento del insinuado importe destinado á objetos piadosos á favor de los mismos poseedores eclesiásticos, ó de los cumplidores respectivos con título de patronato ó sin él, á quienes serán entregadas, para que cobrándolo de la Real Caxa á los plazos que se señalen, puedan distribuirlo conforme á lo prescrito en la fundacion, del propio modo que lo hacian ántes con el producto de la finca elegida, que desde entónces quedará libre de tal gravámen.

27 Practicadas estas diligencias se reunirán las escrituras de recompensa y reconocimiento al Comisionado Régio que haya entendido en la regulacion, para que haga se tome tambien la razon de ellas en la Contaduría particular de la misma Consolidacion en la provincia á que correspondan; y se comunicará noticia de haberse hecho á los Jueces executores, á fin de que constando el establecimiento de la recompensa, se finalicen los citados expedientes de regulacion de rentas, y den inmediatamente la órden para que se ponga en posesion corporal, real y actual de los bienes elegidos y desmembrados al Comisionado Régio en nombre de la Real Caxa de Consolidacion, y pueda ésta en su consecuencia disponer de ellos libremente.

28 La citada escritura de recompensa se entregará por el Ordinario eclesiástico y el Comisionado Régio á la Dignidad, Comunidad ó persona que poseía los bienes elegidos, y en cuya renta regulada se subroga la que se asigna por este instrumento, que conservarán como título de su pertenencia, dexando recibo de haber pasado á su poder á continuacion del mismo expediente: pudiendo ser entregadas tambien las escrituras de reconocimiento de cargas por el Ordinario eclesiástico á los cumplidores respectivos.

29 La persona eclesiástica, la Dignidad, la Comunidad ó establecimiento que ántes poseía los bienes que se elijan, desmembren y vendan, queda privada por el tenor del Breve de toda accion y derecho á reclamar su propiedad, goce ó posesion, á pretender la nulidad de la desmembracion y venta, y á impugnar la re-

gulacion de sus valores y renta anual, que se le señale en el expediente de regulacion, con ningun motivo ni pretexto de hecho ni de derecho; reduciéndose puramente su accion á percibir íntegramente de la Real Caxa de Consolidacion la renta de recompensa por años, medios años, ó á otros plazos que se señalen, y explique la escritura de establecimiento, por quedar esta renta substituida y subrogada perpetuamente en lugar de los mismos bienes desmembrados, separados y vendidos, y sujetos los perceptores de ella á cumplir las mismas cargas y obligaciones personales que tenian y cumplian quando poseían los bienes enagenados, obligaciones y cargas que les impone la dignidad, oficio, beneficio, fundacion ó establecimiento eclesiástico, por razon del qual percibian la renta líquida de los bienes de que se les establece recompensa, y que son diferentes de las deducidas en la regulacion de la expresada renta líquida anual, y reconocidas ya en escritura separada por la Real Caxa á favor de los respectivos interesados, cumplidores ó distribuidores de su importe.

30 Á fin de que en el otorgamiento de las escrituras de recompensa haya expedicion y uniformidad, estarán impresas con los insertos y explicaciones necesarias y convenientes en papel del sello de oficio, y en la forma que corresponde, con los huecos oportunos para llenarlos con los nombres y distintivos de la persona, Dignidad, Comunidad ó establecimiento eclesiástico que poseía los bienes desmembrados, con su situacion y linderos; con la renta líquida anual que se haya regulado por el Ordinario local y Ministro Régio que hubieren entendido en el expediente; y con el pueblo y plazo en que se ha de hacer el pago de dicha renta, regulada á los actuales y siguientes poseedores que obtengan la misma dignidad ó beneficio, ó sea á la Comunidad ó establecimiento á quien perteneceria disfrutar los mismos bienes si no hubiera habido tal venta; expresándose que en su lugar queda subrogada la citada renta líquida de recompensa, y que han de cobrarla siempre íntegra, sin la mas mínima dilacion ni disminucion, por no deber estar sujeta á valimiento ni á otra reduccion alguna, conforme se previene en el Breve, y he tenido á bien mandarlo.

31 Verificada la regulacion de la renta libre de los bienes así designados ó elegidos, y el otorgamiento de la obligación y escritura de asignacion de igual cantidad anual y perpetua para su poseedor, se considerarán desde luego, segun el tenor de los citados Breves, por desmembrados y separados de los bienes de la Iglesia, y por aplicados y apropiados libremente á la expresada Real Caja de Consolidacion y Extincion de Vales en mi nombre, sin requerirse para ello ningun consentimiento de los Prelados, ó sea Arzobispos y Obispos, Priores, Prebostes, Abades, Abadesas, Cabildos, Rectores ó Curas Párrocos, Conventos, Monasterios y personas que los obtengan, qualquiera que fuere la dignidad eclesiástica con que se hallaren distinguidos, por eminente que sea; y en su consecuencia, y de las órdenes que para ello habrán dado los Jueces executores, se pondrá inmediatamente al Comisionado Régio en la posesion corporal de los mismos bienes, notificándose á sus arrendatarios ó cultivadores, que desde allí adelante tengan á la propia Real Caja por dueño absoluto de ellos: todo segun expresamente lo declara su Santidad.

32 Desde el dia del otorgamiento de las escrituras de recompensa y reconocimiento todos los frutos que produzcan los bienes así elegidos, desmembrados y apropiados á mi Real Caja de Consolidacion han de entrar en los Comisionados de ésta; los cuales darán para su administracion ó arrendamiento, entretanto que se efectúa la venta, las providencias que estimen convenientes, con arreglo á las órdenes que les comunique la Comision Gubernativa; y cuidarán de percibir de los frutos pendientes la prorata respectiva segun la costumbre del pais.

33 Aunque el expediente de regulacion de la renta de los bienes elegidos suministrará el dato seguro ó aproximado de todos sus rendimientos, y por ellos se podria formar capital de su estimacion en venta; sin embargo, como en esto pudieran ocurrir algunas dificultades, para evitarlas, y consultando á la mayor seguridad de los compradores, se tasarán los bienes por peritos que nombre de oficio el Juez Comisionado ántes de la subhasta.

34 Estos peritos han de comprender y apreciar precisamente y con la de-

bida distincion en las tasaciones, conforme á las reglas que establece la Real cédula de 17 de Enero de este año, y á la costumbre del pais, todas las cargas reales y perpetuas á que se hallen afectas las fincas, como son censos, enfiteusis, treudos, foros &c., de que dará razon puntual el expediente de regulacion de la renta líquida de recompensa, que se habrá reconocido á los antiguos poseedores eclesiásticos.

35 Hecha la tasacion se pondrán carteles anunciando la venta, no solo en el pueblo donde esten sitos los bienes, si no tambien en los de la circunferencia, especialmente donde se presuma podrá haber personas pudientes, y en las cabezas del partido y de la provincia respectiva; y para que ademas se publique en la gaceta y periódicos de la Corte, remitirán los Jueces Comisionados notas expresivas de las circunstancias de las fincas, y del dia y parage en que se ha de hacer el remate á la Comision Gubernativa, la qual dispondrá su insercion en ellos. En estos anuncios se señalará para la subhasta el término de treinta dias, con la prevencion de que cumplidos, al tercero dia siguiente, habiendo postores, se procederá al remate, celebrándose en las Casas Consistoriales, segun la forma de Derecho; y en caso de no haber postores, se continuará la subhasta por otros quince dias, anunciándola de nuevo en la propia forma.

36 No se admitirán posturas que no cubran el valor total de las cargas, y las dos terceras partes á lo ménos del líquido que resulte despues de deducidas del importe de la tasacion; ni se concluirá ningun remate que no llene en metálico estas dos cantidades, ó el todo de la tasa en Vales.

37 Al tiempo de hacer las posturas declararán precisamente los compradores si han de deducir ó no el importe de las cargas á que esten afectos los bienes, llevándolos con ellas si lo han de entregar de ménos al satisfacer el precio del remate, ó libres de todo gravámen si han de pagar el total precio de la venta; y se tendrá por mejora en las subastas la oferta de aprontar el todo sin deduccion de cargas.

38 Una vez hecha qualquier postura con oferta del todo ó porcion determina-

da de su importe en metálico, no se admitirá ya ninguna puja que no lleve la condicion de haber de entregar en la propia especie la cantidad ofrecida: y por el contrario se considerará como mejora la oferta de pagar en efectivo qualquiera parte del valor de la postura que estuviere hecha á Vales.

39 El Comisionado, que ha de ser el Juez de estas subastas, remitirá el expediente dentro de tercero dia preciso siguiente al remate á la Comision Gubernativa para su aprobacion, ó la providencia que convenga conforme al estado y legitimidad de las diligencias; con la qual se le devolverá sin el menor retraso; señalando al mismo tiempo los términos correspondientes para las tres mejoras del medio diezmo, diezmo entero y quarto, que serán admitidas en estas ventas.

40 El Juez Comisionado, luego que reciba el expediente, publicará la aprobacion del remate y señalamiento de términos hecho por la Comision Gubernativa para dichas pujas, á fin de que corridos pase la persona, en cuyo favor se haya celebrado, á hacer inmediatamente el pago de su importe al Comisionado Administrador de la Real Caxa mas inmediato, recogiendo de él recibo interino, que le servirá de resguardo hasta que se le entregue una certificacion de la Contaduría general de Consolidacion, por la qual conste en debida forma el enunciado pago; y con precisa exhibicion de ella el Juez Comisionado le pondrá en posesion de la finca, y otorgará la correspondiente escritura de venta; entregándole tambien los títulos de pertenencia de la finca que poseyesen los antiguos dueños, y que deben haber presentado, como se indica en el capítulo 19.

41 Para que los compradores no experimenten dilacion en tomar posesion de las fincas, despues que hayan satisfecho el remate, deberán los Comisionados dar aviso á la Contaduría general de Consolidacion del percibo de su precio, precisamente en el correo inmediato al dia en que se verifique la entrega; en la inteligencia de que la certificacion se les remitirá á correo seguido por la Contaduría general.

42 Estos contratos así celebrados serán inviolables, y contra ellos no se pondrán por mí ni por la Real Caxa en

ningun tiempo demandas de lesion, ni otras dirigidas á invalidarlos: tampoco tendrá nunca lugar por estas ventas accion alguna de retracto ó incorporacion de parte de la Corona, ni de tanteo, ni otra preferencia; ni finalmente estarán jamas sujetos los bienes, que en virtud de tales ventas pasen á poder de sus compradores, á valimiento alguno, porque han de permanecer siempre en su naturaleza y qualidad de bienes particulares.

43 Para que sea uniforme el tenor de las escrituras de venta, y su otorgamiento mas breve y ménos costoso á los compradores, estarán impresos los exemplares de ellas en papel sellado con insercion del Breve, y de las demas cláusulas oportunas á la seguridad de los compradores; de modo, que solo haya que llenar los huecos que se dexen en claro, y en que se pondrán de letra manuscrita los nombres del poseedor, Dignidad, Comunidad ó establecimiento eclesiástico á que pertenecian las fincas, su situacion y linderos, precio de la enagenacion, dia en que se hizo el pago, nombre del comprador, y las cargas reales con que la ha recibido, si llevare algunas. La impresion de los exemplares de escrituras se hará en papel del sello quarto; y en caso de que el importe de la venta exija sello superior, abonará el comprador á la renta del papel sellado la restante cantidad, poniéndose por nota en la misma escritura, y quedando el Juez Comisionado obligado baxo su responsabilidad á que así se execute.

44 Estas escrituras contendrán ademas de las cláusulas ordinarias de seguridad, que se acostumbran poner en los instrumentos de esta especie, y de las extraordinarias contenidas en los capítulos de esta mi Real cédula, la de eviccion y saneamiento absoluto que ha de hacer la Real Caxa de Consolidacion á los compradores, saliendo en su lugar y nombre á la voz y defensa de qualquiera accion, recurso ó instancia que se deduzca contra dichos bienes, y quedando responsable á todas sus resultas; pues verificado que sea el pago del precio de la venta, no ha de ser inquietado el comprador por derecho ni título alguno en la posesion de su finca, así por parte de la Real Hacienda como de los particulares; dirigiéndose qualquiera accion que se dedu-

xere contra la Real Caxa, que será la que deberá responder de ello, y los Jueces mandarlo, sin que para esto sea necesario juicio ni discusion alguna, bastando solo el constar que ha sido finca vendida en virtud y á consecuencia de dicho Breve. Y si se moviere pleyto sobre el dominio de la finca enagenada, ó se la persiguere por qualquier derecho de hipoteca, afección ó gravámen, los efectos de la sentencia executoriada en favor del demandante recaerán sobre la renta líquida, regulada y subrogada en lugar de la finca, y de ningun modo sobre ésta por haber sido desmembrada y vendida, en el concepto de corresponder en propiedad al poseedor eclesiástico, y no ser responsable á tales gravámenes; y porque mi Real ánimo y terminante voluntad es que en ningun caso se turbe la pacífica posesion y propiedad de los nuevos compradores.

45 Como estas ventas se verifican quando ya estan los bienes secularizados y profanos, y conviene que se guarden las leyes en favor de sus compradores; declaro, para evitar dudas, que los Escribanos ante quiénes se otorgaren las citadas escrituras de enagenacion, están obligados á observar en ellas lo mandado en la Real pragmática-sancion de 31 de Enero de 1768 (*ley 3. tit. 16. lib. 10.*) acerca de la toma de razon en la Contaduría de hipotecas del partido á que pertenezca el pueblo en que esten sitos los bienes que se vendan.

46 Los derechos que se devenguen en la actuacion del expediente de subasta, y otorgamiento de la escritura de venta, se pagarán por el comprador solo, ó por éste y la Real Caxa, conforme á la práctica del país, á excepcion del pago de peritos que executen las tasaciones, el qual se hará siempre por la Caxa, así como los licitadores deberán abonar de su cuenta los derechos que causen con sus pretensiones particulares.

47 Se declaran inadmisibles las posturas y mejoras que se hicieren directa é indirectamente por los Jueces Comisionados, Escribanos y Oficiales del Juzgado, por los tasadores y por los Comisionados administradores de la Real Caxa, y de consiguiente nulos los remates que se celebren á su favor.

48 Las subastas se autorizarán por

el Escribano de la comision si fuere Notario de los reynos, como es indispensable para actuar en todos los pueblos á que se extienda; y en caso de no serlo, se executarán ante el Escribano del Número que elija el Juez Comisionado en el pueblo en que estén sitos los bienes.

49 Quando las fincas elegidas y desmembradas que se destinen á la venta, fuesen de corto valor de modo que no pase cada una de seis mil reales vellon á lo ménos, bien fuesen pertenecientes á una sola dignidad, beneficio, comunidad ó fundacion, ó bien hubieren correspondido á varias, se podrán publicar á un mismo tiempo en los carteles que se fixen convocando postores; bien que esto no quita el que en cada una haya de haber su respectiva tasacion y remate.

50 En las primeras ventas de los bienes separados de la posesion de los referidos establecimientos y dignidades eclesiásticas en virtud del Breve que queda inserto, no se exigirán alcabalas ni cientos; ni tampoco se adeudarán laudemios ó veintenass á favor de los dueños directos, los quales no tendrán derecho al tanteo, ni á que caiga la finca en comiso por no haber precedido su licencia para esta venta.

51 Los Jueces Comisionados procederán en todos los puntos de su comision, que se han expresado, en virtud de las facultades que para ello les concedo con absoluta inhibicion de las Justicias y Tribunales del Reyno, y de los Intendentes; explicándose así ademas en la Real cédula que se les expida, y en el título de su nombramiento.

52 Los expedientes de la regulacion de renta líquida anual de los bienes eclesiásticos que se desmembraren y vendieren, luego que estén concluidos, se custodiarán por los respectivos Ordinarios locales en el parage en que lo dispusieren, pero con la condicion de manifestarlos siempre que por parte de la Real Caxa, ó de los Ministros Reales, se pidieren, por necesitar algunas de las noticias que contengan; y los de subasta y remate serán remitidos ó entregados por los respectivos Jueces Comisionados, á medida que fueren concluyendo sus encargos, á la Comision Gubernativa, la qual dispondrá que se coloquen y conserven reunidos en su archivo.

Y para la execucion de lo dispuesto en

los expresados Breves, y en las reglas que van insertas, acordó el mi Consejo se expidiese esta mi cédula. Por la qual encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, sus Provisores, Vicarios y demas Jueces eclesiásticos de estos Reynos con jurisdiccion *vere nullius*, á los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas, Catedrales y Colegiatas, y á los Superiores ó Prelados de las Ordenes Regulares y de las Militares, Párrocos, y demas personas eclesiásticas á quienes en qualquier manera corresponda, concurren cada uno por su parte en lo que le toca á la puntual observancia de los referidos Breves, y de las reglas que quedan insertas en esta mi cédula; la qual será dirigida tambien por los expresados executores eclesiásticos á los mismos Prelados seculares y regulares, Cabildos y demas, con las órdenes que tengan por oportunas al cumplimiento de lo tocante á la Jurisdiccion eclesiástica, en uso de las facultades con que se hallan autorizados por su Santidad. Y mando á todos los Jueces y Justicias de estos mis Reynos, y demas á quienes pertenezca, guarden y cumplan esta mi Real cédula en lo que les corresponda, sin contravenirla, ni permitir se contravenga en manera alguna; prestando en caso necesario los auxilios correspondientes á que tenga su debida execucion, y dando al efecto las órdenes y providencias que se requieran.

LEY II.

D. Carlos IV. por Real orden de 4 de Abril comunicada en circular de Mayo de 1806.

Sobre que no se proceda á la venta de bienes propios de los Conventos y Hospitales del Orden de S. Juan de Dios.

Á consecuencia de las representaciones que el General y otros Prelados de la Orden de San Juan de Dios me hicieron últimamente; he tenido á bien mandar en Real orden comunicada á la Comision Gubernativa con fecha 4 del pasado, que no se proceda á la venta de los bienes, que en plena propiedad pertenecen á los Conventos de la Orden de San Juan de Dios, ya sea por haberlos adquirido los mismos Conventos, ya porque se hayan dexado á éstos para invertir sus productos en la manutencion de sus Religiosos, ó ya porque se los hayan dexado para destinarlos á los objetos de su instituto hospitalario, aun quando esten afectos á alguna otra carga piadosa que no destruya la calidad del dominio propio de la Orden; continuando en la posesion en que se hallaban de las fincas de esta naturaleza, al tiempo de expedirse la Real orden de 30 de Septiembre último, respectiva á la enagenacion de fincas propias de hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusion y de expósitos.

TITULO XVII.

Del Patronato Real; y conocimiento de sus negocios en la Cámara.

LEY consiguiente á la 17.

D. Fernando VI. en Aranjuez por Real cédula de 22 de Abril de 749.

Particular conocimiento de la Cámara, y de un Ministro Subdelegado de ella en las causas del Real Monasterio del Escorial.

Teniendo presentes las circunstancias con que el Señor Rey Don Felipe II. fundó el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que estan manifestando, que así el dicho Monasterio como sus bienes y fundaciones son propias de mi Corona,

con dominio tan directo que sin mi Real consentimiento de lo perteneciente á su dotacion nada puede alterarse, mudar, vender ni acrecentar; de modo, que ni aun los Visitadores de su Religion pueden entrar á visitarle, no precediendo mi Real permiso: con atencion á lo referido, y al especial encargo que hizo el expresado Señor Don Felipe II. sobre la defensa y amparo de las causas del referido Monasterio, y con reflexion á otras consideraciones privilegiadas que en él concurren, y no pueden servir de exemplar; he resuelto, que sin embargo de lo prevenido

y ordenado por el Real decreto de 3 de Octubre del año próximo pasado, cono-
ca el dicho mi Consejo de la Cámara, de
las causas de dicho Real Monasterio, y
nombro á ::: de mi Consejo y Cámara,
para que como Subdelegado de ella, lo
haga de las de menor quantía, otorgan-

do las apelaciones que de sus autos y sen-
tencias se interpusieren, en los casos y
cosas que hubiere lugar de Derecho para
el citado mi Consejo de la Cámara, y no
para otro Tribunal ni Juez alguno, por-
que á todos los demas los inhiho y doy
por inhihidos de su conocimiento.

TITULO XIX.

De las prebendas de Oficio; y su provision.

LEY I.

D. Carlos IV. por resolucion á consulta de la Cámara
de 24 de Octubre de 1801, comunicada en circular
de 31 de Julio de 805.

*Provision de las prebendas que tienen anexá
la cura de almas en todas las Iglesias
del efectivo Real Patronato.*

Con motivo de haber vacado en el
año de 1784 el Arciprestazgo de la Iglesia
Metropolitana de Granada, el Priorato de
la Colegial de Santa Fe, y la Abadía de la
de Uxijar, se me hizo presente, que estas
Dignidades, que tienen anexá la cura de
almas, se proveyesen por concurso ante
Sinodales, remitiéndome terna en todo
tiempo, por ser del efectivo Real Patrona-
to; y habiendo vacado despues en Enero
de 798 el mismo Arciprestazgo, me hizo
presente la Cámara su parecer, con el que
me he conformado, de que se proveyese á
concurso y terna como verdadero Cura-
to, y que la oposicion se hiciese, no ante
los Jueces Sinodales, como se hace para
los demas Curatos, sino ante el M. R. Ar-
zobispo y Cabildo de dicha Metropolita-
na, y en los mismos términos que se hace
para las prebendas de Oficio, remitiendo-
me las listas de los opositores con los vo-
tos que cada uno tuviese, sin guardar la
forma de eleccion canónica, puesto que
ésta no corresponde al Cabildo, y sí solo
es una propuesta para la libre eleccion
que yo debo hacer; entendiéndose por re-
gla general, no solo para las prebendas
de igual naturaleza de las Iglesias del
Reyno de Granada, que todas son del
efectivo Real Patronato, sino tambien
para las demas, por ser unas mismas las
causas y razones que deben regir sin dife-
rencia alguna, señaladamente en las va-

cantes que ocurran en los ocho meses, y
demas casos de las reservas en que yo soy
el único interesado. Y en quanto á las que
se verifiquen en meses ordinarios, como
en todas las Iglesias no es igual el modo
de proveerlas, porque en unas son del
privativo derecho del Prelado, en otras
de éste junto con el Cabildo, y en otras
tienen la alternativa; á fin de evitar du-
das en lo sucesivo, y que todas y qua-
lesquiera dignidades erigidas en las Igle-
sias Catedrales ó Colegiatas que tengan
anexá la cura de almas (no siendo las pri-
meras sillas con Jurisdiccion quasi episco-
pal) se saquen á concurso, celebrándose
éste ante el Prelado y Cabildo, en la mis-
ma forma que para las Canongías Peni-
tenciarias; admitiendo solo á la oposi-
cion los sugetos, segun la edad, grados y
demas circunstancias prescriptas en su
ereccion, ó en los estatutos de las res-
pectivas Iglesias: que verificado el concur-
so se remitan á la Cámara las listas de
los opositores, con los votos que cada uno
de ellos hubiese tenido, para la Real pre-
sentacion de las que en qualquier tiempo
vacasen en las Iglesias del efectivo Real
Patronato, y de las que vagen en las res-
tantes del Reyno en los ocho meses y
demas casos de las reservas especiales y
generales: y que en las vacantes que ocur-
ran en meses ordinarios, se pasen las lis-
tas y votos en la misma forma á los Pre-
lados de las Iglesias donde sea privativa
de estos la provision, é igualmente donde
sea alternativa quando esté en turno el
Prelado; y en el turno del Cabildo, ó quan-
do éste tenga la simultánea con aquel, se
provean por eleccion canónica en la for-
ma acostumbrada para las prebendas de
Oficio.

LIBRO SEGUNDO

DE LA JURISDICCION ECLESIASTICA ORDINARIA Y MIXTA;
y de los Tribunales y Juzgados en que se exerce.

TITULO II.

De las fuerzas de los Jueces eclesiásticos, y recursos al Real auxilio.

LEY I. *consiguiente á la 8.*

D. Carlos IV. por resolucion á consulta del Cons. de 24 de Octubre de 1805, inserta en circular de 24 de Abril de 806.

Facultad de los Tribunales para imponer á los Eclesiásticos en los recursos de fuerza las multas y penas que juzguen á propósito.

Con motivo de que uno de los Tribu-

nales Provinciales del Reyno, al decidir un recurso de fuerza, condenó en las costas al Provisor y Vicario Capitular, este Juez me representó lo que estimaba conducente; y he venido en declarar, que todos los Tribunales Reales, adonde se llevan causas por recursos de fuerza, tienen facultad para imponer á los Eclesiásticos multas, condenaciones de costas, y las demas penas que juzguen á propósito segun las circunstancias del caso.

TITULO III.

De las Bulas y Breves; su presentacion y retencion en el Consejo.

LEY I. *consiguiente á la 12.*

D. Carlos IV. por resol. de 20 de Diciembre de 1804, inserta en céd. del Cons. de 1.º de Junio de 805.

Formalidades para el pase y execucion de toda gracia Pontificia en estos reynos.

Enterado de que existen en la Corte de Roma muchos Clérigos y Religiosos secularizados que se ocupan en negociar gracias Pontificias, y ofrecerlas á los Religiosos de estos dominios y de la América meridional; y con el fin de precaver los desórdenes que de esto resultan, he venido en resolver, que cada gracia Pontificia que se expida para los expresados mis dominios, venga autorizada con el visto bueno de mi Agente general en Roma: que por el Consejo y Cámara no se las dé el *exequatur* ó pase sin este requisito: y que por ningun Prelado puedan po-

nerse en execucion tales gracias sin estas formalidades, y la circunstancia de haber sido alcanzadas por el Agente general de la Nacion.

LEY II.

D. Carlos IV. por Real orden de 17 de Marzo, y resol. á cons. del Consejo de 25 de Junio, inserta en cédula de 7 de Septiembre de 1806.

Método que ha de observarse para el pase y execucion de las Bulas, Breves y demas gracias Pontificias.

Con el objeto de cortar de raiz el tráfico vergonzoso de negociar gracias Pontificias en que, á pesar de lo dispuesto en mi Real cédula de 1.º de Junio de 1805 (*ley anterior*), siguen ocupandose en Roma algunos españoles y otros sugetos; he mandado á mi Agente general en aquella Corte, que obtenga de su Santidad una orden

para que se nieguen absolutamente las gracias y dispensas que se pidan para España, como no sean solicitadas por el Agente Régio, ó en su nombre por el Expedicionero Nacional: y para conseguir que esta reforma de abusos sea permanente, tuve á bien resolver en Real orden de 17 de Marzo de este año, que no se dé pase á ninguna Bula, Breve ó Rescripto Pontificio, que no sea presentado por el Agente general de Madrid, y en su nombre por su Procurador, á quien tengo nombrado para este efecto; y que encargase á todos los Ordinarios eclesiásticos, que no den execucion á ninguna gracia Pontificia, cuyas preces no hayan remitido los mismos Ordinarios por mi primera Secretaría de Estado, como lo practican con arreglo á mi Real orden de 4 de Feb. de 1790; (not. 18.) y que á este fin dispongan, que en sus Secretarías de Cámara se lleve un registro claro y sucinto de todas las preces que remitan (como se executa en la del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo); y que quando lleguen las expediciones de la Corte de Roma, se reconozca ser las mismas que se pidieron por mano de los Prelados; en cuyo caso se ponga á cada

Nota de la ley 10.

Por Real orden de 18 de Septiembre de 1750 mandó S. M., que se tenga especial cuidado por todos los Ministros y oficinas adonde correspondía, de pasar al Consejo de Indias copias autorizadas de los Breves y Bulas,

una la nota de obtenida segun el Real método, para que con ella, y no de otro modo, puedan ser admitidas en los Tribunales de los Provisores ó Vicarios para su execucion.

LEY III.

D. Carlos IV. por resolucion á cons. del Consejo de 25 de Octubre de 1805, inserta en céd. de 23 de Febrero de 806.

Requisitos para la impetracion de Breves Pontificios por los Regulares secularizados, á fin de obtener Beneficios eclesiásticos.

He tenido á bien mandar, que se retengan todos los Breves que los Regulares secularizados han conseguido de su Santidad para obtener Beneficios eclesiásticos, y se han presentado al mi Consejo para su pase; y que en lo sucesivo no se admita ninguno sin que se haya conseguido primero para su impetracion licencia del mismo Consejo á consulta mia; precediendo justificacion de necesidad en alguna Iglesia, qualidades apreciabiles, y demas circunstancias que puedan inclinar al Consejo á proponerme la dispensa.

como tambien de las demas determinaciones Pontificias que se libráren en adelante á la cristiandad, pertenecientes al fuero interno y puntos de Religion, á fin de que por el mismo Consejo puedan expedirse con tiempo á todos los dominios de las Indias con los despachos correspondientes.

TITULO VII.

De los Tribunales de Inquisicion; sus Ministros y Familiares.

LEY I. consiguiente á la 6.

D. Carlos IV. por Real resolucion á consulta del Consejo de 24 de Julio de 1802, inserta en circular de 16 de Diciembre de 1804.

Prohibicion de concurrir los Comisarios y Familiares de los Tribunales de Inquisicion, en calidad de tales, á funciones y actos públicos.

De resultas de competencia suscitada con motivo de haber intentado un

Comisario del Santo Oficio de Inquisicion asistir á la procesion del Corpus del pueblo de su residencia, ocupando el lugar preferente despues del Vicario eclesiástico y Cura propio de él; me he servido mandar, que los Comisarios y Familiares de todos los Tribunales de Inquisicion del Reyno excusen concurrir á las funciones y actos públicos, en calidad de tales, ocupando en ellos solo el lugar que les corresponda por otro concepto.

TITULO VIII.

*Del Consejo de las Ordenes; y de su Jurisdiccion Real y Eclesiástica, Regular y Maestral.*LEY I. *consiguiente á la 13.*

D. Carlos III. en San Lorenzo por cédula de 18 de Octubre de 1769.

Declaracion de la jurisdiccion y facultades del Prior del Sacro Convento de la Orden de Montesa, y del Lugar-teniente General.

Habiendo considerado con madura reflexion lo conveniente que es á mi Real servicio dar orden para lo sucesivo en el gobierno de la Orden de Montesa; he venido por resolucion á consulta de mi Consejo de las Ordenes de 21 de Mayo del año próximo pasado, en declarar: Que á la Dignidad de Prior del Sacro Convento de Montesa corresponde la jurisdiccion espiritual en sus súbditos y Religiosos de la Orden; y que como Juez Ordinario eclesiástico debe gobernar por sí la disciplina y observancia religiosa de su comunidad, y de todos los Piores, Rectores y Freyles Clérigos que no esten inmediatamente sujetos al Consejo: Que en el gobierno y correccion de los Freyles proceda segun las difiniciones y usos legítimos de la Orden, y de acuerdo con los Ancianos de ella; que con dos de estos forme las consultas para los Curatos y Oficios eclesiásticos; que dé las dimisorias para Ordenes, y las licencias de confesar y predicar, y presida los exámenes para admitir Freyles; y me envíe las consultas que los Examinadores hicieren por medio del mi Consejo: y que todas las materias relativas á la administracion de Sacramentos, y demas espirituales de su especie, se hayan de exercer por el referido Prior y demas Religiosos eclesiásticos de la propia Orden que yo nombraré, como se practica en las de Santiago, Calatrava y Alcántara: Que el mi Lugar-teniente General no se mezcle ni entrometa en semejantes asuntos, ni en los juicios de correccion del Prior con sus súbditos, sino en el fuero judicial y contencioso, por recurso de

parte que se sienta agraviada, ó á instancia fiscal; y esto solo en quanto al efecto devolutivo, y no en el suspensivo, y con las apelaciones al Consejo: Que presida mi Lugar-teniente General en las concurrencias con los Caballeros y Freyles, pero sin exercer los actos propios de eclesiásticos, como bendecir la mesa, y otros semejantes que tocan al Prior, ó eclesiástico mas digno que se hallare: Que de ninguna manera mi Lugar-teniente General discierna censuras, expida dimisorias, imponga preceptos formales, ni exámine ni nombre confesores; pero que tenga el gobierno de los Caballeros y vasallos de la Orden, y el conocimiento de sus causas civiles y criminales temporales, con los recursos al mi Consejo; y en las competencias de jurisdiccion con la Audiencia se observe la concordia de 2 de Noviembre del año de 1596. Que por lo tocante á la visita de las Iglesias parroquiales de Montesa y de Vallada, se prevenga al Prior, ser mi voluntad se haga concordia con el Arzobispo de Valencia para la mayor seguridad, la qual se me ha de remitir para su aprobacion; y que al Arzobispo se le conceda el dar las dimisorias, y corregir á los Clérigos de las referidas Iglesias, sin perjuicio en lo demas de los derechos de la Orden, y jurisdiccion sobre los Freyles de ella. Por tanto mando á mi Lugar-teniente General y Ministros de la Religion de Montesa, al Prior, Comendadores, Ayuntamientos y Cabildo del territorio de la misma Orden, y á los Tribunales y demas personas de mis reynos y señoríos, á quienes tocáre la execucion de esta mi cédula, que en virtud de ella, ó de su traslado *fe faciente*, la cumplan en todo y por todo como va referido; de suerte, que se practique y observe en adelante inviolablemente mi expresada última resolucion, sin poner escusa ni dilacion en lo que llevo mandado, no obstante lo determinado y dispuesto antecedentemente por cédula

de 26 de Marzo de 1754, que queda anulada y sin efecto alguno, como tambien todas las órdenes dadas á su conseqüen-

cia, en quanto sean contrarias á lo declarado y dispuesto en esta, para evitar en lo venidero dudas, confusiones y embarazos.

TITULO XI.

Del Comisario general de Cruzada.

LEY I. *consiguiente á la 12.*

D. Carlos IV en Aranjuez por resol. de 31 de Mayo de 802. en el nuevo reglamento para la administracion de Cruzada (cap. 1.)

Facultades del Comisario general de Cruzada; y decision de los asuntos contenciosos en el Tribunal de la Comisaria general.

El Comisario general de Cruzada gozará en toda su plenitud el exercicio del poder, autoridad y facultades que tuvo la extinguida Direccion de Rentas para el gobierno y administracion de los fondos de Cruzada. En su conseqüencia dispondrá, que se establezcan las administraciones que juzgue necesarias, distribuyéndolas como ántes por Obispados y territorios eclesiásticos; y correrá con el régimen y cuidado de las impresiones, con la distribucion de los sumarios á las referidas administraciones, y con todo quanto pertenezca á la exacción y cobranza de los productos hasta ponerlos en la Tesoreria mayor, sin intervencion alguna del Tribunal de Cruzada en la parte directiva ó gubernativa: pero siempre que ocurra algun punto de administracion que por sus circunstancias merezca el concepto de contencioso, se decidirá definitivamente en el Tribunal de la Comisaria general, despues de haberse visto en primera instancia por los Comisarios subdelegados de Cruzada de las respectivas capitales.

No tendrán intervencion alguna en lo gubernativo ni contencioso de la administracion de esta gracia las Juntas Provinciales instituidas para la reunion á una sola administracion de todas las Rentas y ramos de la Real Hacienda; modificandose en esta parte el Real decreto de 25 de Septiembre, é instruccion de 4 de Octubre de 1799.

El Comisario general de Cruzada expedirá los decretos y órdenes que fueren

necesarios para la observancia de la constitucion y forma que se establece por el presente reglamento para el régimen y gobierno de los productos de la santa Bula y su distribucion; dando para ello á los Administradores y demas ministros y subalternos las órdenes competentes, satisfaciéndoles las dudas que les ocurran; y en caso de que haya alguna de tal gravedad que pida consultarse á S. M., lo hará por la via reservada de Hacienda, y esperará su Real resolucion.

El Comisario general hará que los sujetos á quienes confiriere S. M. el empleo de Administradores de Cruzada, respecto que al mismo tiempo han de ser tambien Tesoreros de los caudales que rindiere la limosna de la santa Bula, le den fianzas legas, llanas, y abonadas en cantidad competente para la seguridad y garantía de los caudales que entren en su poder, á ménos que S. M. tenga á bien relevarles de esta obligacion; en cuyo caso se le dará el correspondiente aviso por el Ministerio de Hacienda para su inteligencia y gobierno: y las escrituras y demas obligaciones que otorguen en su razon, se custodiarán archivadas en la Contaduria general de Cruzada, para repetir contra los fiadores é hipotecas en caso de verificarse alguna quiebra.

Queriendo S. M., con el objeto de no multiplicar empleados sin necesidad, que se observe la regla de que en las capitales de Obispado, que lo sean tambien de Provincia, se encargue la administracion de Cruzada al sugeto que desempeñe la general de Rentas, se executará así puntualmente en todas las capitales que se hallen en este caso; y en las que no lo sean de Provincia, sino solamente de Obispado, resolverá S. M. lo que sea de su Real agrado acerca de si han de continuar con este encargo los que desempeñaron anteriormente la administracion de Cruzada, ó si podrán destinarse á él algunos de los in-

dividuos reformados de Rentas, que sin hacer servicio alguno, estan disfrutando sus antiguos sueldos; recayendo las elecciones en personas de calidad y condecoracion, mediante la alternativa que en los actos públicos han de tener con la principal nobleza de cada ciudad: y resuelto que sea este punto por S. M., se dará noticia al Comisario general de las personas que resulten nombradas, para exigir las fianzas y seguridades prevenidas, ó dispensarlas de esta formalidad, si las relevare de ella el Real decreto ú orden de su nombramiento.

El Comisario general, como Director y Colector de los productos de la santa Bula, debe zelar incesantemente en todo lo relativo á la seguridad de los caudales, excogitar todos los medios adecuados para su acrecentamiento, exâminar los planes ó prospectos que al efecto se le presenten, y finalmente cuidar con la mayor escrupulosidad y atencion de que todos y cada uno de sus subalternos observen y cumplan inviolablemente las obligaciones que les impone este reglamento; oyendo sobre todo á la Contaduría. En consecuencia el Comisario general mandará pasar á ella todos los planes y representaciones que se le dirijan sobre los puntos que quedan indicados, y tomará con su audiencia la resolucion que convenga.

El actual Comisario general de Cruzada y sus sucesores darán á S. M. por la via reservada de Hacienda noticias puntuales de quanto executen, y sus resultas acompañadas de estados, y planes formales y demostrativos de los valores percibidos, y de los entregados en la Tesorería general; consultando á S. M., como ántes queda manifestado, todos los casos en que se requiera su Soberana resolucion, asi como los medios mas análogos á la naturaleza de la gracia de Cruzada para su acrecentamiento con los recomendables fines ya indicados.

LEY II.

El mismo en dicho reglamento cap. 2. art. 1, 2, 10, 12.

Facultades de los Subdelegados de Cruzada de las capitales de Obispos.

Los Subdelegados de Cruzada, usando de la autoridad Eclesiástica y Real, de que se hallan revestidos para facilitar bajo las órdenes del Comisario general la distribucion de los sumarios de la santa

Bula, y la recaudacion del importe de su limosna, executarán con la puntualidad propia de su zelo y carácter las disposiciones siguientes.

Luego que se les presenten los Receptores verederos, nombrados por los Administradores Tesoreros de Cruzada para la conduccion y entrega de los referidos sumarios, les recibirán el juramento acostumbrado de cumplir este encargo bien y fielmente, y con la pureza que corresponde.

Será de su cargo participar con la mayor brevedad al Comisario general qualquier desórden ó exceso que notaren, ó de que se les diere aviso, en lo tocante á la publicacion y predicacion de la santa Bula dentro de su respectiva Diócesis, para que los corrija segun la autoridad que en él reside, y haga que se conserve en todo su esplendor la dignidad de un objeto tan sagrado.

Los referidos Subdelegados cuidarán de remitir al Comisario general en el mes de Junio de cada año testimonios de los Notarios de Cruzada, y curias eclesiásticas, que acrediten con la debida claridad y especificacion las multas ó condenaciones pecuniarias que se hayan exigido en el discurso del año anterior; las cantidades que se hayan hallado en los cepos ó caxas de comutaciones de votos, promesas y juramentos; y todo lo que con el título de efectos extraordinarios de Cruzada corresponde de qualquier modo á los santos fines: conservando en su poder el importe total de estos varios ramos, y teniéndole á disposicion del mismo Comisario general, para que le de el destino debido, como lo ha executado hasta ahora en todas las Diócesis del Reyno.

Juzgarán en primera instancia todos los asuntos contenciosos que ocurran acerca de la administracion de esta gracia, otorgando las correspondientes apelaciones para ante el Tribunal de la Comisaria general de Cruzada, donde se decidirán definitivamente.

LEY III.

El mismo en dicho reglamento cap. 5.

Reglas que han de observar las Justicias para el recibimiento y publicacion de la Bula, y su repartimiento á los vecinos.

Á consecuencia del aviso que dieren á las Justicias los Receptores verederos de

que han de pasar á sus respectivos pueblos á hacer la entrega de los sumarios de la santa Bula, dispondrán que se reciba esta en la forma y con la solemnidad acostumbrada, y prevendrán el hospedaje correspondiente.

Retendrán las Justicias en segura custodia los sumarios de Cruzada que hayan recibido de los verederos, hasta que se acerque el día de la publicacion de la santa Bula en sus pueblos, para entregarlos á las personas que han de correr con el encargo de repartirlos á los fieles, y de cobrar su limosna: y no reservarán dichas Justicias sumario alguno para sí ni para otro, porque todos los han de recibir de mano de las referidas personas, como que han de responder de su limosna, y de cumplir en el repartimiento las formalidades que se deben observar en él.

Donde los Administradores Tesoreros no se hubieren encargado de repartir los sumarios á los fieles por sí, ó por medio de personas de su eleccion y confianza, los Concejos y Justicias en cada un año, por el tiempo en que suelen elegir los oficiales de Concejo, ó á lo ménos ántes que se publique la Bula en el pueblo, nombrarán entre sus vecinos y moradores los que juzguen á proposito para el expresado repartimiento, y de competente abono para responder de la limosna de los sumarios que distribuyeren á los fieles; en el supuesto de que ha de ser de cuenta y riesgo de dichas Justicias el referido nombramiento, y tambien el perjuicio que se originare de omitirlo; así como ha de ser radicalmente del cargo de las mismas Justicias el pago de las Bulas que se hubieren consumido, y la entrega de las sobrantes en las épocas señaladas: y en su virtud qualquiera execucion que sea preciso despachar para su cumplimiento, no ha de ser despachada contra los pueblos, sino contra los cogedores y las Justicias.

Á estos así nombrados les entregarán un quaderno de papel en que esté sentado el número de sumarios que se hubieren puesto en su poder, con separacion de clases, para que hagan en él las anotaciones: y no se les exigirá por dicho quaderno mas que el importe del papel.

Entregarán á los Receptores verederos la escritura, papel, ó resguardo que haya sido costumbre, por donde se acredite el número de sumarios que hayan recibido.

Facilitarán á los cogedores todos los medios conducentes para hacer efectiva la limosna de los que hubiesen tomado los sumarios al fiado, y fuesen morosos en satisfacerla, luego que cumpla el término prescripto.

Dispondrán que se limpien de todo embarazo é inmundicia los parages por donde se ha de llevar en procesion la santa Bula, dé modo que se execute este acto solemne con la decencia debida y sin incomodidad.

Deberán asistir á los actos de publicacion, procesion y predicacion de la santa Bula sin excusa ni pretexto alguno, como no sea por ausencia ó por falta de salud.

LEY IV.

El mismo en dicho reglamento cap. 7. art. 1. y 2.

Publicacion de la Bula, y observancia de la costumbre acerca de ella y de su predicacion.

La publicacion de la santa Bula se hará en todos los pueblos ántes de entrar la Quaresma, sin embargo de qualquiera otra costumbre que haya habido en lo pasado; y donde no estuviere fixado el día en que todos los años se haya de celebrar esta funcion, se señalará desde luego en las capitales de las Diócesis por los Cabildos de las Iglesias Catedrales, y en los pueblos donde haya Colegiatas, en que se acostumbre hacer dicha funcion, tambien por los Cabildos de ellas. En las demas poblaciones se hará dicho señalamiento de día por los Curas, en cuyas Iglesias se ha de solemnizar la publicacion, poniendose de acuerdo con las Justicias, y atendiendo á que el tal día esté desembarazado de otras funciones, y sea oportuno para que se logre la mayor concurrencia de los fieles: con advertencia de que señalado una vez, no se ha de variar sin muy grave causa en el mismo año ni en los siguientes, y que quando llegue á variarse sea de manera que ántes se anticipe que se posponga, y nunca por mas tiempo que el de ocho días.

En las referidas capitales de Obispos y en todos los pueblos del Reyno se observará la costumbre que hubiese habido en quanto á la forma de la publicacion, procesion y predicacion de la santa Bula sin alteracion ni variedad alguna, in-

terin no disponga otra cosa el Comisario general: y si en los pueblos particulares se quisiese establecer que haya sermón de ella, no contentándose con la explicación que han de hacer los Curas, se les permitirá, costeando la limosna de él sin oposición á las providencias del Real Consejo de Castilla.

LEY V.

El mismo en dicho reglamento cap. 8. art. 1 y 2.

Ministros executores para la cobranza de los sumarios de la Bula.

Los executores que pasen á los pueblos para exigir la limosna de los sumarios de los que hayan sido morosos, procederán en esta diligencia con la justificación y actividad conveniente, y sin desorden ni colusión con los deudores; y no consumirán en los procedimientos de la ejecución mas tiempo que el preciso para que se apronte el importe de la deuda, el qual bien que se ha de conducir en lo regular á la capital á poder del Adminis-

trador Tesorero, para que quede satisfecha la obligación del pueblo; pero bastará que se haya hecho efectivo y depositado en persona segura de cuenta y riesgo de la Justicia, para que cesen dichos procedimientos, quedando de cargo de la misma disponer que inmediatamente se lleve á dicho Administrador Tesorero, y se recoja recibo, en cuyo defecto se dirigirá después la ejecución contra dicha Justicia.

Para que con mas prontitud y expedición se logre dicha cobranza, en el mismo día en que lleguen los executores al pueblo donde han de hacer la ejecución, notificarán á la Justicia que manifieste los efectos y bienes exequibles en que mas brevemente pueda efectuarse: y sino se pudiere conseguir dentro de seis días en los bienes del repartidor y de sus fiadores, por qualquier motivo que sea, dirigirán sus procedimientos contra la misma Justicia, exigiendo tambien de ella las costas, y poniendo á su cargo las que desde entonces causaren; en cuya última diligencia no han de poder gastar sino otros seis días.

TITULO XII.

Del Tribunal Apostólico y Real de la gracia del Excusado; su Direccion y administracion por cuenta de la Real Hacienda.

LEY I. consiguiente á la 12.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 7 de Junio de 1806 inserta en circular de la Cámara.

Intervencion de los Administradores de la gracia del Excusado en las uniones de parroquias en que se causen diezmos.

Enterado de la utilidad que resultará á la gracia del Excusado de que en las uniones de parroquias que se practiquen tenga alguna intervencion la parte de mi Real Hacienda; me he dignado resolver, que en

las enunciadas uniones de parroquias en que se causen diezmos, y tenga lugar la expresada gracia del Excusado, se oiga á los Administradores de este ramo; y que estos con puntual arreglo á las órdenes de la Direccion general de él expongan con toda prontitud quanto convenga al mejor conocimiento de la verdad, y á que con ella se eviten oportunamente las indebidas disminuciones y perjuicios en los legítimos rendimientos de la misma gracia aplicados á urgentes necesidades de la Corona.

Nota de la ley 12.

Por Real resolución comunicada en orden circular de 16 de Noviembre de 1801, con motivo de haber propuesto la Direccion, que convenia variar el sistema establecido; se mandó, que los Intendentes y Subdelegados de Rentas conozcan de las causas y asuntos judiciales que ocurran en la recaudacion de la gracia del Excusado con las apelaciones y recursos, que segun De-

recho correspondan, al Consejo de Hacienda: dexando S. M. al cuidado de la Direccion el excitar con su zelo la actividad de aquellos, y la facultad de llamar á su Juzgado las causas y asuntos en que así lo estime conveniente para su substanciacion y determinacion, con arreglo á lo dispuesto en la anterior Real orden de 22 de Agosto de 97, y en la de 22 de Abril de 62. (ley 8.)

TITULO XXIII.

Del Colector general de espolios y vacantes.

LEY I.

D. Fernando VI. por Real orden de 3 de Julio, y circular de la Cámara de 23 de Septiembre de 1757.

Nombramiento de seqüestradores en las vacantes de Abadías claustrales, y Beneficios consistoriales de Aragon, con destino de sus frutos á los sucesores en ellas.

En consideracion á que los provistos en las Abadías claustrales, y demas Beneficios consistoriales de la Corona de Aragon, tienen que contribuir en la Curia Romana con los acostumbrados derechos de la expedicion de sus bulas, y ademas estan obligados á satisfacer la media-anata concedida por Breves Apostólicos con destino á los Ministros de la Real Capilla, y guerra contra infieles; quiero que se les permita á los poseedores llevar los frutos de las vacantes de estas Abadías y Beneficios, para que mas cómodamente puedan satisfacer dichas obligaciones; entendiéndose proceder esta concesion de Real

gracia revocable á mi arbitrio, y baxo el supuesto de que han de pagar media-anata con arreglo á los citados Breves. Y para que esta Real resolucion tenga el debido efecto, se comunicará á las respectivas Audiencias, á fin de que, continuando como hasta aquí en proponer sujetos para seqüestradores, les pidan y tomen las cuentas del seqüestro, luego que cesen las vacantes, y dispongan, que precediendo aviso del Secretario de la Cámara de haberse pagado, ó asegurado la media-anata, se entregue á los sucesores en las Abadías claustrales Benedictinas, y en otras piezas menores de Patronato, el producto líquido de sus vacantes, despues de pagar las cargas y obligaciones legítimas, dexando recibo, que se deberá poner con las cuentas; y para noticia de la Cámara se le dará aviso por las Audiencias, despues de entregado dicho producto, del valor total que haya tenido cada vacante del importe de sus cargas, y del producto líquido que haya percibido cada sucesor.

LIBRO TERCERO

DEL REY; Y DE SU REAL CASA Y CORTE.

TITULO III.

De los fueros provinciales.

LEY I. *consiguiente á la 3.*

D. Carlos III. por resolucion á consulta del Consejo de 10 de Marzo de 1772.

Observancia del fuero Alfonsino en el Reyno de Valencia.

Siendo tan útil la formacion de lugares pequeños para la mas fácil cultura de

los campos y aumento de la poblacion; he venido en mandar, conformándome con el dictámen del Consejo, que se publique de nuevo en el Reyno de Valencia la confirmacion y subsistencia del fuero otorgado por el Rey Don Alonso en las Cortes de la Corona de Aragon celebradas el año de 1328; por el qual concedió la jurisdiccion baxa á qualquiera que fundase un

D

Lugar con quince casas, y otros tantos vecinos que las habitaen, con las calidades y circunstancias que en el mismo fuero se contienen. Y por lo que toca á la extension de dicho fuero, que me pro-

pone el Consejo para toda España, me consultará el modo, términos y circunstancias con que podrá convenir, que yo conceda esta nueva gracia.

TITULO XVI.

De los Proveedores de la Real Casa y Corte.

LEY I. *consiguiente á la 8.*

D. Carlos IV. en el reglamento de 25 de Julio de 1800 art. 13, y en Reales órdenes de 16 de Noviembre de 804, y circular de 15 de Abril de 805.

Prohibicion de embargar los carruages y ganados que conduzcan provisiones para el Ejército.

No puedan embargarse ni detenerse los carruages y ganados empleados en los trasportes de granos y efectos correspondientes á la provision de víveres del Ejército; ni las Justicias lo executen de modo alguno, ántes sí auxilien dichas

conducciones por todos los medios posibles, á fin de que se cumpla como debe el Real servicio; quedando responsables á las resultas las Justicias y demas personas que concurrieren á entorpecerlas; y entendiéndose comprehendidos en esta resolution los carruages y ganados actual y efectivamente ocupados en conducir para las Reales provisiones los frutos y efectos del Excusado, Noveno Decimal extraordinario, Tercias y Maestrazgos, cuyos ramos se administran de cuenta de la Real Hacienda por la Direccion de Provisiones, con precisa aplicacion y destino al auxilio de ellas.

LIBRO CUARTO

DE LA REAL JURISDICCION ORDINARIA; Y DE SU EXERCICIO
en el Supremo Consejo de Castilla.

TITULO PRIMERO

De la Jurisdiccion Real; y decision de competencias.

LEY I. *consiguiente á la 14.*

D. Carlos IV. por resolution á consulta de la Cámara de 3 de Septiembre, y cédula de 12 de Diciembre de 1806.

Declaracion del conocimiento y otros puntos relativos á la incorporacion de los señorios temporales, jurisdicciones y demas derechos que posean las Mitras, y otras Dignidades eclesiásticas.

Habiéndome hecho presente mi Con-

sejo de la Cámara la necesidad de nombrar Comision ó Tribunal que entienda en la execucion de lo dispuesto en la Real cédula de 25 de Febrero del año próximo pasado (*ley 14. de este tit.*), por la que mandé se incorporasen á mi Real Corona los señorios temporales, jurisdicciones, rentas, derechos y demas fincas y efectos que poseen las Mitras y otras Dignidades eclesiásticas de estos mis reynos, prescribiendo la forma y modo en que debán verificarse ó hacerse estas incorporaciones,

y declarar algunos puntos que pudieran embarazar su mas pronta y debida execucion, he tenido á bien declarar y mandar: 1.º Que las jurisdicciones puramente honorarias sin anexión á señorío de bienes ó rentas, y por lo tanto estériles en rendimientos á sus poseedores, cuya egresion de la Corona ha sido por títulos gratuitos, se incorporen á ella desde luego, siempre que residan en los primeros adquirentes; tomándose inmediatamente la posesion en mi Real nombre á virtud de las escrituras de renuncia que aquellos otorguen, y títulos que entreguen, conforme á lo prevenido en dicha Real cédula de 25 de Febrero: 2.º Que con respecto á las mismas jurisdicciones que hayan salido de la Corona, ó pasado de de sus donatarios legítimos á terceros poseedores por título oneroso y precio conocido, deberá ser éste el que se capitalice para la incorporacion, y verificarse esta desde luego como en el caso precedente, quedando á la Real Caxa de Consolidacion de Vales Reales, siempre que de aquí resulten contra ella graves obligaciones, el medio de representarlo á mi Real Persona, para que se le faciliten arbitrios con que extinguirlas, y pagar entretanto los réditos: 3.º Que el valor capital de las jurisdicciones sin anexión á señorío de bienes y efectos, pero productivo de algunos emolumentos á sus poseedores, cuyo precio de primitiva egresion ú adquisicion posterior no sea conocido, se haya de estimar por las reglas generales; y siendo las obvenciones inciertas ó casuales habida consideracion á su montamiento en el año comun del último quinquenio; quedando en estos casos y en los siguientes suspensa la incorporacion de hecho á la Corona, hasta que la Real Caxa se indemnice conforme á lo prevenido en la Real cédula de 11 de Feb. de 1803. (*l. 16. tit. 10. lib. 6.*) 4.º Que el valor capital de las jurisdicciones anexas á señoríos de bienes y efectos no se ha de estimar con separacion del general, regulado por el líquido producto de las utilidades ó rendimientos de estos en el modo dicho, si no considerarse incluido en él como imprescindible y subalternado del último; el qual, debiendo ser menores las basas del cálculo, si el derecho de percibir estuviera separado del poder ó de la facilidad de apremiar, decrecería necesariamente en su apreciacion:

5.º Que dicha Real cédula de 25 de Febrero de 1805 sea y se entienda extensiva baxo de estas mismas reglas á la incorporacion de las jurisdicciones y señoríos temporales que poseen los Monasterios y demas Comunidades Regulares, por concurrir para con ellas iguales ó mayores razones de utilidad, necesidad y justicia que para con los individuos ó cuerpos del Clero secular: 6.º Que en las escrituras de formal imposicion que se otorguen por la Real Caxa de los capitales estimados, y réditos correspondientes á favor de aquellos tenedores de jurisdicciones, señoríos y bienes incorporables, desasistidos de todo otro título de pertenencia que el de la posesion actual, despues de hacer expresion de esta circunstancia, se añada en lugar conveniente la especial protexta de :: sin ser visto aprobar por este hecho la legitimidad de dicho título, ni renunciar S. M. el derecho de demandar oportunamente la calificacion de su suficiencia; pero baxo la seguridad de que hasta que esto se verifique, y el sequestro de los réditos se ordene, no se suspenderá el pago puntual de ellos á los indicados poseedores; y 7.º Que las referidas incorporaciones, en todo lo demas no comprehendido en los anteriores capítulos, se formalicen por las reglas comunes establecidas y observadas hasta ahora en el Consejo de Hacienda en las de que conoce; y se otorguen las correspondientes escrituras de retroventa, en lugar de las de renuncia anteriormente prevenidas; entendiéndose baxo de este concepto la citada Real cédula de 25 de Febrero de 1805, así en quanto al precio de las jurisdicciones que previene, como en los demas derechos, rentas, fincas y efectos, para fixar el importe total de la justa recompensa, quando no conste del precio de la egresion, ó por enagenacion posterior; procediendo en lo perteneciente á la Real Caxa de Consolidacion, para el otorgamiento de las escrituras de imposicion formal, abono de réditos, administracion y disfrute de los efectos incorporados, con arreglo á la dicha de 11 de Febrero de 1803, en que fuí servido dar nueva planta á mi Consejo de Hacienda; al qual encargo la execucion de lo contenido en ésta, y mi anterior cédula de 25 de Febrero, dándole para ello todas las facultades que sean necesarias.

TITULO II.

De los Tribunales y sus Ministros en general.

LEY I.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resolución á consulta del Consejo de 13 de Enero, y cédula de 12 de Junio de 1806.

Modo de pedir el Consejo de las Indias las noticias que hayan de suministrarle los Tribunales de España.

Con motivo de haberse expedido por mi Consejo de las Indias provision en 12 de Mayo de 1790, mandando al Regente y Oidores de mi Real Audiencia de Asturias, diese las providencias oportunas para el cumplimiento de un despacho suplicatorio librado por la de México, con el fin de averiguar la identidad de un sugeto natural de dicho Principado que se hallaba

preso en la cárcel de aquella ciudad por delitos de robos; suspendió su cumplimiento dicha Audiencia, y lo representó al mi Consejo con las razones y fundamentos que habia tenido para ello, á fin de que resolviese lo conveniente:: Y habiéndome representado el Consejo de Indias las facultades que le conceden las leyes en los negocios de su competencia para hacerse obedecer de las Chancillerías, Audiencias y demas Tribunales del Reyno :: he tenido á bien mandar, que el Consejo de Indias en iguales casos me haga presente por la via reservada de Gracia y Justicia lo que quiera exigir de los Tribunales del Reyno, á fin de que por ella se les prevenga lo conveniente por medio de órdenes en todo lo que no se ofrezca reparo.

TITULO V.

De los negocios pertenecientes al conocimiento del Consejo.

LEY I. consiguiente á la 13.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden de 18 de Septiembre, y cédula del Consejo de 7 de Noviembre de 805.

Privativo conocimiento del Consejo para la decision de los pleytos sobre pagos en Vales Reales por todo su valor, ó con moneda metálica.

Sin embargo de que por las diferentes resoluciones publicadas con el fin de consolidar el crédito de los Vales Reales, y especialmente por la Real cédula de 17 de Julio de 1799 en que se establecieron las Caxas de reduccion de ellos, y pragmática de 30 de Agosto de 1800 comprehensiva del nuevo sistema administrativo de este ramo, y en consecuencia tambien de una Real orden comunicada al mi Consejo en 25 de Marzo del propio año de 1800, ha conocido éste de las cau-

sas que se han promovido, sobre si puede hacerse en Vales Reales por todo su valor el pago de las cantidades en que consisten las obligaciones respectivas, ó se debe executar en moneda metálica; y con motivo de una instaurada en la Subdelegacion de Cruzada de Astorga, se ha formado competencia por el Tribunal de dicha Gracia, pretendiendo corresponderle su conocimiento: y habiéndose remitido los autos á mis Reales manos para su decision, segun el método últimamente prescrito, he tenido á bien declarar, que este asunto y qualquiera de la misma clase corresponde al mi Consejo, á quien por ningun Tribunal se puede formar competencia en punto de esta naturaleza, como lo previene la citada Real cédula de 17 de Julio de 1799, y lo confirman las posteriores de 1800 y la práctica constantemente observada.

LEY II. *consiguiente á la 6.*

El Consejo por auto acordado de 4 de Agosto de 1806
consultado con S. M.

Sobre el repartimiento de negocios entre las Salas del Consejo para su mas breve despacho y determinacion.

Para facilitar el mejor medio de decidir con brevedad y acierto los muchos negocios de la dotacion del Consejo, y establecer un repartimiento proporcional entre todas sus Salas, asignando á cada una los que sean mas análogos á su instituto, sin perjudicar á las Chancillerías y Audiencias del Reyno en los pleytos que son de su peculiar dotacion ::: y con el objeto de establecer un órden fixo ::: se observará lo siguiente.

La Sala primera de Gobierno en los negocios de su dotacion podrá remitir á las otras Salas todos los que tenga por conveniente, para que se despachen á su nombre, y no se detenga su curso.

Á la dotacion de la Sala segunda se agregan los negocios siguientes.

1 Los de obras públicas, excepto aquellos que conforme á lo resuelto por S. M. deban instruirse y despacharse por la Contaduría general de Propios y Arbitrios.

2 Los de abastos de los pueblos del Reyno, á excepcion de la Corte, quando se trate de providencias dirigidas á que en ningun pueblo falten los mantenimientos necesarios, ó á mejorar y rectificar el gobierno de este ramo; pues los recursos é instancias particulares que se promuevan, ya acerca de cumplimiento de contratas y condiciones de las subastas, ya sobre el valor de éstas, su rescision ó modificacion, y qualesquiera otros puntos que no establezcan regla general, ni puedan alterar el sistema ó modo de abastecer que se haya adoptado, ó parezca conveniente adoptar, han de corresponder á las respectivas Chancillerías ó Audiencias.

3 Todas las apelaciones que esté mandado vengán á Sala primera.

4 Todos los negocios que sean por su naturaleza ó se hagan contenciosos, con inclusion de los de esta clase tocantes á Propios y Arbitrios, y los en que se dispute si se ha de pagar en Vales Reales ó en moneda metálica; exceptuando solo aquellos que, aunque hayan llegado al estado de contenciosos, tenga la Sala pri-

mera por conveniente retenerlos, sea por su gravedad, ó porque puedan causar providencia ó regla general.

La Sala segunda y la de Mil y Quinientas despacharán juntas las fuerzas en conocer y proceder, y las de millones.

Se agregan á la Sala de Mil y Quinientas los recursos de injusticia notoria.

Asimismo se la agrega la substanciacion de los expedientes sobre facultades para nuevos rompimientos, hasta ponerlos en estado de dar cuenta al Consejo pleno.

No solo conocerá la misma Sala de los recursos y apelaciones del Señor Juez Protector y Subdelegados de la Real Cabaña de carreteros, quando la disputa es sobre pastos, sino tambien en los casos de que hasta ahora conocia la Sala de Justicia.

La Sala primera de Gobierno entenderá en la confirmacion de las ordenanzas municipales de los pueblos y en las de los gremios; y la Sala de Justicia en las ordenanzas de cofradías y hermandades.

Se pasarán á Justicia todos los expedientes que hay en Gobierno, y los que ocurran en lo sucesivo sobre la construccion ó reparacion de las Iglesias parroquiales, y la provision de sus ornamentos y vasos sagrados á costa de los partícipes de diezmos.

Las letras *causa videndi* para traer al Consejo los pleytos pendientes en la Real Audiencia de Mallorca, que se han acostumbrado pedir en Sala primera, se despacharán en adelante por la de Justicia á quien toca la vista y determinacion de dichos pleytos.

En la Sala de Provincia no se hace novedad, porque todos los negocios de su dotacion son privativos é inseparables de ella, y no se la pueden agregar otros, porque necesita toda su actividad é incesante fatiga para despachar los propios.

Todos los expedientes sobre elecciones de oficios de República pendientes en el Consejo, que no se hallen sentenciados en vista, ni se hayan mandado retener ni traer por órden de S. M., se remitan á las Chancillerías y Audiencias donde correspondan: y así el Repartidor como los Escribanos de Cámara y de Gobierno no admitirán ningun recurso de esta clase.

Las competencias entre dos Jueces ordinarios del distrito de un Tribunal ter-

ritorial sobre el conocimiento de negocios, que no esten baxo la inspeccion ó autoridad de otra jurisdiccion ó Tribunal independiente de él, se decidirán por el mismo Tribunal territorial.

El Repartidor, los Escribanos de Cámara y de Gobierno, y los Relatores observarán la Real orden de 22 de Noviembre de 1763; y en su cumplimiento se pasarán á la Contaduría general de Propios y Arbitrios para su despacho todos los expedientes que se hallen pendientes en sus oficios, y no sean ni se hayan hecho contenciosos sobre concesiones, prorrogaciones ó subrogaciones de Arbitrios que solicitasen los pueblos; dotaciones de dependientes, moderaciones, aumentos, ayudas de costa, gastos de obras y reparos de edificios públicos, pago de réditos de censos, deudas y otras cualesquiera cargas.

Los Relatores en los ocho primeros dias de cada mes presentarán dos listas de todos los pleytos y expedientes que en fin del anterior hayan quedado en su poder, con distincion de Salas; la una de los promovidos á instancia de parte, y la otra de los de oficio; expresando el dia en que se pasaron á su poder, y anotando

la circunstancia de los que sean consultivos por su naturaleza, ó porque S. M. lo haya mandado, y en que haya recuendo encargando la brevedad.

Los Escribanos de Cámara dentro del mismo tiempo pasarán á los Señores Fiscales listas de los pleytos y expedientes que en fin del mes anterior hayan quedado sin despachar en poder de los Agentes Fiscales.

Los mismos Escribanos de Cámara pasarán en fin del año á la Escribanía de Gobierno listas duplicadas de los expedientes de oficio que haya pendientes en cada Sala, la una para presentarla en el Consejo pleno, y la otra para pasarla á la Sala que corresponda; incluyendo en esta clase aquellos negocios en que S. M. haya pedido consulta, aun quando sean promovidos á instancia de parte, expresando el estado que tengan los expedientes.

Lo mismo ejecutarán los Contadores de Propios y Pósitos

Ademas se remitirá á S. M. en fin del año el estado ó manifiesto de todos los pleytos y expedientes despachados en el Consejo: todo lo qual se observará puntualmente.

TITULO VI.

De los negocios de que no puede conocer el Consejo.

Nota consiguiente á la 2.

En auto acordado del Consejo de 23 de Diciembre de 1771 comprehensivo de varias reglas para su gobierno se previno á los Escribanos de Cámara, que sean puntualísimos en la observancia del auto acordado que les prohíbe admitir peticiones sobre negocios, que segun las leyes 1.^a y 2.^a de este título deben conocer las Chancillerías y Audiencias; y que al fin de cada mes hagan presente al Consejo, una lista general de los expedientes y negocios de todas clases, que segun sus libros de conocimiento hubiere pendientes en sus oficios, con noticia de su naturaleza y último estado.

Nota á la ley 4.

Por resolucion á consulta del Consejo de 16 de Mayo de 1800, con motivo de haber suspendido la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Extremadura el cumplimiento de una provision, para que remitiese al Consejo los autos pendientes en

ella de capitulacion puesta contra el Teniente de Corregidor, que fué de la villa de Herrera del Duque; declaró S. M. lo siguiente: "La Sala del Crimen de Extremadura debió obedecer las providencias del Consejo, remitiéndole los autos que pidió:

me ha sido muy desagradable su conducta en esta parte; y quiero que reconozca en el Consejo las facultades que le tengo concedidas para velar sobre la administracion de Justicia. Hágaselo así entender el Consejo, y conozca de la causa de capitulacion que retendrá á este efecto, así como otra qualquiera que creyese conveniente á mi Real servicio y bien de las partes, como está mandado por el Real decreto de 1.º de Enero de 1747; pero me dará cuen-

ta de ello siempre que la naturaleza y calidad del asunto fuere grave, ó lo exigiere."

Y en posterior Real resolucion, á consulta de 28 de Febrero de 806, de resultas de haberse quejado al Rey la Real Audiencia de Sevilla, de que el Consejo se avocaba muchas causas que se ventilaban en aquel Tribunal con perjuicio de las partes; mandó S. M. que el Consejo hiciera entender á la Audiencia, que le habia desagradado el ningun fundamento de su queja.

TITULO VIII.

Del modo de votar los pleytos y negocios del Consejo.

Nota consiguiente á la ley 2.

Por auto acordado del Consejo pleno de 25 de Diciembre de 1771 se mandó, entre otras cosas, que segun lo prevenido en la ley 2.ª de este tit. haya en el Consejo un libro de acuerdos foliado, que custodiara el Escribano de Gobierno "en que dando principio por éste, que ha de servir de cabeza, se sienten á la letra las deliberaciones y providencias que en materias de gravedad é importancia se fueren tomando de aquí adelan-

te, rubricándolas el Ministro Semanero; y que igualmente haya y se guarde en el archivo secreto otro libro de votaciones, en que los Ministros que quieran, puedan escribir sus votos particulares con separacion, quando no se conformen en las resoluciones con lo que se determine por la mayor parte; cuidando todos al oir y votar los negocios, tener muy á la vista lo que mandan las leyes 2. t. 7. y 4. t. 8. lib. 4. para el mas pronto despacho."

TITULO XV.

De los Ministros del Consejo Superintendentes de partidos y Provincias del Reyno.

Nota consiguiente á las leyes 4 y 5.

Por auto acordado del Consejo pleno de 25 de Diciembre de 1771, comprehensiva de varias reglas para su buen gobierno, se previno, que sus Ministros tengan siempre muy á la vista el instituto de la Sala primera de Gobierno, con especialidad el de hacer observar las reglas prevenidas en la ordenanza del Señor Felipe III. (ley 1.ª de este tit.); y que segun fueren encargados de la superintendencia de las Provincias, repitan á las Justicias de las capitales á principios de cada año la carta acordada del de 1767 (ley 4. de este tit.), para que se les renueven los asuntos de que deben informar por su mano; y que teniendo dichos Ministros presentes los au-

tos acordados (leyes 1. y 2.), con lo demas que les dicte su zelo, den cuenta á la primera hora de los avisos, representaciones, ó recursos que se les dirigieren, y estimen dignos de la deliberacion del Consejo, para que en él se acuerde lo que convenga; arreglándose en esto, los que tuvieren á su cargo la direccion de alguna Universidad, á lo prevenido en el capítulo 39 del auto acordado de 14 de Febrero de 1769 (ley 2. tit. 5. lib. 8.): pero si alguno de los Directores estuviere asignado á otra Sala, y el asunto no correspondiere al Consejo pleno, podrá dar cuenta por medio de la Escribanía de Gobierno, que tendrá obligacion de avisarle con exáctitud lo que se resuelva.

TITULO XVI.

De los Fiscales del Consejo, y sus Agentes.

Nota consiguiente á las leyes 3. y 4.

En auto acordado del Consejo pleno de 23 de Diciembre de 1771 se previno, entre otras reglas, que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 3 de este título, en cada una de las Escribanías de Gobierno haya su respectivo libro en que se sienten los negocios fiscales, y las órdenes de oficio que el Consejo expidiere á los Jueces inferiores ú otras personas, de que se espere relacion ó informe; quedando á cargo del Juez de Ministros el de la mas exácta observancia de este capítulo. Que los Fiscales hagan cumplir lo prevenido en la ley 4 de este título, y la II tit. 17. lib. 5, disponiendo que sus Agentes, y las Escribanías de Gobierno les suministren á tiem-

po todas las semanas las memorias ó razones que necesiten para informar al Consejo por sí, ó por medio de los Escribanos de Cámara, de los negocios fiscales que hubiere pendientes, y su último estado: y que por lo que hace á las noticias, recursos ó papeles que se dirigieren por su mano, den cuenta al Consejo de aquellos que tengan por conveniente hacerlos presentes por sí mismos; y los demas los remitan con pedimento, ó sin él, segun fuere su naturaleza á las Escribanías de Cámara correspondientes; y los Escribanos los reciban, y den precisamente cuenta al Consejo con preferencia, para que acuerde el curso que deban tener.

TITULO XXI.

De los Escribanos de Cámara del Consejo.

Nota consiguiente á la 6. de la ley 7.

Por auto acordado del Consejo pleno de 23 de Diciembre de 1771, comprehensivo de varias reglas para su gobierno, se mandó, que los Escribanos de Cámara se arreglen con exáctitud á lo dispuesto en la ley 6. de este título, y en los dos autos acordados (nota 6.), baxo las penas contenidas en ellos; absteniéndose en su virtud de poner por sí decretos algunos en las peticiones, sin dar cuenta al Consejo; pues queda absolutamente proscripito el abuso de los decretos que han solido llamarse de cajon: y en todos los expedientes ó negocios que hubieren de pasar á los Relatores pongan la nota del dia en que se les entreguen, conforme al auto acordado (nota 7. tit. 7. de este lib.), que observarán igualmente los Relatores, en lo que les ordena; guardando asimismo los unos y los otros el auto acordado (nota 2. de este tit.), para excusar gastos á las partes en el pase y entrega de los expedientes.

En otro auto acordado del Consejo pleno

de 10 de Enero de 1772 se previno, que para la mayor claridad y observancia de lo mandado en el anterior de 23 de Diciembre de 71, y especialmente en el punto de que los Escribanos de Cámara se arreglen con exáctitud á lo mandado en la ley 6, y autos acordados (not. 6.), absteniéndose en su virtud de poner por sí decretos algunos en las peticiones, sin dar ántes cuenta al Consejo, pues quedaba absolutamente proscripito el abuso de los que habian solido llamarse de cajon; se entendiese que estos únicamente los puedan poner en los negocios siguientes.

En los que se pide el pase de bulas; por estar mandado ántes de ahora, que luego que se presenten se remitan á la vista del Fiscal.

En los expedientes de aprobacion de Escribanos numerarios ó locales; por estar igualmente prevenido, que los vea el Fiscal.

En los de provision de cátedras de las Universidades, en que sucede lo mismo.

Que siempre que el Consejo acuerde las diligencias que pidan los Fiscales, se añada en el decreto, y venidas, pasen al Fiscal con el expediente.

Que si en los negocios que se hallen en poder del Fiscal, ó en el Relator, sobreviniere algun recurso, instancia ó representacion, se ponga por los Escribanos de Cámara el decreto de que pase al Fiscal, ó Relator en quien se hallase el antecedente; sin necesidad de dar cuenta, á ménos que la nueva ocurrencia pida alguna urgente providencia, que entónces deberán hacerla presente, para que el Consejo resuelva lo que tuviere por conveniente.

Que en todas las peticiones que se presenten en todos los pleytos contextados, alegando lisa y llanamente, de que corresponde darse traslado, tambien se ponga el decreto; á excepcion de las en que hubiere otrosí que pida providencia, que de estas deberán dar

cuenta; y estando los negocios contenciosos en estado que se requiera pasar al Fiscal ó Relator, pondrán tambien el decreto de remision.

Que igualmente lo pongan á su tiempo, quando se pidan apremios para la vuelta de autos; y los de substanciacion en rebeldía.

Que en todas las peticiones que se dieren, se ponga por las Escribanías de Cámara el dia en que se presentaren: y que á excepcion de los casos declarados, no puedan los Escribanos de Cámara poner otros decretos de cajon.

Y por otro auto de 22 de Enero del mismo año de 72, con motivo de haberse tratado en el Consejo sobre la inteligencia que debia darse á los dos anteriores, se acordó, que los Escribanos de Cámara, no solo en los pleytos contenciosos, sino en los expedientes gubernativos que tuvieran estado de pasar á los Fiscales ó Relatores, puedan poner el decreto correspondiente para ello.

TITULO XXII.

De los Receptores del Consejo.

LEY I.

D. Felipe III. en Madrid por Real cédula de 13 de Junio de 614.

Creacion de cien Receptores del Número en la Corte; y declaracion de las comisiones y negocios pertenecientes á su oficio.

Por quanto de cometerse y encargarse algunas veces y en algunos casos las comisiones de los negocios civiles y criminales, y de residencias, visitas de Escribanos, cuentas que se ofrecen y despachan en nuestra Corte, á Escribanos Reales y otras personas, se han seguido y siguen algunos daños é inconvenientes; para remedio de los quales, y para que el servicio de Dios nuestro Señor y nuestro, y bien público de estos reynos se consiga, conviene que haya en la dicha nuestra Corte número cierto de Receptores, á quien se cometan y encarguen todas las dichas comisiones, como le hay en las Chancillerías, Audiencias, y Adelantamientos y otros Tribunales, donde la experiencia ha mostrado la utilidad, beneficio y buena orden que con ellos ha habido, y hay en el despacho y expedicion de las dichas co-

misiones y negocios ::: y deseando que se excusen y remedien qualesquier daños é inconvenientes que podian resultar, habemos acordado, que ahora y de aquí adelante haya en nuestra Corte cien Receptores del Número, que sean personas de aprobacion y satisfaccion, entre los quales se hayan de proveer y repartir por turno todas las comisiones de Escribanos para las administraciones, pesquisas, cuentas, residencias, diligencias y negocios que se ofrecieren en el nuestro Consejo y en el de Estado y Guerra, Cámara y el de Indias, en las comisiones que se dieran para dentro de estos reynos, y en los de las Ordenes, Hacienda, Tribunales de ella, Cruzada, Alcaldes de nuestra Casa y Corte; y las comisiones que se hubieren de dar por qualesquier Jueces que conocieren de qualesquier negocios, aunque sean Consejeros ó Ministros nuestros, para dentro y fuera de ella; el qual repartimiento ha de hacer el Repartidor, que para ello nombraremos, con toda fidelidad é igualdad. Y quando se cometieren negocios á los nuestros Oidores y Alcaldes de las Chancillerías y Audiencias, Alcaldes mayo-

E

res de los Adelantamientos, y á las Justicias ordinarias, ha de ir uno de los Receptores ante quien hagan los autos; y han de entrar en el turno las tales comisiones; con que si conforme á la calidad é importancia de algunos negocios conviniere enviar un Escribano de Cámara, se pueda hacer y haga; y que á los Visitadores á quien se cometieren visitas de Tribunales, Chancillerías, Audiencias y Ministros, tambien se puedan nombrar Escribanos para ellas, aunque no sean del dicho Número: apercibiendo, y advirtiéndolo á los dichos Receptores que así proveeremos, la legalidad y la forma con que han de proceder en las comisiones y negocios que se les cometieren; y que en ellos y en la entrega de los papeles y procesos tocantes á sus comisiones, han de guardar lo dispuesto por leyes y pragmáticas de estos nuestros reynos, y lo que mas cerca de ello se les ordenare y mandare; y que no lo haciendo, serán castigados con todo rigor: y se les han de señalar de salario quinientos maravedís cada dia fuera de la Corte, demas y allende de sus derechos que han de llevar conforme al arancel; y en la Corte el salario que se les señalare, y los dichos derechos. Y mandamos á los Presidentes de los dichos nuestros Consejos y Tribunales, y á los Alcaldes de nuestra Casa Corte, y á los otros nuestros Ministros á quien por razon de sus oficios tocare y perteneciere la provision y nombramiento de personas para las dichas comisiones y negocios, que no provean ni nombren para ellas otras personas sino de los dichos cien Receptores, á quien tocara por el dicho turno, de que les ha de constar por certificacion del dicho Repartidor; dexándoles como los dexamos libertad y mano, para que si, conforme á la calidad é importancia del negocio y comision que se ofreciere, conviniere enviar un Escribano de Cámara de los que residen en los dichos nuestros Consejos, ó Tribunales donde hubiere de emanar la tal comision, lo puedan hacer; y lo mismo se pueda hacer con los Jueces visitadores, á quien en qualquier tiempo se cometieren visitas de Tribunales, Audiencias y Ministros, para que á ellos tambien se les pueda nombrar Escribano para ellas, aunque no sean de los dichos Receptores; el número de los quales no han de ser mas que los dichos ciento; y si conviniere acrecentar mas han

de ser del segundo Número: teniendo como han de tener los dichos cien Receptores, que conforme á lo contenido en esta nuestra cédula se han de proveer, la eleccion, preeminencias y prerrogativas que tienen los del primer Número de las dichas Chancillerías y Audiencias. Todo lo qual queremos y mandamos que así se haga, cumpla y execute inviolablemente, sin embargo de qualesquiera leyes y pragmáticas de estos nuestros reynos, ordenanzas, estilo, uso, y costumbre de los dichos nuestros Consejos y Tribunales de la dicha nuestra Corte, y de otra qualquiera cosa que haya ó pueda haber en contrario, que para en quanto á esto toca, y por esta vez dispensamos con todo ello, y lo abrogamos y derogamos, casamos y anulamos, y damos por ninguno y de ningun valor ni efecto, quedando en su fuerza y vigor para en lo demas adelante. Para cuyo efecto, y que contra el tenor de lo aquí contenido no se vaya ni pase, mandamos que el traslado de esta nuestra cédula se ponga y asiente entre las ordenanzas, acuerdos é instrucciones que tienen los dichos nuestros Consejos y Tribunales de la dicha nuestra Corte; y que esta original haya de quedar y quede en el dicho nuestro Consejo, en la parte y lugar donde se guardan los demas papeles, cédulas y despachos tocantes á él.

LEY II.

D. Felipe IV. en Madrid por Real cédula de 10 de Enero de 1642.

Nombramiento de Juez Conservador de los Receptores de la Corte; sus facultades y conocimiento.

Porque para las ocasiones que tengo de guerras nuevamente me ha ofrecido servir con 42500 ducados el Número de Receptores de esta Corte ::: he venido en señalarles por Juez Conservador de todo lo tocante al exercicio de sus oficios, y á la creacion que de ellos se hizo por la Real cédula de 13 de Junio de 614, al Decano que fuere del mi Consejo perpetuamente, para que proceda á la inviolable observancia, guarda y cumplimiento de todo lo contenido en dicha cédula, y de lo que por ella pertenece al uso y exercicio de los cien oficios de Receptores; y conozca privativamente en

primera instancia de las causas y negocios tocantes al ejercicio de ellos; de manera que se les haga guardar y cumplir sin disminucion alguna todo lo que les tocare, asi por la dicha creacion como por los títulos de los oficios. Y mando á qualesquier mis Secretarios, Escribanos de Cámara y Relatores de los mis Consejos expresados en la dicha mi cédula de 13 de Junio de 614, que cada uno en lo que le tocare dé certificacion de las comisiones que hubiere; y á los mis Contadores de Mercedes y Relaciones, y al mi Escribano mayor de Rentas y oficiales mayores de unos y otros, y á las demas personas á quien principal ó incidentemente, ahora ó en algun tiempo, toca á tocar pueda la expedicion y despacho de las dichas comisiones con poco ó mucho término, no las despachen, sino fueren con nombramiento de Receptor y con certificacion de su Repartidor del Receptor á quien toca, para que, teniendole, se lellene el nombre de aquel á quien tocara; porque haciendo lo contrario, se ha de proceder contra el transgresor ú omiso en la obediencia de lo dispuesto por esta mi carta::: y á los mis Contadores de la Razon, penas de Cámara, y gastos de Justicia, y al Chanciller mayor de esta mi Corte ó su Teniente, que no pasen ni sellen comision ninguna sin nombramiento de Receptor, porque tambien se ha de proceder en la omision de esto, en la misma forma que contra los que quedan referidos; y á los Jueces y personas que hubieren de exercer las dichas comisiones, que no las usen ni exerzan, sino fuere con el Receptor á quien tocara por su turno: y lo mismo hagan las Justicias ordinarias en las que le fueren cometidas: y si en qualquier manera contravinieren á ello, se les pueda hacer cargo en la residencia que dieren de sus oficios; cuya obligacion mando se prevenga en los títulos de Corregidores que yo nombrare en estos mis reynos: Y desde luego prohibo y defiendo, que ningun Escribano Real, aunque sea nombrado en las dichas comisiones, no las puedan exercer; y si lo hicieren, y en contrario de esta mi resolucion obraren, ó fulminaren qualesquier autos, desde luego los declaro por ningunos, y doy poder y facultad á las partes interesadas, para que lo puedan alegar, quedando siempre en el Juez

Conservador libre facultad, autoridad y poder para mandar prender, multar, y volver los emolumentos tocantes á la comision en que hubieren entendido los dichos Escribanos Reales, y aplicarlos al Receptor á quien hubiere tocado la comision; y para executar sin embargo de apelacion los autos y sentencias que sobre ello se dieren y pronunciaren: declarando como declaro, que si la comision fuere de calidad que pareciere que conviene embiar un Escribano de Cámara, ha de ser precisamente del Consejo donde emanare qualquiera de las dichas comisiones; y si habiendo ido, dexare Escribano Real en ella, el Juez Conservador de los dichos cien oficios de Receptores, ha de embiar aquel á quien tocara para que la acabe y exerza, cesando, como ha de cesar en este caso, el Escribano Real que la estuviere exerciendo; guardandoseles en esto y en lo demas que queda referido, todo lo que tocara á la creacion de los dichos oficios, uso y ejercicio de ellos sin mudanza alguna. Y como quiera que tengo entendido que algunos de los poseedores de los dichos oficios de Receptores hacen extraordinarias diligencias, asi por recusaciones como en otra forma, para dexar la comision que les ha tocado por su turno; mando tambien, que la que qualquiera que hubiere elegido por él, conforme á auto de los del mi Consejo de 1.º de Diciembre de 616, que no la pueda dexar ni dexe, si no fuere por legítimo impedimento, ó recusacion, y causas que precedan para ello; de las quales ha de conocer privativamente el dicho Juez Conservador; y qualquiera de los que lo contravinieren ha de caer é incurrir en pena de perdimiento de su turno, y que no sea vuelto á poner en él, hasta haber dado cuenta de lo que hubiere llevado. Y siendo así, que por lo que queda referido, quedan excluidos del ejercicio de las comisiones los dichos Escribanos Reales, es mi merced, intencion y deliberada voluntad, que el Receptor que eligiere residencia que tenga anexos, no ha de poder ni pueda nombrar á ninguno de los dichos Escribanos, ni á persona que no sea Receptor por cuyo nombramiento se haya de exercer; y que el dicho Receptor haya de tener y tenga obligacion de dar cuenta de los pape-

les de la principal, y anexos, y pagar las condenaciones que al tasador les hiciere, y no sea puesto ni se ponga en turno hasta que lo cumpla. Y como quiera que yo tengo hecha merced á mis Escribanos de Provincia del exercicio de todas las comisiones de mi Corte::: declaro tambien, que esta eleccion no ha de perjudicar en cosa alguna á los dichos mis Escribanos de Provincia, ni al privilegio que les tengo concedido, en quanto al uso y exercicio de las dichas comisiones. Y al dicho Juez Conservador doy amplio poder y plena facultad y comision sin restriccion ni limitacion alguna, para conocer en primera instancia de todas y qualesquiera causas y negocios tocantes y concernientes al entero uso de los dichos oficios de Receptores, y lo dependiente de ellos; y para proceder por los términos del Derecho y en conformidad de esta mi carta contra los remisos é inobedientes, executando en cada uno las penas en que les condenare, y otorgando la apelacion de aquellas que le pareciere que haya lugar de derecho, solo para el mi Consejo, donde mando se difinan y acaben, y no en otro Consejo, Audiencia, ni Tribunal alguno; á los quales y cada uno de ellos inhibo, y he por inhibidos de su conocimiento, y los declaro por Jueces incompetentes de él.

LEY III.

D. Felipe IV. en Madrid por céd. de 1.º de Febrero de 1662.

Confirmacion de los cien oficios de Receptores y su Juez Conservador, con declaracion de las comisiones tocantes á ellos.

He venido en confirmar y aprobar la cédula de 13 de Junio de 1614 de creacion de los cien oficios de Receptores de mi Corte, y la provision de 1642 sobre nombramiento de Juez Conservador á uno de los de mi Consejo, para que se les guarde, y cumpla todo lo tocante al exercicio de sus oficios, como en ellas se contiene y declara::: Y á mayor abundamiento, por via de declaracion, nueva gracia ó concesion y comprension, extension ó ampliacion, en la forma que mas les convenga por causa onerosa y contrato recíproco é irrevocable, hago merced á los dichos cien Receptores del Número de mi

Corte, y á las personas que sucedieren en los dichos oficios, de todas las comisiones y negocios que se despacharen por todos mis Consejos, Juntas y Tribunales de mi Corte, para que las tengan en conformidad de la dicha cédula de creacion con las cláusulas, fuerzas, y firmezas que mas les convengan, que son las siguientes. Con calidad que todas las dichas comisiones que se despacharen por los dichos mis Consejos de Castilla y Cámara, Estado, Junta de Medios, Consejo de Hacienda y Contaduría mayor de ella, Tribunal de Oidores, y de la Sala de la Administracion de millones del Reyno, Junta de cobranzas y de Rentas, y mi hacienda Real, sal, arbitrios, donativos y media-anata; y por el mi Consejo de Guerra, Juntas de Armadas, Almirantazgo y Represalias; y por el mi Consejo de las Ordenes y Junta de la Caballeria de él; y Consejo de Cruzada; y Sala de Alcaldes de mi Casa y Corte; y las que el mi Consejo de las Indias, y el de la Cámara diere para dentro de estos mis reynos, y por la Junta de Competencias, y de Guerra del dicho mi Consejo de Indias; y las que se despacharen por otros qualesquier mis Consejos, Salas, ó Juntas que se formaren por separacion de los dichos mis Consejos, ó por nuevos servicios del Reyno, ó creacion; y las que despacharen qualesquier Ministros de los dichos mis Consejos, como Jueces particulares, así para las visitas de Escribanos y de los Administradores de millones, como de alcabalas, tres por ciento, y otras qualesquier rentas que al presente hay, y adelante hubiere; y las comisiones que se dan á los Administradores para administrar las dichas rentas, y las visitas de sacas y cosas vedadas, casas de moneda, almorzarifazgo de Indias y aduanas, y puertos secos y mojados, y de Almirantazgo y contrabando; y para visitar á los Administradores, Alcaldes mayores, Jueces de Indias y de contrabando, y á los Tesoreros, Receptores y Ministros, y otras qualesquier visitas de navios y otras embarcaciones; y á los Capitanes, maestros y demas oficiales de ellos: y las residencias de los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores de todas las ciudades de estos mis reynos, y de las Ordenes; y de las comisiones del Juzgado de quiebras del di-

cho mi Consejo de Hacienda, y las de cuentas, de alcabalas, millones, tres por ciento, papel sellado, arbitrios donativos, y otras rentas; y las de Propios y Pósitos de las dichas ciudades villas y lugares; y las que se dan para averiguar y castigar los fraudes hechos en ellas; y las comisiones y pesquisas, que se despachan de pedimento del Fiscal, querellas de parte, capítulos, ó en virtud de consultas ó decretos particulares, ó por otra razon contra los dichos Jueces, Administradores, Asistente, Corregidores, Gobernadores, Alcaldes, Tesoreros, Receptores y otros Ministros, ó contra otras qualesquier personas particulares, así por razon de sus oficios, como sobre empadronamientos, inseculaciones, monedas, papel sellado, y naypes falsos, fugas de galeotes, quebrantamientos, escalamientos, salteamientos, muertes, libelos, cortas, talas, quemas, incendios, y otros qualesquier delitos; y las comisiones para compra de esclavos, y para ventas de tierras, jurisdicciones, remedidas, posesiones de villas y lugares; y las comisiones contra particulares, sobre introducciones de cosas de contrabando, ó sacas de oro ó plata, ó granos ó otros géneros, y los fraudes hechos en razon de ellos, y en las fábricas de armadas; y las Receptorías, para hacer probanzas entre partes en pleytos civiles y criminales; y en los civiles, en los que excedieren de cien mil maravedís de propiedad; sin que las partes puedan nombrar Escribanos sino el Receptor á quien tocara; y los cumplimientos de las cartas executorias que se despacharen en los dichos pleytos, en que se hubiere de dar posesion de jurisdicciones ú otros bienes, medir tierras, ó hacer qualesquier diligencias de liquidacion, ó proceder á hacer pagos; y las comisiones que se dan para los embargos de los expolios, averiguacion, administracion y venta de los bienes que proceden de ellos; y todas las otras comisiones que en los dichos nombres ó otros se dieren y despacharen desde ahora para siempre jamas por los dichos Consejos, Juntas y Tribunales referidos, ó que nuevamente se crearen ó formaren, ó por Jueces particulares, aunque aquí no vayan expresados, y en que precisamente haya de haber Escribano: quiero y mando que todas ellas, sin reservar alguna, se les ha-

yan de dar á los dichos cien Receptores del Número de mi Corte, para que entre todos se repartan, como es costumbre; sin que desde ahora para siempre jamas quede poder ni facultad en los dichos mis Consejos, Juntas y Tribunales, y Jueces particulares, para poder nombrar en los dichos negocios y comisiones otro ningun Escribano Real, ni aprobado, ni del Número ni Ayuntamiento, comisiones, ni otro qualquier, sino fuere el Receptor del dicho Número á quien tocara el dicho negocio por su turno; salvo en los casos y cosas que la dicha cédula de creacion limita, que son Escribano de Cámara del Consejo por donde se despachare la comision, siendo ella de tal calidad que lo requiera; y á los Visitadores de las mis Audiencias y Chancillerías y Tribunales, se les ha de dar tambien Escribano aunque no sea del dicho Número, y no para otras algunas comisiones y negocios que no sean de esta magnitud, por ninguna causa ni razon que sea; y aunque de hecho se hagan los tales nombramientos, la cédula, comision, ó provision que sobre esto se despachare, sea obedecida y no cumplida, como expedida y librada en perjuicio de tercero y contra la voluntad y órdenes mias::: Y asimismo con calidad que para mayor fuerza y firmeza, execucion y cumplimiento de lo referido les haya de dar como les doy por Juez Conservador á uno de los del mi Consejo de Castilla::: que eligieren dichos Receptores, para que use y exerza la comision de proteccion y amparo, y en virtud de ella haga guardar, cumplir y executar todas las calidades, condiciones, extensiones y ampliaciones con plena jurisdiccion y facultad::: y para que siempre y en todo tiempo los ampare y defienda en todo lo que les toca y tocara por esta mi carta. Y asimismo quiero y mando, que para que los Ministros y Justicias á quien fueren cometidas las dichas comisiones tengan noticia del dicho privilegio y prohibicion de no poder usar ningunas ante Escribanos Reales, ni otros qualesquiera, se haya de notar y prevenir en los títulos que se despacharen así por el mi Secretario de Justicia como por otros qualesquier mis Secretarios ó Ministros á los Corregidores, Asistente, Gobernadores y Alcaldes mayores y otras Justicias, y á

los Jueces de comisiones en las que se les dieren, para que no despachen ni actúen en ningunas de las que les fueren cometidas por qualquiera de los dichos mis Consejos, Juntas y Tribunales arriba referidos, si no fuere ante Receptor del dicho Número; ni las dichas Justicias den cumplimiento á las cédulas, cartas y provisiones con que fueren requeridos, en que no vaya Receptor nombrado; apercibiéndoles que los autos que hicieren y fulminaren en contrario serán nulos, y las partes los han de poder reclamar como tales; y quiero que no hagan fé, ni se admitan en los Tribunales; y el Escribano ante quien se hubiere hecho incurra en pena de falsario: y contravinendo los dichos Jueces en usarlas, y las Justicias en dar los dichos cumplimientos, mando que tambien hayan de ser y sean multados y castigados; y declaro que no lo cumpliendo se les pueda poner y ponga por capítulo de residencia, demas de que por el Juez Conservador se ha de proceder contra ellos á que vuelvan, paguen y satisfagan al Receptor, á quien se declare debiere tocar el dicho negocio, todos los salarios, derechos y emolumentos, que debiere haber por razon de él; dexando el derecho á las partes interesadas en el dicho oficio para que ante el dicho Juez Conservador pidan resarcion de los daños que se les hubiere causado por la nulidad de los dichos autos. Y para mejor cumplimiento y execucion de todo lo referido, quiero y es mi voluntad que en las Secretarias de los dichos mis Consejos, Juntas y Tribunales, y en los demas oficios de Escribanos de Cámara, y mayores de Rentas, Contadurías de relaciones y mercedes, las de la razon, penas de Cámara y gastos de Justicia y Contaduria de contrabando, y sus Tenientes y oficiales mayores, y los otros oficios que hubieren despachado, ó á quien tocara despachar las comisiones y negocios arriba referidos de todos los dichos mis Consejos, Juntas y Tribunales por donde se mandaren dar, así por decretos míos señalados de mi Real mano, como en virtud de villetes y papeles, consultas, capítulos y querellas de parte, ú de oficio fiscal, y el Chanciller mayor y Registrador de la dicha mi Corte, y los de Ordenes, Millones y Indias, y

los de los demas mis Consejos, Juntas y Tribunales, y sus Tenientes y oficiales no puedan despachar ni despachen, firmar ni refrendar, ni firmen ni refrenden, tomar ni tomen la razon, ni sellen, registren ni pasen ningunas cédulas, comisiones ni despachos, en que se cometan negocios en que haya de intervenir Escribano, sin que en ellas vaya nombrado Receptor del dicho número: para lo qual mando que en los dichos oficios se haya de dar y dé certificacion de la comision, para que se reparta; y el Receptor á quien tocara, acuda con su despacho para que se llene en ella. Y para que se tenga noticia del dicho privilegio en los dichos oficios, mando asimismo que se haya de poner y ponga un traslado de él en cada uno; y contravinendose en qualquier manera, el dicho Juez Conservador pueda proceder y proceda al castigo; y sin embargo, los Jueces y personas á quien fueren cometidas, no las han de poder usar ni exercer, sino es ante Receptor del dicho Número, como está prevenido; y si por la dicha comision se les diere facultad de nombrar Escribanos, no lo han de poder hacer: y si de hecho, y contra el tenor de lo aqui contenido, se hicieren nombramientos de Escribanos en qualquiera de las dichas comisiones, que conforme á esta mi carta les tocaren, ó se les concediere facultad por los dichos mis Consejos, Juntas y Tribunales, para que los Jueces y Ministros á quien se cometieren puedan hacer los dichos nombramientos, desde luego en virtud de esta mi carta los declaro y doy por ningunos y de ningun valor y efecto; y quiero, y mando, que no valgan ni se use de ellos en manera alguna, por quedar como quedan revocados, para quando llegue el caso, qualquiera nombramiento que en contrario de esto se hiciera: y prohibo, defiendo y mando, que ningun Escribano pueda escribir en los negocios de las dichas comisiones, ni intitularse Escribano de ellos; y si lo hicieren, sean habidos por falsarios, y castigados por ello, y caigan é incurran en las penas en que conforme á las leyes de estos mis reynos caen é incurren los que usan de oficios para que no tienen poder ni facultad mia; en las quales desde luego los doy por condenados, lo contrario haciendo, demas de la nulidad de los autos que sobre

ello hicieren; y porque mi intencion y deliberada voluntad es que solos los dichos cien Receptores del Número de los dichos mis Consejos, han de ser proveidos para las dichas provisiones y negocios, y no otro Escribano alguno por ninguna causa que se ofrezca, ó pueda ofrecer. Todo lo qual se les haya de guardar, cumplir y executar inviolablemente, sin exceder de ello en cosa alguna: con declaracion que hago, que las comisiones y negocios que se dieren á Ministros togados del mismo Consejo por donde se despacharen, ó á los Alcaldes

de la dicha mi Casa y Corte, aunque no sean los tales negocios de la gravedad y magnitud que la dicha cédula de creacion de los dichos oficios refiere, en estas hayan de poder llevar y lleven Escribano de Cámara del Consejo, Junta ó Tribunal por donde se despachare la dicha comision, asistiendo él por su persona á ella; sin que pueda enviar ni dexar en su lugar Escribano Real, ni otro ninguno; porque en defecto de no ir, ó no asistir al dicho negocio el dicho Escribano de Cámara, haya de ir y vaya á él Receptor del dicho Número, como arriba se refiere.

(1) Por dec. del Consejo de 22 de Junio de 1774 á recurso de los Receptores se mandó por punto general, que los Procuradores de los Consejos en todos pleytos y causas en que se cargue la probanza á Receptor, tengan precisa obligacion á responderle en el preciso término de ocho dias, de como este los requiera con la certificacion de haber cargado la probanza, si ha de hacer ó no prueba; y pasado este término, no entregándole los despachos, ó despidiéndoles, le corran los salarios de cuenta de los mismos Procuradores.

(2) Y por auto de 26 de Abril de 1778. provehido por el Juez Conservador del Número de Receptores se mandó notificar á los Procuradores, que baxo la multa de 50. ducados aplicados por mitad en la forma ordinaria no firmen ni presenten pedimentos en ningun Tribunal, en que pidan á nombre de sus partes cometidos de qualesquier asuntos en que entiendan, sean de la naturaleza ó clase que fueren, sino es que precisamente se dirijan á que execute el negocio el Receptor á quien toque por su turno; y que los Escribanos de Cámara con ningun

pretexto, causa ni motivo admitan pedimentos de Procuradores, ni de las mismas partes, en que pidan cometidos, sino fueren con la precisa circunstancia de que pase el Receptor á la práctica del negocio que intentaren; y en su defecto los retengan, sin dar cuenta en el Consejo ni á ningun Juez de Comision, y si para la exacción de la multa, y proceder contra los inobedientes á lo demas que hubiere lugar; y que á las 24 horas de como el negocio, ó negocios se hubieren recibido á prueba, libren las certificaciones al Número de Receptores para que se repartan entre sus individuos; y lo mismo se entienda con los Contadores de las tomas de la razon, Chancilleres mayores ó sus Tenientes, para que aquellos no la tomen, ni estos sellen, firmen ni retreuden ningun despacho en que no haya nombrado Receptor del Número de esta Corte: y lo propio se execute y entienda con los Secretarios, Contadores oficiales mayores, y otras qualesquier personas de las Secretarias del Real Patronato, Gracia y Justicia, y demas que convenga.

LIBRO QUINTO

DE LAS CHANCILLERIAS Y AUDIENCIAS DEL REYNO; SUS Ministros y oficiales.

TITULO XVI.

Del Juez mayor de Vizcaya en Valladolid.

LEY consiguiente á la 4.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 23 de Mayo de 1805.

Creacion de una Comandancia general militar en el Señorío de Vizcaya, y de un Gobierno militar y político en Bilbao.

He tenido á bien crear una Comandancia general militar en el Señorío de Vizcaya independiente de la de Guipuzcoa, y un Gobierno militar y político en la Vi-

lla del Bilbao con todas las facultades anexas á los dos mandos, y la de no permitir se celebre Junta, Diputacion ó Congreso en todo el referido Señorío sin la anuencia y presidencia del Comandante general, ó de la persona que diputare al intento; bien entendido, que los sueldos y dotaciones militares correspondientes al mencionado distrito se han de satisfacer en lo sucesivo por los oficios de cuenta y razon del ejército de Castilla la vieja.

LIBRO SEXTO

DE LOS VASALLOS: SU DISTINCION DE ESTADOS Y FUEROS;
obligaciones, cargas y contribuciones.

TITULO PRIMERO

*De los Señores de vasallos, Grandes de España, y otros
títulos de Castilla.*

LEY I. *consiguiente á la 25.*

D. Carlos IV. por Real orden de 21. de Febrero y céd.
del Cons. de 8. de Agosto de 1806.

*Lo dispuesto sobre la vinculacion de los tí-
tulos de Castilla se entienda con los
de Baron.*

Por Real cédula de 29 de Noviembre de 1804, (*ley 25. de este tit.*) tuve á bien mandar que se tuviesen por vinculadas todas las gracias y mercedes de títulos de Castilla que se concediesen en lo sucesivo, siempre que no manifestase yo expresamente en tales gracias ó mercedes, ó pos-

teriores Reales órdenes, ser otra mi voluntad; sin que por esto se entendiesen libres los ya concedidos, sino que se estimase su naturaleza segun el fin de la concesion ó permiso para su venta ó enagenacion que despues de dichas mercedes hubiere yo concedido. Ahora con motivo de la instancia hecha por un agraciado con el título de Baron para sí, y todos los que llevasen la primogenitura de su casa, en solitud de que fuese servido de declarar esta Baronía vinculada en él y en sus sucesores; he venido en resolver que lo dispuesto en la citada Real cédula debe entenderse también con los títulos de Baron.

TITULO IV.

De los Militares; sus fueros, privilegios y exenciones.

LEY I.

D. Carlos IV. en Talavera de la Reyna por Real orden circular de 26 de Diciembre de 1803.

Fuero militar de los Intendentes, Comisarios ordenadores y de Guerra, y demas dependientes del ramo de Hacienda del Ejército.

Enterado de la solicitud hecha por la viuda de un Comisario ordenador sobre que no se la moleste por el Tribunal de la Capitanía General de Castilla la Nueva para el pago de los alquileres de la casa que habita en Madrid, hasta que el Consejo Real decida el juicio pendiente en él sobre tasa y retasa, y de lo representado al propio tiempo por el Intendente de di-

cha Provincia, pretendiendo el conocimiento de toda instancia contra los sujetos al fuero de la Intendencia de su cargo, en cuya clase y caso considera dicha viuda; he resuelto, que el Juzgado de la Capitanía General es el competente para conocer de este negocio y de todos los de su naturaleza; por quanto los Intendentes, Comisarios ordenadores y de Guerra, y demas dependientes del ramo de Hacienda del Ejército, no gozan otro fuero en sus causas particulares, civiles y criminales que no dimanen de sus oficios, que el ordinario de la jurisdiccion militar que exercen los Capitanes Generales con los Auditores de Guerra, y mucho ménos sus viudas, con arreglo á lo prevenido en la Ordenanza de Intendentes,

y posteriores Reales órdenes concernientes al asunto.

LEY II.

D. Carlos IV. en San Ildefonso por Real orden de 23 de Agosto, y circ. del Cons. de 24 de Diciembre de 1805.

Fuero de los empleados en las Reales obras de fortificacion.

Declaro por punto general, se entienda para lo sucesivo concedido el fuero de ordenanza en todos los casos y delitos que se cometan por los empleados, dependientes ó trabajadores, aunque sean cometidos fuera de las horas de trabajo, ínterin sean tenidos y reputados como tales empleados y dependientes de las Reales obras de fortificacion.

LEY III.

D. Carlos IV. por Real orden de 1.º inserta en circular del Consejo de 19 de Nov. de 1805.

Fuero de los individuos trabajadores en las fábricas sujetas á la direccion del Real Cuerpo de Artilleria.

Declaro, que generalmente deben gozar el fuero militar de Artilleria todos los individuos que trabajen en las fundiciones, maestranzas, parques y fábricas que estan al cargo y baxo la direccion del Real Cuerpo de Artilleria, aunque se manejen por asentistas, así en los Departamentos de España como en los de Indias; de cuyo fuero disfrutarán únicamente mientras subsistan ó continuen empleados ó trabajando en ellos, sea con plaza fixa ó accidental; pero quedarán privados de esta distincion en el instante que sean excluidos por las fábricas ó se despidan de ellas voluntariamente.

Al propio tiempo, y para aclarar las dudas que han ocurrido sobre si en el referido fuero se comprehende la exención de los sorteos para el Ejército y Milicias; he resuelto que sean exceptuados solo aquellos maestros principales y empleados facultativos que se hagan mas necesarios en las fábricas y de difícil reemplazo. Y á efecto de precaver todo abuso, se pasarán á los Intendentes, y Justicias á quienes corresponda, por los Subinspectores de los Departamentos de Artilleria noticias de los nombres, patria y demas circunstan-

cias, como expresa el artículo 35 parrafo 17. número 2. de la Real ordenanza de 27 de Octubre de 1800 sobre el reemplazo del Ejército, de los individuos que deben estar exceptuados, tanto en las fábricas que se manejan por el Cuerpo, como en las que se administran por asiento.

LEY IV. consiguiente á la 7.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resolucion á consulta del Consejo de Guerra, y orden circular de 26 de Mayo de 1806.

Fuero entero militar correspondiente á los milicianos que pasaren á servir en los Cuerpos del Ejército.

He resuelto, que todos los soldados milicianos, que conforme al nuevo arreglo hayan pasado y pasaren á servir en los Cuerpos del Ejército, gocen del fuero militar entero que disfrutaban los soldados con quienes hagan el servicio; tratandose en los pueblos de su naturaleza y vecindad á sus mugeres, familias y casas con las mismas distinciones y prerrogativas que á estos corresponden; conservandolos en el goce de los bienes en que se hallaban quando salieron para tan importante servicio, hasta que cumplido vuelvan á sus hogares; considerandoseles como en faccion, y teniendo á sus mugeres, hijos ó padres por personas hábiles para el manejo, ciudado y cultivo de las tierras, viñas y demas fincas propias, arrendadas ó aforadas, donde las haya de esta clase, sin que se haga la menor novedad; pudiendo hacer los pagos de la renta ó foro, como si se hallase presente el marido ó padre; y que si los dueños de dichos terrenos ó posesiones intentaren en la ausencia de los mencionados soldados dar en foro ó enagenar alguna finca de las arrendadas por estos, puedan pedirla por el tanto sus mugeres, hijos ó padres, é intervenir en su nombre los contratos y escrituras, y continuar, sino se enagena, en los arrendamientos; no debiendo cumplir sus plazos hasta que se hayan restituido los soldados á sus pueblos; quedando entretanto sus familias baxo la proteccion del Capitan General de la Provincia, á quien deberán acudir con qualquiera queja que tengan por medio del Coronel del regimiento de Milicias á que pertenezca el soldado.

LEY V.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 26 de Mayo de 1806.

Modo de proceder los Cuerpos privilegiados militares con accion atractiva en los casos de comprenderse individuos de ellos en una misma causa.

Con motivo de la reclamacion hecha por parte del Real Cuerpo de Artilleria del Ejército de unos marineros de la esquadra armada, que aparecian reos en la sumaria formada sobre heridas dadas á dos cabos del expresado Cuerpo ::: y enterado de la competencia formada con el Comandante General de dicha esquadra, con el fin de evitar semejantes disputas entre Cuerpos de iguales privilegios, y de facilitar al mismo tiempo la administracion de justicia; me he servido declarar generalmente, que quando sean comprendidos en una misma causa individuos de los diferentes Cuerpos privilegiados con la accion atractiva, sin formar entre sí competencia, se remita testimonio de lo que resulte en la sumaria formada por el que ha empezado á entender en la causa con el reo ó reos á su respectivo Gefe, para que siga con ella; comunicandose reciprocamente las noticias ó certificaciones que se pidan, del mismo modo que se practica en las causas de complicidad entre individuos de distintos Cuerpos ó Jurisdicciones que no tienen la qualidad atractiva.

LEY VI. consiguiente á la 22.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden circular de 15 de Octubre de 1804.

Declaracion del conocimiento concedido á la jurisdiccion de Rentas en causas de contrabando contra individuos del Ejército.

Enterado de que por la Subdelegacion de Rentas del Principado de Cataluña se ha condenado, de resultas de una causa de contrabandos á un Subteniente del regimiento de Infanteria de Voluntarios de Castilla, no solo al pago de las cartas y del treinta por ciento del valor de los géneros aprehendidos, sino tambien á quatro años de suspension de ascenso, sin embargo de ser esto último una pena militar, y de las que no se pueden imponer

por ninguna otra autoridad mas que la Real; me he dignado declarar, que el conocimiento concedido á la jurisdiccion de Rentas en mi Real decreto de 29 de Abril de 1795. (*ley 22. de este título*) de las causas de contrabando, y demas que en él se expresan, contra los individuos del Ejército en tiempo de paz con sujecion á la Real cédula de 8 de Febrero de 1788. (*ley 18. tit. 1. lib. 2.*) que en el mismo decreto se cita, ha debido y debe entenderse únicamente para la declaracion de los comisos, multas, y demas que correspondan al resguardo y reintegro de los Reales intereses; pero no de modo alguno para imponer penas de distinta clase, cuya aplicacion pertenezca á los Gefes y Tribunales militares, con consulta mia en los casos necesarios, segun se hallaba ya dispuesto anteriormente por la Real orden de 21 de Julio de 1769 (*l. 3. t. 9. de este lib.*) y conforme con las mencionadas Reales resoluciones quiero, que dadas las sentencias por los Juzgados de Rentas, el Superintendente general ó supremo Consejo de Hacienda, declarado el fraude y las penas pecuniarias á que sean acreedores los delinquentes, pasen los Intendentes y Subdelegados copia de ellas, con testimonio circunstanciado de lo que resulte de los autos á los respectivos Capitanes Generales, ó Gefes de que dependan los reos, siempre que los consideren dignos de mayores castigos; á fin de que se proceda con arreglo á las Reales ordenanzas y órdenes posteriores á imponerles los que estanseñalados, y convingan al escarmiento de un crimen tan denigrativo y ageno del honor y fidelidad con que deben servir y conducirse los militares; precedida mi Real aprobacion en los casos que para las demas causas se ha reservado en las propias Reales ordenanzas del Ejército.

LEY VII. consiguiente á la 22.

D. Carlos IV. en Aranjuez por orden circular de 10 de Junio de 806.

Los Inválidos y sus mugeres se consideren como los demas militares en los casos de fraudes contra la Real Hacienda.

Me he servido declarar, que los individuos de los Cuerpos de Inválidos y sus mugeres deben ser considerados en los casos de fraudes contra la Real Hacienda.

da, de que trata la Instrucción de 8 de Junio del año anterior, como los demas militares, y con arreglo al Real decreto de 29 de Abril de 1795 (*ley 22. de este tit.*), y á la Real orden de 15 de Octubre de 1804 (*ley anterior*).

LEY VIII. consiguiente á la 22.

D. Carlos IV. en Aranjuez por orden circular de 16 de Junio de 1806.

Conocimiento en causas de contrabando contra reos militares en tiempo de guerra, y en caso de no tener cómplices de otro fuero.

Con motivo de competencia seguida por el Coronel del regimiento de Infantería de Extremadura con el Gobernador de la Plaza de Málaga, de resultas de haber sentenciado á dos años de recarga sobre el tiempo de su empeño á un cabo del mismo Cuerpo, por haberle aprehendido los dependientes del Resguardo de Rentas con unos trozos de tabaco de hoja del Brasil; me he servido declarar, que el referido Coronel obró con arreglo al Real decreto de 29 de Abril de 1795 (*ley 22. de este tit.*): y á fin de evitar en lo sucesivo semejantes competencias, he resuelto, que en tiempo de guerra, y quando los reos militares no tienen cómplices de otro fuero como en el presente, en lugar del inmediato Gefe que se menciona en el expresado Real decreto, sean los Capitanes Generales, Gobernadores de las Plazas, ó Comandantes de Armas del destino, segun los pueblos donde ocurran las aprehensiones, los que conozcan y sentencien las causas de contrabando y fraude que se formen contra reos militares, en los propios términos que se previene en el enunciado Real decreto de 29 de Abril de 1795.

LEY IX.

D. Carlos IV. en S. Lorenzo por Real orden de 14 inserta en circular de 31 de Octubre de 1806.

Conocimiento de causas de contrabando contra individuos de los Cuerpos privilegiados del Ejército.

Enterado de la duda ocurrida sobre si

comprende á los individuos de los Cuerpos privilegiados del Ejército que tienen fuero y juzgado particular, la Real orden de 16 de Junio de este año que comete á los Tribunales de los Capitanes Generales de Provincia, Gobernadores de las Plazas, ó Comandantes de Armas del destino, el conocimiento de las causas de contrabando y fraude que se formen en tiempo de guerra contra militares; me he servido declarar, que no alcanza la expresada providencia á los referidos Cuerpos, por el fuero privilegiado que disfrutan; y deben de consiguiente ser juzgados sus individuos por sus respectivos Gefes y Tribunales en las causas de dicha clase.

LEY X.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por orden circular de Diciembre de 1806.

Modo de proceder en causas contra los militares procesados por los Tribunales de Rentas.

Observandose lo mandado en el artículo 19 de la Real instrucción de 8 de Junio de 1805, con referencia á lo prevenido en el Real Decreto de 29 de Abril de 1795 (*ley 22. de este tit.*) acerca del fuero de la Milicia de tierra y mar en tiempo de guerra, y á lo dispuesto en la Real orden de 15 de Octubre de 1804 (*ley 6. anterior*), para la imposicion y execucion de las penas personales de los reos de las causas de fraude sujetos á la jurisdiccion militar, siempre que los Tribunales de Rentas formen proceso á qualquier individuo militar en causa de complicidad con reos de otras clases, asista el Gefe de aquel para las confesiones, segun está igualmente mandado; y concluido, lo pase el Subdelegado de Rentas con su sentencia al mismo Gefe militar, para que, examinando si se ha faltado al fuero de guerra, lo advierta, y en caso de estar arreglada ponga á continuacion: está satisfecha la justicia y en nada se quebranta la ordenanza; firmandolo y encabezandolo con todos sus dictados, sin que se le atribuya el carácter de conjuer.

TITULO V.

Del Supremo Consejo de Guerra.

LEY I.

D. Carlos IV. por Reales órdenes de 28 de Febrero de 804, y 15 de Julio de 1806.

Con el Consejo de Guerra se consulten, en el tiempo y casos que se expresan, las causas contra militares formadas en el Reyno de Indias.

Consequente á lo resuelto en la Real orden de 28 de Febrero de 1804 sobre que los procesos formados en los dominios de Indias contra los individuos de sus tropas, que, por no conformarse los Vireyes y Capitanes Generales con las sentencias de los Consejos ordinarios, se remitian á la via reservada de la Guerra, fuesen dirigidos en adelante al Consejo Supremo de ella; y enterado de lo representado por el Capitan General del Reyno de Chile sobre las dificultades que por la distancia á esta península se ofrecian para el cumplimiento de aquella Real determinacion; me he servido mandar á consulta de dicho Consejo Supremo, que en tiempo de guerra, en el caso de no conformarse los Vireyes y Capitanes Generales con las sentencias de los Consejos ordinarios de Oficiales por solo el dictámen del Auditor, se revean los procesos, acompañándole un Oidor de la Real Audiencia del distrito, y tres si el delito mereciese la imposicion de pena afflictiva ó capital; pero que en el de paz tenga su debido cumplimiento lo prevenido en la citada Real orden de 28 de Febrero de 1804.

LEY II.

D. Carlos IV. por Real orden de 27 de Noviembre de 1806.

Los Juzgados de Milicias consulten con el Consejo de Guerra las causas en que se imponga pena afflictiva á los reos.

Atendiendo al abuso constante in-

troducido en los Juzgados militares de Milicias de no consultarse, como se debe, con el Consejo de Guerra en Sala de Justicia las causas en que se impone ó pueda imponerse á los reos pena afflictiva, por cuyo medio, sobre obrarse conforme á la ley, se evitarian gravísimos perjuicios; he resuelto, que se les prevenga que consulten en lo sucesivo las citadas causas en derecho con el Consejo de Guerra con arreglo á ordenanza.

LEY III.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden circular de 25 de Diciembre de 1806.

No puedan ser Jueces ni Asesores los que hayan sido Fiscales en causas de los Juzgados militares; y se consulten al Consejo de Guerra todas las que contengan pena corporal.

Con motivo de cierta multa impuesta por el Consejo de la Guerra al Auditor del Departamento de Cádiz, por haber hecho de Fiscal y Juez en una misma causa, y no consultado la sentencia de diez años de presidio pronunciada en ella; y para evitar los perjuicios de práctica tan irregular; he resuelto, que los Letrados que hayan intervenido como Fiscales en las causas de los Juzgados militares de Ejército, Marina y Milicias, si pasaren á ser Auditores ó Asesores, no puedan entender en clase de Jueces ó Asesores en las mismas causas; y que en todas las que impongan á los reos pena corporal, pongan por final de los autos definitivos ó sentencias, que ántes de su execucion se consulten con el Consejo; el qual, ó la aprobará desde luego, ó mandará que venga por su orden, y oirá á los reos en segunda instancia, ó en tercera si lo requieren sus circunstancias.

TITULO VI.

Del servicio Militar.

LEY I.

D. Carlos IV. por Real orden de 2, inserta en circular del Consejo de 7 de Noviembre de 1806.

Sobre que las exenciones del sorteo para Milicias se reduzcan á las establecidas en la ordenanza para el reemplazo del Ejército.

Para minorar el gravámen del sorteo á la clase de labradores; he resuelto se reduzcan las exenciones por lo respectivo á Milicias, á las que establece el reglamento ú ordenanza de 27 de Octubre de 1800 para el reemplazo del Ejército; quedando en su fuerza y vigor lo prevenido en los artículos 6. y 8. tit. 10. de la Real declaracion de Milicias, en punto á las facultades que éstos conceden á los Coroneles y al Inspector, para decidir los asuntos de sorteos y otros del servicio personal de Milicias, ampliándolas aun mas, si se juzgase necesario.

LEY II.

D. Carlos IV. por Real orden de 13, comunicada en circular de 18 de Diciembre de 1806.

Sobre que solo se exceptúen del sorteo para Milicias y Quintas los empleados en Rentas desde la clase de Tenientes Comandantes arriba, pero no los inferiores.

Enterado de la representacion hecha por algunos Subdelegados de Rentas, solicitando exención de los sorteos de Milicias para varios dependientes de ellas, sin arreglarse á lo prevenido en el número único del párrafo 12, artículo 35. de la ordenanza de reemplazo de 27 de Octubre de 1800 (*ley 14. de este tit.*); me he servido resolver, que solo se exceptúe de entrar en suerte para Milicias y Quintas del Ejército desde la clase de Tenientes Comandantes arriba; pero de ningun modo á los inferiores, á los guardas, y demas que sirven casi sin título; y que para obtener tales plazas debieran haber servido en la carrera militar, con lo que se lograria no estuviesen sujetos á sorteos.

TITULO VII.

Del servicio de la Marina; fuero y privilegios de sus matriculados.

LEY I.

D. Carlos IV. en San Ildefonso por Real orden circular de 20 de Agosto de 1806.

Jurisdiccion de la Direccion general de la Armada; y privilegios de sus individuos como tropa de Casa Real.

Declaro, que el Juzgado de la Direccion general de la Armada en Madrid, siendo igual en todo á los de Guardias de Infantería Española y Walona, Alabarderos y Carabineros Reales, debe tener la misma accion atractiva que gozan estos Cuerpos; estando en un todo anivelados con ellos, tanto en el modo y forma de enjuiciar las causas y formar las sumarias,

quanto en el goce de los privilegios y consideraciones que en todos casos y circunstancias tengan sus individuos como tropa de Casa Real; no queriendo se iguale en este punto el Real Cuerpo de Guardias de Corps, que teniendo fuero activo y pasivo, no debe en ningun caso perder el derecho de atraccion que le corresponde.

LEY II.

D. Carlos IV. en San Ildefonso por Real orden circular de 20 de Agosto de 1804.

Conocimiento de la Jurisdiccion de Marina y la de Rentas en materia de naufragios.

Para evitar en lo sucesivo las compe-

tencias que han ocurrido entré la Jurisdiccion de Marina y la de Rentas en materia de naufragios; declaro, que la Jurisdiccion de Marina ha de conocer y tratar de las diligencias concernientes al salvamento y seguridad de las embarcaciones naufragas, y de sus cargamentos, con la precisa intervencion de la de Rentas, depositándose los géneros y efectos en las aduanas: que quando en ellas no haya comodidad, ó por evitar gastos pidiesen los interesados su colocacion en almacenes particulares, cómodos y seguros, se conceda, siempre que ambas Jurisdicciones no hallen inconveniente, dándose una llave de ellos al Administrador de Rentas: que quando los géneros no tengan dueño, ó no se presente en tiempo oportuno, puedan valerse dichas Jurisdicciones de este mismo medio, y en los mismos términos, siempre que los juzguen conducente: y que por lo respectivo á las embarcaciones francesas se proceda con arreglo á lo dispuesto en el art. 14. de la convencion de 2 de Enero de 1768, pero siempre con igual intervencion.

LEY III.

D. Carlos IV. por Real orden de 14 de Enero inserta en circular del Consejo de 17 de Mayo de 1806.

Observancia de la ordenanza de matrículas, y órdenes consiguientes en favor de los matriculados.

He venido en resolver, que los Jueces

de todas las Jurisdicciones, á quienes compete por su situacion local, por ningun pretexto dexen de observar puntual y cumplidamente la ordenanza de matrículas de 12 de Agosto de 1802, (*leyes 3. hasta 13. de este tit.*) con las Reales órdenes que la adicionan ó aclaran; quedando responsable el Juez que así no lo hiciere, á la multa ú otra pena que tuviere á bien señalar: que se reencargue el cumplimiento del artículo 7. título 5. de dicha ordenanza (*ley 17. tit. 30. l. 7.*), conforme con las Reales órdenes de 27 de Febrero de 1779, y 6 de Septiembre de 1804: que desde luego quede abolido el derecho que se cobra de diez reales de vellon por cada barco que entra con pescado en el puerto de Cádiz, sea qual fuere la aplicacion de esta gabela: que ningun Juez se mezcle en castigar á los matriculados con multas y prisiones sin noticia de sus Gefes privativos, y conocimiento seguro de la causa que origine esta medida: que no se les impida, previo el consentimiento de sus legítimos superiores, el que apliquen parte del flete de sus embarcaciones en la limpia de fondos de los muelles y sus escalas, porque esto es de ordenanza, aunque abusivamente no se observa; y finalmente, que se abstenga la Jurisdiccion Real ordinaria de conocer de causa alguna de matriculado, conminando con multa ú otra pena al Juez ó Tribunal que no cumpliere esta disposicion.

TITULO IX.

De los empleados en el servicio de la Real Hacienda; su fuero, privilegios y exenciones.

LEY I.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 24 de Mayo de 1803, inserta en otra de 1.º de Octubre de 804.

Observancia de las órdenes prohibitivas de separarse de sus destinos los empleados en la Real Hacienda, sus mugeres é hijos.

En vista de la falta de cumplimiento de las Reales órdenes de 5, 7 y 10 de Di-

ciembre de 1799. (*ley 15. tit. 22. lib. 3.*), 2 y 3 de Marzo de 800. (*nota 7. tit. 22. lib. 3.*), y 6 de Abril de 801. (*ley 10. de este tit.*) relativas todas á que no puedan separarse de sus destinos los empleados, jubilados y reformados, y las mugeres é hijos de éstos; y para que se lleve á efecto la pena establecida, me he servido mandar, que de ningun modo se abone en cuenta á los Tesoreros los sueldos que hubiesen satisfecho ó satisfagan á los em-

pleados, jubilados y reformados que se hayan ausentado, ó que hayan permitido que lo executasen sus mugeres é hijos sin expreso Real permiso. Y para evitar tales excesos, mando, que los Intendentes, Subdelegados, Contadores, Administradores y Comandantes de los Resguardos no extiendan ni autoricen las nóminas ó relaciones mensuales, sin que les conste que los empleados, de que se componen, no han faltado á las enunciadas Reales disposiciones; pues en caso contrario deben excluirlos de ellas, y dar cuenta para las demas providencias oportunas; quedando todos responsables de la menor transgresion.

LEY II.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 6 de Abril de 806.

Los empleados en la Real Hacienda se presenten al Juez de Arribadas dentro de dos meses en el puerto de su embarque.

Teniendo presente que todos los pro-

vistos en empleos de la Real Hacienda de América con Real título deben presentarse al Juez de Arribadas del puerto que elijan, para embarcarse en el preciso término de dos meses, como se previene en los mismos títulos, y tambien que si faltaren á su cumplimiento, quedarán sin efecto las gracias; he resuelto, que se observe puntualmente lo mismo con los que obtengan empleo, comision, encargo ú otra gracia de las que me digno dispensar por Reales órdenes; y que ántes de dar á estas su debido cumplimiento, acrediten los interesados que actualmente residan en la Corte, y los que en lo sucesivo sean agraciados, que se han presentado al Juez de Arribadas dentro del término preciso de dos meses en el puerto de su embarque, á fin de aprovechar la primera ocasion oportuna, como los provistos con Real título; pues de lo contrario quedarán sin efecto alguno las órdenes expedidas.

TITULO X.

Del Supremo Consejo de Hacienda.

LEY I. consiguiente á la 9.

D. Carlos III. en el Pardo por resolucion de 1.º de Febrero de 1778.

Prohibicion á los Intendentes de la Corona de Aragon de conceder establecimientos de efectos pertenecientes al Real Patrimonio.

Habiendo llegado á mi noticia, que los Intendentes de Aragon, Cataluña, Valencia y Mallorca conceden por sí á nombre mio, pero sin mi noticia, algunos establecimientos de edificios, tierras y otros efectos correspondientes á mi Real Patrimonio en aquellos Reynos y Principado; mando, que en lo sucesivo no usen de la facultad de conceder semejantes establecimientos, ni gravar en manera alguna los efectos de mi Real Patrimonio, de qualquiera naturaleza y condicion que sean, sin que preceda noticia y expresa Real determinacion mia.

LEY II. consiguiente á la 8.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden de 2 inserta en circ. del Cons. de 21 de Octubre de 806.

Observancia del Real decreto preventivo del conocimiento de los Intendentes y Juzgados de Rentas en causas de interés del Patrimonio y derechos Reales.

Para cortar las competencias que se experimentaban continuamente entre las jurisdicciones y facultades de los Intendentes y los Tribunales de dentro y fuera de la Corte, especialmente en Valencia, se sirvió el Señor D. Carlos III. expedir el Real decreto de 10 de Junio de 1760, (*ley 8. de este título*): Pero habiendo observado, por las muchas competencias que para su decision se remiten todos los dias al Ministro de Hacienda por los Intendentes y Subdelegados de Rentas, que las Audiencias y demas Tribunales ordinarios toman conocimiento de los negocios de Rentas y

otros de la Real Hacienda con grave perjuicio de esta y de los interesados, no obstante haberse circulado con fecha de 16 del mismo mes de Junio á todos los Consejos, á las Chancillerías y Audiencias del Reyno, y tambien á los Intendentes; me he servido mandar, con objeto de ocurrir á los daños que se experimentan sobre el particular, que se vuelva á circular ahora el citado Real decreto, como se hizo entón-ces, encargando á todos y á cada uno de los Tribunales del Reyno su entera y puntual observancia.

LEY III. consiguiente á la 16.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real decreto de 12, inserto en cédula del Consejo de Hacienda de 27 de Febrero de 1803.

Orden de proceder en el Consejo de Hacienda en los pleytos de reversion á la Corona.

Con el justo fin de evitar motivos de quejas y reclamaclones de los interesados en los pleytos de reversion á la Corona, é impedir dilaciones voluntarias y perjudiciales; he resuelto con arreglo á las leyes declarar y establecer el orden y la forma especial de proceder, que se ha de observar de aquí adelante en dichos pleytos.

Llegado que sea el caso de reversion por la muerte sin sucesion legítima del poseedor de bienes donados por el Señor Rey D. Enrique II, mandará mi Consejo de Hacienda poner en posesion de ellos á la Corona, luego que el Fiscal lo pretenda con documentos que acrediten la calidad reversible de los bienes, y la muerte sin sucesion legítima de su último poseedor; y lo mismo se hará en qualquiera otro caso de reversion prevenido en las mercedes de los demas Señores Reyes mis progenitores, verificado que sea el de vacante actual; quedando sin efecto legal contra la Corona, las posesiones que por mandado de los Jueces ordinarios ú otros Tribunales hubieren tomado ántes ó despues qualesquiera personas de los mismos bienes: y si alguno se creyere con derecho de suceder en todos ó en parte de ellos por justos títulos diversos del de la reversion y exclusivos de él, deberá poner la

correspondiente demanda en el Consejo, y presentarlos en el preciso y perentorio término de noventa dias primeros siguientes al de la toma de posesion por la Corona; y haciéndolo así, se exáminará dentro de otros quarenta dias, tambien precisos y siguientes á aquellos, en un artículo sumario y semejante á los de administracion de los juicios de tenuta, y se decidirá con citacion y audiencia de las partes, y vista formal, si corresponde encargar la administracion libremente ó con fianzas al demandador de dichos bienes, ó si por el contrario ha de continuar la Corona en la posesion de ellos hasta la decision del juicio principal, que será recibido á prueba en la misma providencia por el término de la ley, con la calidad de no haberse de prorogar ni suspender por causa alguna; executándose la determinacion del artículo, de que tampoco se admitirá súplica, ni otro recurso ordinario ó extraordinario; y continuándose despues el juicio principal por todos sus trámites, hasta que se determine por sentencia de vista y revista; consultándose ésta con los fundamentos de su apoyo, los votos en contrario si los hubiere, y el memorial ajustado para la resolucion de mi Real agrado. Pero si el demandador no pusiere la demanda, ó aunque lo hiciere, no presentare los títulos en dicho término perentorio de noventa dias se le admitirá aquella, y seguirá el juicio en la forma expresada, sin hacerse novedad en la posesion; y lo propio se observará en el caso de no haberse pedido por el Fiscal, ni dado por consiguiente á la Corona la posesion de los bienes reversibles en el término de noventa dias contados desde el de la vacante actual de ellos, y en el de ponerse por el Fiscal la demanda de reversion por translineacion anterior, á ménos que en qualquiera de estos dos casos se excuse el demandado á presentar sus títulos, ó no los presentare en el término tambien perentorio de quarenta dias siguientes al de la notificacion de la demanda; pues entónces se pondrá en posesion á la Corona, y continuará el juicio, sin admitirse reclamacion en contrario, sean los que fueren los fundamentos, causas y motivos con que se intentare.

TITULO XVII.

De los pechos y servicios, imposiciones y tributos.

LEY I.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. del Consejo,
y cédula de 26 de Junio de 1805.

*Contribucion de un tres y un tercio por
ciento sobre todos los frutos exentos
de diezmar.*

He resuelto, que en mis dominios de España é islas adyacentes se contribuya á mi Real Hacienda de los frutos exentos de diezmar en algunos pueblos, ya por la costumbre observada ó ya en virtud de la provision ordinaria de nuevos diezmos, con la tercera parte de lo que deberian satisfacer de diezmo eclesiástico, á no mediar semejante exención; y que se lleve á efecto esta contribucion con arreglo á los capítulos siguientes.

1 Se exigirá un tres y un tercio por ciento en especie de todo fruto de la tierra, de cualesquiera clase y naturaleza que sea, y de toda cria de ganado mayor ó menor y aves, de que en qualquiera parroquia ó dezmatorio de mis reynos de España é islas adyacentes no se pague diezmo eclesiástico á la cilla comun de partícipes, ó privativamente á los Curas ú otros perceptores, ó á los Maestrazgos ó Encomiendas de las Ordenes Militares, ó á otros vasallos legos que sean decimadores.

2 Pero quando se estime muy embarazosa la cobranza en especie por su menudencia, ó por la dificultad de separar la parte decimal, como suele suceder con las hortalizas, legumbres y frutas, se verificará la contribucion del tres y un tercio por ciento en dinero, sobre el valor que se les regule; y en la propia forma se exigirá sobre el precio de los arrendamientos ó ventas de productos de montes donde la bellota, la castaña, ú otras cualesquiera producciones no esten sujetas al pago del diezmo eclesiástico.

3 Si las crias de ganado no llegaren al número que adeude cabeza ó animal entero, se regulará su valor por peritos, y de él se exigirá en dinero el mismo tres y un tercio por ciento; y en el caso de

que el contribuyente no se conforme con la tasacion, por parecerle excesiva, tendrá la accion de ceder á mi Real Hacienda la cabeza por el abalúo hecho, entregándosele por el recaudador el resto, rebajado el importe de la contribucion.

4 Si no se pagare diezmo eclesiástico de algun fruto de la tierra, ó especie de ganado, en la parroquia ó dezmatorio de la vecindad del dueño, ó en la parroquia ó dezmatorio en donde se coja el fruto ó paste el ganado, se liquidará la parte que no pague diezmo; y de ella se cobrará el tres y un tercio por ciento, entendiéndose lo mismo con la lana ó cualesquiera otro esquilmo.

5 Se comprenden en esta contribucion las avejas, la miel y la cera, en donde quiera que no se pague diezmo eclesiástico por la multiplicacion de los enxambres, por la cera, ó por la miel; y en quanto á las colmenas que se traslocan, se guardará la regla dada en el capítulo 4. por lo respectivo á frutos y ganados.

6 Se formará un registro general de todas las especies que no paguen diezmo en cada una de las parroquias ó dezmatorios de las diócesis de estos reynos é islas adyacentes; á cuyo fin la Comision Gubernativa remitirá por medio de los Intendentes un interrogatorio impreso, arreglado á los artículos de esta Real cédula, á los Ayuntamientos, Cuerpos ó personas que estime apropósito; estando todos obligados á contestar fiel y puntualmente en el término que les señale la misma Comision.

7 La administracion y recaudacion de los productos de esta contribucion estará á cargo de la Comision Gubernativa por medio de sus Comisionados principales en las capitales de las provincias, y de sus subalternos en las cabezas de partido, por quienes se nombrarán los recaudadores en los pueblos y dezmatorios, ó se practicarán arrendamientos donde convinieren, conforme á las órdenes é instrucciones que la misma Comision les comunique; habiendo de ser todos y cada uno en

G

su clase reconocidos por tales administradores y recaudadores, y de franquearseles por las Justicias y Tribunales de mis reynos todos los auxilios que necesiten para el mejor desempeño de su oficio.

8 La Comision Gubernativa decidirá las dudas que ocurran en la execucion de lo contenido en esta Real cédula, al modo

que lo practica en todo lo relativo á la administracion y recaudacion de los arbitrios específicamente destinados á la Consolidacion de Vales: y los casos graves, ó que exijan regla general, los hará presentes al Consejo con su dictámen, para que consulte á mi Real Persona lo que corresponda.

TITULO XIX.

De los bagages, utensilios y alojamientos de la tropa.

LEY I.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 2 inserta en circ. de 15 de Mayo de 1805.

Sobre la presentacion de recibos de los subministros hechos á las Tropas por las Justicias para su pago en las Tesorerías de Ejército.

Con motivo de las dudas ocurridas á los habilitados de los Cuerpos en admitir los recibos de subministros hechos antes de las órdenes expedidas ultimamente, señalando el término en que deben presentarse en los oficios y cargarse á los Cuerpos los citados recibos; he resuelto que las Justicias de los pueblos, Proveedores, y Contadurías de Provincia, presenten sin excusa en las Contadurías

de Ejército los recibos que adquieran dentro del año contado desde su fecha, como está mandado en las dos Reales órdenes de 18 de Octubre de 1751 y 17 de Marzo de 1804 (*nota II. de este tit.*); y que las expresadas Tesorerías de Ejército verifiquen sus resúmenes y giren los que competan á los oficios de cuenta y razon donde residan los Cuerpos; de modo que estos los reciban en el término preciso de otro año contado desde que las Justicias ó Proveedores los presentaron en las Tesorerías de Ejército; esto es á los dos años de la fecha de los recibos; pues de lo contrario no se admitirán por los Cuerpos, y serán responsables á su pago los que hayan contribuido á su demora.

LIBRO SEPTIMO

DE LOS PUEBLOS; Y SU GOBIERNO CIVIL, ECONÓMICO Y POLÍTICO.

TITULO PRIMERO

De los muros, castillos y fortalezas de los pueblos.

LEY I. *consiguiente á la 5.*

D. Carlos IV. en San Ildefonso por Real orden de 12 de Agosto de 1790, inserta en circular de 16 de Agosto de 1806.

Reparacion de los edificios situados en la distancia prohibida al rededor de las plazas y sus muros.

Enterado de los edificios que hay

establecidos contra ordenanza dentro de la distancia de 1500. varas de las fortificaciones de las plazas del Reyno de Valencia, permito que subsistan en los términos que ahora se hallan, y que puedan repararlos y entretenerlos sus dueños; pero no reedificarlos ni aumentarlos en su planta y elevacion; ni establecer otro alguno de nuevo en los sitios prohibidos sin Real

probación; debiendo los Gobernadores celar con el mayor cuidado la observancia de esto, especialmente en aquellos edificios que se hallan inmediatos ó sobre los terraplenes y parapetos, y que interceptan ó hacen difícil el tránsito por tales parages; pues semejantes abusos son manifiestamente opuestos á ordenanza y en gravísimo perjuicio de la defensa de las plazas.

Para que ningun vecino pueda alegar ignorancia, publicarán los Gobernadores respectivos esta providencia por medio de bandos en la forma acostumbrada,

advirtiéndolo á los dueños de los edificios, que en caso de ser necesario demolerlos, por convenir al Real servicio, no podrán solicitar reintegro alguno de los perjuicios que de ello se le sigan.

Y con la mira de libertar á los propietarios de la necesidad de recurrir á la Superioridad, por la licencia de hacer pequeños reparos para la conservación de sus edificios situados en la distancia prohibida al rededor de las plazas; he resuelto se observe en todas las del Reyno, excepto las de los dominios de Indias y de Africa, esta Real orden.

TITULO II.

De los Concejos y Ayuntamientos de los pueblos.

LEY I. *consiguiente á la 8.*

D. Carlos II. en Madrid á 10 de Julio de 1697.

Expresion en todos los acuerdos capitulares del nombre del que los presida, y de los Regidores y Oficiales concurrentes.

Mandamos que en adelante en todos los Ayuntamientos y acuerdos capitulares que se hicieren en los pueblos, así ordinarios como extraordinarios, se ponga y exprese precisamente el nombre del Corregidor ó Teniente que los presidiere, y el de los Regidores y demas Oficiales que concurrieren en cada uno de ellos, no omitiendo ninguno sin embargo de que en un dia se hagan repetidos acuerdos. Y para que así se observe, se ponga copia á la letra de esta carta en los libros capitulares de cada pueblo.

LEY II. *consiguiente á las 12 y 13.*

D. Carlos IV. en Madrid por Real orden de 30 de Julio inserta en circular del Consejo de 27 de Septiembre de 1805.

Sobre el uso de la espada y baston por los Militares en los Ayuntamientos ú otros Cuerpos.

Para evitar las continuas dudas que se ofrecen acerca de la inteligencia que debe darse al Real decreto de 3 de Octu-

bre de 1796, Real cédula de 17 de Julio de 97, y orden de 24 de Febrero de 99 (*leyes 12. y 13.*) con respecto al uso de la espada y baston en los Oficiales que asistan á los Ayuntamientos ú otros Cuerpos, ya sean individuos de ellos, ó ya convidados á concurrir en algun acto público ó privado; me he servido declarar: Que todo Militar entre y asista con espada en todos los mencionados actos públicos ó privados, y con baston aquellos que puedan usarle por sus empleos.

LEY III.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. de 22 de Enero inserta en circulares del Consejo de 23 de Mayo, y 13 de Noviembre de 1806.

Uso de espada y baston por los Caballeros de las Ordenes en los Ayuntamientos y Cuerpos donde concurren.

He resuelto, que en atencion á las particulares y relevantes circunstancias que concurren en los sugetos que visten el hábito de las Ordenes Militares y el de la de Carlos III., se entienda concedida á los Caballeros de dichas Ordenes la misma gracia, y en los mismos términos que se concedió á los Militares por la Real orden de 30 de Julio del año anterior. (*ley precedente.*)

Y atendiendo á las distinguidas circunstancias de los sugetos que visten el

hábito del Orden de San Juan de Jeru- la expresada gracia á los Caballeros de
salen; he tenido á bien hacer extensiva dicha Orden.

TITULO IV.

De los privilegios y costumbres de los pueblos para la eleccion de oficios.

LEY I. *consiguiente á la 17.*

D. Carlos IV. por Real órden de 19 de Diciembre de 1804, inserta en circ. del Consejo de las Ordenes de Septiembre de 1805.

Conocimiento de elecciones de Oficiales de Justicia en pueblos de Encomiendas vacantes en el territorio de las Ordenes.

Enterado de la competencia suscitada entre el Consejo de las Ordenes y la Audiencia de Valencia, á cerca del conocimiento sobre las elecciones de Oficiales de Justicia en la actual vacante de la Encomienda de la Villa de Sagra, del Orden de Santiago en aquel Reyno, y por punto general en los demas pueblos y casos ocurrentes de esta especie, en que corresponde á los Comendadores la regalía del nombramiento á propuesta de los Capitulares; declaro que es pri-

vativo del Consejo de Ordenes el derecho de elegir Oficiales de Justicia á propuesta de los Capitulares en la Villa de Sagra, mientras dure la actual vacante de su Encomienda, y por punto general en los demas pueblos del territorio de dichas Ordenes, cuyas Encomiendas vacantes tengan anexa la regalía de la eleccion, y sus poseedores, quando los hay, el exercicio de ella: que el mismo Consejo debe exígir de los Ayuntamientos de los pueblos que verifiquen las propuestas con la oportunidad correspondiente, conforme á lo prevenido en la circular de 31 de Marzo de 1761: y que la Audiencia conozca privativamente de los recursos que se promuevan sobre nulidad y vicios de estas elecciones, tanto en Sagra, como en los demas pueblos de Encomiendas vacantes que correspondan á ella.

TITULO XI.

De los Corregidores, sus Tenientes y Alcaldes mayores.

LEY *siguiente á la 21.*

D. Fernando y D.^a Isabel en la instruc. de Corregidores de 1500. cap. 43. D. Felipe V. en la pragm. de 8 de Nov. de 1723. cap. 23.

Uso de vara alta de Justicia por los Corregidores y Justicias de los pueblos en funciones públicas, Ayuntamientos y diligencias judiciales.

Para evitar diferentes inconvenientes que se han reconocido y experimentado; mando que todos los Corregidores, Gobernadores y Justicias ordinarias de las ciudades, villas, y lugares de estos mis reynos y señoríos, sin distincion alguna, en las funciones públicas, entradas en los Ayuntamientos, y diligencias

de administracion de Justicia, lleven vara alta de ella, sin que puedan entrar en otra forma; y los de letras la lleven y traigan siempre, y en todas ocasiones indispensablemente, (auto 4. cap. 23. tit. 12. lib. 7. Rec.)

Otrosí no consientan traer vara á otra ninguna persona, salvo ellos y sus oficiales, y á los Alcaldes de la Hermandad, y á los Alguaciles de la Inquisicion, y á los Alcaldes y Alguaciles de la nuestra Corte dentro de las cinco leguas de la Corte, ó al que Nos diéremos especialmente poder para la traer por nuestra carta firmada de nuestros nombres, y sellada con nuestro sello. (ley 33. tit. 6. lib. 3. Rec.)

TITULO XVI.

*De los Propios y Arbitrios de los pueblos.*LEY I. *consiguiente á la 10.*

D. Fernando VI. en Aranjuez por dec. de 5 inserto en provision del Consejo de 19 de Junio de 1751.

Cuidado del Consejo en la buena administracion del caudal de Propios y Arbitrios; reservándose S. M. la concesion de estos y de rompimientos de tierras.

Uno de los principales gravámenes, que sufren los pueblos, consiste en los Arbitrios y sisas municipales de que usan con facultades Reales; creciéndose este daño, por no administrarse y convertirse su producto con la exáctitud necesaria en los fines para que se concedieron: y continuando mis constantes deseos de que mis amados vasallos sean aliviados en todo lo que se pueda, mando que el Consejo tome con la mas seguida aplicacion las providencias que conducen á que sean administrados sin fraude ni gastos superfluos los Arbitrios y Propios de los pueblos, de que conoce el Consejo, y destinado su producto á los fines de su concesion, sin el menor extravío, según las Reales resoluciones expedidas sobre

este asunto; absteniéndose en adelante de dar á pueblo alguno permisos ó facultades para el uso de semejantes Arbitrios, porque me reservo la accion de concederlas: y es mi voluntad que siempre que el Consejo considere algunos pueblos acreedores á concesiones de esta naturaleza, me represente los justos motivos, que para ello tuviere, precisamente por la via de Hacienda, y no otra, para que yo tome resolucion; como debe hacerlo tambien con los permisos de rompimientos de tierras, segun le está mandado: y encargo al Consejo cuide mucho de que se tomen anualmente las cuentas de los Propios y Arbitrios, y me dé noticia de lo que de ellas resultare por la misma via, conforme lo tengo resuelto; haciéndose cargo de que sin cuenta y razon no pueden establecerse las reglas que convienen á la buena administracion de efectos algunos, ni aplicarse el caudal que de los Propios y Arbitrios sobrare, despues de satisfechos los réditos de los censos ó cargas, á la redencion de los capitales, ó á otros destinos útiles al Público, según lo pida la situacion de los pueblos.

TITULO XX.

*De los Pósitos y sus Juntas municipales.*LEY I. *consiguiente á la 4.*

El Consejo por auto acordado y circular de 17. de Septiembre de 1805. aprobado por S. M.

Presentacion de cuentas y pago del contingente de dos maravedís en fanega de trigo y peso fuerte por todos los Pósitos hasta aquí relevados de una y otra formalidad.

Enterado el Consejo del ningun efecto que ha producido en beneficio de los Pó-

sitos la circular de primero de Julio de 1775, por la qual fueron relevados de la presentacion de cuentas y pago de contingente todos los que no excediesen de 200. fanegas, de que ha dimanado la omision de las Juntas en las cobranzas anuales, y la falta de economia en los gastos de administracion, en que suponen invertidas las creces ordinarias; y queriendo corregir tales abusos, y uniformar en todos las reglas y método establecido en la Real instruccion de 2 de Julio de 1792. (ley 4); ha

resuelto, que desde el presente año en adelante rindan cuenta, y paguen el contingente de dos maravedís por fanega de granos y peso fuerte de su respectivo fondo, todos los Pósitos que hasta aquí han estado exentos de una y otra formalidad, sea qual fuere su ingreso y estado; con derogacion formal de lo que sobre este punto previene la circular de 1 de Julio de 1775. y de qualesquiera otras providencias que hubiere en contrario; arreglándose las Juntas al formulario inserto en la citada Real instruccion del año de 1792, y justificando conforme á ella los gastos de legítimo abono, sin excederlos en manera alguna de lo que les es permitido, á no mediar orden de la Superioridad; cuidando los respectivos Subdelegados del cumplimiento de esta resolucion en todos los pueblos de su partido desde principio del año próximo, en que deben presentar las Juntas las cuentas pertenecientes á el corriente dentro del término señalado por las circulares de 27 de Enero (*nota 21. de este título*) y 23 de Diciembre de 1803; de cuyo contexto y puntual observancia enterarán desde luego dichos Subdelegados á las Justicias de los Pósitos comprendidos en esta providencia. (1)

LEY II. *consiguiente á la 4.^a*

D. Carlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. del Consejo de 11 de Octubre de 1805. y cédula de 15 de Enero de 1806.

Administracion y gobierno de los Pósitos Pios; y dacion de sus cuentas anuales á la Contaduría general de Pósitos.

Conformandome con el dictamen de mi Consejo, he venido en resolver, que en lo sucesivo, ademas de la intervencion que corresponda en la administracion de los Pósitos Pios á los Curas párrocos y demas llamados en sus respectivas fundaciones, la tenga igualmente con

(1) En circular del Consejo de 20. de Diciembre de 1805. dirigida por la Contaduría general de Pósitos, con motivo de no haber tenido su entero cumplimiento lo dispuesto por las circulares de 27 de Enero y 23 de Diciembre de 1803. respectivas á la formacion y remesa de las cuentas anuales, en observancia de lo prevenido sobre este punto por la Real Instruccion, se mandó recordar á las Intervenciones y Subdelegados de Pósitos la mas puntual execucion de dichas circulares; previniendoles que con arreglo á ellas se presenten las cuentas en la Subdelegacion en todo el mes de Enero, y los Subdelegados las remi-

voz y voto en la Junta el Procurador Síndico, y en defecto de este el Personero que fuese de cada pueblo; el qual, así como se verifica en las de los demas Pósitos generales, sea un Fiscal de las operaciones de aquellos, cuidando de la observancia de las mismas fundaciones, que son las leyes fundamentales que deben regir para su gobierno: que siempre que se hayan de promover diligencias judiciales sobre reintegros y otros puntos, se haya de acudir á los Jueces Reales competentes: que á principio de cada año se remitan á la Contaduría general de Pósitos del Reyno las cuentas originales de todos estos Pósitos, conocidos con los nombres de arcas, montes de piedad, alhóndigas, alholi, cambra, de señorío particular, y con qualquiera otra denominacion establecidos en mis dominios, como se practica con los demas del Reyno; á fin de que examinadas en ella, se tome razon de los fondos de que se componen, y se vea si se cumplen ó no las obligaciones que impone el fundador; cuidando de que los repartimientos y panadeos, donde los hubiere, como tambien los reintegros se hagan á los tiempos y con las formalidades que se prescriben en las respectivas fundaciones, y de comunicar con la brevedad posible los finiquitos ó certificaciones de reparos en las que lo exijan: que se dirijan asimismo á la propia Contaduria con las primeras cuentas los correspondientes testimonios de las fundaciones, para que se archiven, y siempre consten en ella; pasándosela tambien el importe del contingente de dos maravedís en fanega y peso fuerte de todo el fondo de cada Pósito, para atender á los gastos de correo y oficina, que se han de aumentar considerablemente con estas disposiciones: que el Contador general cuide de que el despacho de estos asuntos se lleve con total separacion de los demas negocios y cuentas de la Contaduria, des-

tan en Febrero á la Contaduría, para que examinadas dentro del año, puedan expedirse con oportunidad las certificaciones de reparos, y proceder á la reposicion de los alcances y demas responsabilidades; y que cumplido el mes de Febrero, sin haberse presentado todas las cuentas, remitan los Subdelegados las que hubiere en su poder, con nota puntual de las que faltan, para tomar las providencias correspondientes contra las Juntas, sin perjuicio de llevar á efecto los Subdelegados de su propia autoridad la exacción de las multas prevenidas en dichas circulares.

tinando á este fin los oficiales y dependientes que estime á propósito; y proponga para su mas pronto y buen despacho lo demas que contemple necesario. (1)

LEY III.

D. Carlos IV: por resol. á cons. del Consejo de 30 de Junio, y circ. de 16 de Sept. de 1806.

A los Pósitos no se exijan los 16 maravedís en fanega de granos que previene la instrucción de Rentas de 1785.

Á consulta del mi Consejo de 30 de

(1) En circular del Consejo de 27 de Marzo de 1806, para simplificar en lo posible la operacion prevenida en esta Real cédula, y que se execute con el mayor orden y economia se acordó.

1.^o Que las Juntas ó Patronos remitan directamente, en todo el mes de Enero de cada año á las Subdelegaciones de sus respectivos partidos las cuentas, testimonios y contingente de que trata la citada Real cédula; y las Subdelegaciones las dirijan en los tiempos prevenidos á la Contaduría general, cuidando de ejecutarlo con total separacion de las de los Pósitos Reales, para evitar la confusion.

2.^o Que en la formacion de cuentas de los enunciados Pósitos Pios y de dominio particular se observe la claridad, buen orden y método que hayan prescrito sus fundadores; acompañando á ellas todos los recados de justificacion, que acrediten el verdadero giro que han tenido sus fondos, y estado en que se hallen al tiempo de la formacion de dichas cuentas; y que se comuniquen antes de su remision al Procurador Sindico ó Personero del Comun, para que examinandolas con el esmero y diligencia que exige la causa pública, proponga los reparos que hallare, ó ponga su visto bueno, si las conceptuase arregladas y bastantemente justificadas.

3.^o Que los Prelados eclesiásticos y Patronos de todas estas fundaciones dispongan, que á la mayor brevedad se pase á las respectivas Subdelegaciones una relacion exacta de los Pósitos de esta clase que haya en su diócesi.

4.^o Que las cuentas correspondientes al último año, juntamente con los testimonios de las fundaciones y contingente respectivo al total de sus fondos, se dirijan á la Contaduría general por mano de las Subdelegaciones en todo el próximo mes de Junio; reservandose en sus archivos testimonio literal para su régimen en lo sucesivo, y resultas que pueda haber por efecto de la liquidacion que de ellas se practique; y tambien para hacer la cobranza de los descubiertos en los tiempos oportunos.

5.^o Que en los meses de Octubre de cada un año hayan de remitirse igualmente á dichas Subdelegaciones por las Juntas de los Pósitos Pios y de señorío particular, los testimonios de reintegro de sus fondos, tanto en granos como en dinero, cuidando aquellas de dirigirlos en el mismo mes á la Contaduría, con la separacion que queda prevenida.

6.^o Que pueda incluirse el importe del contingente de los indicados Pósitos Pios, y de particula-

Junio próximo me he servido mandar, que se observe por punto general lo dispuesto en las Reales órdenes de 10 de Octubre de 1787 y 2 de Enero de 1788, por las quales se relevó á los Pósitos del pago de los 16 maravedís en fanega de granos que cita la instrucción de Rentas de 21 de Septiembre de 1785, sin embargo de lo que sobre este punto se previno en la Real orden de 16 de Febrero de 1797.

res con los de los Reales; si conviniera para facilitar y economizar su remision; pero formándose listas ó relaciones separadas de los respectivos importes.

7.^o Que en los pueblos donde haya establecimientos de ambas clases, se pongan de acuerdo las Juntas de uno y otro, para dirigir las cuentas á la Subdelegacion por medio de un solo conductor, abonando á este su trabajo por iguales partes de los fondos de cada uno, y procurando tenerlas corrientes al tiempo prevenido, para que no padezcan retraso.

8.^o Que quando las citadas Subdelegaciones tengan que despachar órdenes generales, se pague á los verdaderos aquella cantidad que esté mandado, á prorrata entre los Pósitos Reales, Pios, y de dominio particular, que comprenda cada vereda, siendo para efecto de los mismos.

9.^o Que en los repartimientos de granos y dinero, en donde tambien haya de una y otra clase de Pósitos, guarden sus Juntas la mejor armonia en la distribucion; de manera que reunidas para semejantes actos, y teniendo á la vista los estados de fondos de aquellos, procedan conformes á la data, en términos que todo el comun de labradores y peguajeros disfruten recíprocamente del beneficio de ambos.

10.^o Que la inversion de caudales de los expresados Pósitos pios y de señorío particular sea en todo conforme á lo dispuesto por las mismas fundaciones; pues de lo contrario serán castigados sus administradores con la pena correspondiente á las circunstancias del delito.

11.^o Que las Juntas cuiden de que los reintegros se hagan tan pronto como sean cumplidas las obligaciones que contragesen los deudores, á no ser que obtengan espera del Consejo; sin permitir que por ninguna otra deuda se les embarguen ni enagenen los bienes que esten afectos á los Pósitos, á no proceder de descubiertos con la Real Hacienda.

12.^o Y últimamente que en todas aquellas Provincias ó Partidos en que no hay establecidos Pósitos Reales, y si Pios y de dominio particular, se entiendan las Juntas ó Patronos en todo lo concerniente á estos puntos, y demas prevenido por la citada Real céd. de 15 de Enero, con los Gobernadores, Corregidores ó Alcaldes mayores de sus respectivos partidos; procurando estos estar á la mira para su mas puntual observancia, como una de las obligaciones en que están constituidos por las leyes, autos acordados y sus propios títulos.

TITULO XXIV.

*De los montes y plantíos, su conservacion y aumento.*LEY I. *consiguiente á la 28.*

D. Carlos IV. por resolucion á consulta del Consejo de Guerra de 6 de Agosto comunicada en circular de Octubre de 1805.

Cumplimiento de la ordenanza de montes de 1748. y su adicional de 1751.

Mando, que la Real cédula de 20 de Febrero y Real orden de 2 de Mayo del presente año (*notas 51 y 52*) se lleven á efecto riguroso; y que á su consecuencia queden las cosas en el ser y estado que tenían ántes del Real decreto de 1 de Mayo de 1802 (*ley 28.*), y en el que deben tener en cumplimiento de la ordenanza

(1) Por declaracion del Consejo comunicada en circular de 30 de Septiembre de 806 se previno, que en conformidad de lo dispuesto por los capitulos 1. y 2. de la Real ordenanza de montes de 12 de Diciembre de 1748 (*ley 22. de este tit.*) los Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno, así Realengos como del territorio de Ordenes, creados y que se crearen despues de la publicación de ella, deben tenerse por Subdelegados natos de

general de montes del año de 1748 (*ley 21.*) su adicional de 1751 (*ley 23.*) y Real orden de 31 de Diciembre de 1800 (*ley 27.*); y que consiguiente á ellas cesen todos los Subdelegados creados en virtud de dicho Real decreto de 10 de Mayo de 1802, en todo lo económico, gubernativo y contencioso relativo á montes, sin introducirse en cosa alguna de las que anteriormente á él estaban encargadas á las Justicias; quedando estas sujetas en este ramo á la jurisdiccion de Marina que ejercen los Capitanes generales de los Departamentos, y Comandantes militares de las respectivas Provincias (1).

los montes y plantíos de su distrito, jurisdicción y partido, con subordinacion únicamente al Consejo, y á los Ministros Jueces conservadores generales en sus respectivos Departamentos, llevando con ellos la correspondencia necesaria, y obrando en todo conforme á lo dispuesto en la misma ordenanza, y posteriores Reales órdenes.

TITULO XXV.

*De las dehesas y pastos.*LEY I. *consiguiente á la 14.*

D. Felipe V. en San Ildefonso por decreto de Octubre de 1739.

Privilegio de posesion de los ganaderos de la Mesta en las dehesas de las Ordenes Militares, como en todas las demas.

He resuelto, que los ganaderos, que son hermanos del Concejo de la Mesta, han de gozar del privilegio de posesion en todas las dehesas de las Ordenes, como lo tienen en las que son propias de Prelados, Comunidades eclesiásticas y particulares seculares, sin embargo de las órdenes expedidas para que no estuviesen sujetas al referido privilegio de posesion:

con la prevencion de que si en las dehesas de Prelados, Comunidades, y seculares, que su pasto es para ganado baco y llaman novillejos, y en otras que los frutos de que se componen de bellotas y otras especies son de mayor entidad que el de la yerba, no tienen los ganaderos posesion, no la tengan tampoco en las de las Ordenes que fuesen de estas calidades. Que con los ganaderos que llaman estantes, que no salen sus ganados de sus suelos y jurisdicciones á herbajar de invernadero y agostadero, que tubieren arrendadas dehesas de las Ordenes de Santiago y Calatrava, se entienda con ellos, para conservarles sus pastos de ellas, mi Real orden de 15 de Marzo de 1734 expedida á favor de los vecinos

de las 19. villas del Partido de la Serena, por lo tocante á la dehesa de este nombre, que es de la Orden de Alcántara. Que la Sala de Mil y quinientas del Consejo ha de tener el conocimiento y jurisdicción sobre el punto de posesion de todas las dehesas del Reyno, (en que se comprenden las de las Ordenes) tasa, y

incidentes de ella: y que el Consejo de Hacienda unicamente ha de conocer de todo lo que es administracion, recaudacion, cobranza, y hacimiento de arrendamientos de las dehesas de los Maestrazgos de las Ordenes y de todo lo anexo y concerniente.

TITULO XXVI.

De la vecindad, sus derechos y aprovechamientos.

LEY I. *consiguiente á la 8.*

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real decreto de 25 de Agosto inserto en céd. del Consejo de 7 de Noviembre de 1805.

Todos los vasallos ausentes de estos reynos sin destino ni comision pública se restituyan á los pueblos de sus domicilios.

Deseando evitar los graves perjuicios que se causan al Estado por la voluntaria expatriacion de muchos individuos, que ademas de consumir en los paises extrangeros todas ó la mayor parte de sus rentas, sueldos ó pensiones que gozan, dexan de concurrir con los demas fieles vasallos mios á sostener las cargas de la Corona, y á fomentar el bien público con sus facultades, talentos é industria; he venido en resolver, que todos mis amados vasallos que actualmente se hallan fuera de mis dominios, sin destino ó comision pública que yo les hubiese confiado, se restituyan á ellos y á sus respectivos domicilios en el preciso término de quatro meses, hallándose en Francia, Italia, ó Portugal, y dentro de seis meses si se hallasen en los demas paises; en la inteligencia que si no lo verificasen, declaro desde ahora por vacantes todas las pensiones ó sueldos que obtienen, como tambien las Encomiendas que gocen en las quatro Ordenes Militares, ó en la de San Juan, y qualquiera otra asignacion que disfruten por qualquiera ramo del Estado, con inclusion de toda renta ó pension eclesiástica: y es mi voluntad que los demas individuos propietarios, que se mantienen solo de sus rentas y se hallan igualmente comprendidos en este mi Real decreto, pierdan la mitad de sus rentas anua-

les, si no verificasen el regreso á sus domicilios respectivos en el término arriba expresado.

LEY II. *consiguiente á las 10 y 11.*

D. Carlos IV. por res. á cons. de 21 de Enero y circ. del Cons. de 6 de Junio de 1806.

Los Militares ocupados en la defensa de la Patria gocen los derechos de vecindad en los pueblos donde la tengan.

En órden circular de 28 de Julio de 1801. (*ley 11. de este tit.*) se declaró la de 5 de Noviembre de 1798. (*ley 10*), por la que se fixa la residencia que deben hacer en los pueblos los que en ellos gocen aprovechamiento de pastos, y demas derechos de vecindad, mandando que los Oficiales desde Brigadier inclusive arriba, para disfrutar dichos derechos conforme á las condiciones de millones, deben ser destinados á los exércitos de las provincias de sus domicilios, para que no se separen de ellos, á ménos que por motivos particulares del Real servicio se destinen á otras; pero que los demas Oficiales, siendo agregados, como que continúan el servicio en las respectivas plazas, deben estar exentos de la residencia como los inválidos, mas de ningun modo los dispersos. Ahora con motivo de cierto recurso particular, conformándome con el parecer de mi Consejo en consulta de 21 de Enero ultimo, he resuelto que los Militares que se ocupan en la defensa de la Corona y de la Patria deben gozar todos los aprovechamientos, honras y preeminencias vecinales que les dispensan las leyes, teniendolos presentes en sus repartimientos y sorteos; con tal de que solo elijan una vecindad, en la que man-

H

tengan casa abierta con labor y ganados propios, administrandolo de su cargo y cuenta, y no por arrendamiento ó qualquiera otra manera.

TITULO XXXI.

De la extincion de animales nocivos.

LEY I. consiguiente á la 2.

D. Carlos IV. por resol á consulta del Consejo de 21 de Junio comunicada en circular de 23 de Septiembre de 1805.

Declaracion del premio asignado á los lobeznos cogidos en camada.

Por Reales cédulas de 27 de Enero de 1788, y 3 de Febrero de 1795 se prescribieron las reglas oportunas para el exterminio de lobos, zorros y otros animales dañinos::: Con motivo ahora de varios reparos puestos al abono de las partidas dadas por algunas Justicias, que pagaron quatro ducados por cada uno de los lo-

beznos cogidos en camada sin la madre, se ha representado al Consejo la duda sobre quando ha de considerarse por camada, para el pago de los ocho ducados que se aumentan en la Real cédula de 3 de Febrero de 1795. (*ley 2. de este título*), á la loba cogida con ella, y quando por lobeznos por el de quatro ducados de cada uno; y á fin de evitar los perjuicios y exacciones que la malicia y sordido interes ha querido irrogar á los caudales de Propios; me he servido declarar, que el precio asignado á los lobeznos, ademas del concedido á la camada, únicamente sea quando se les coja separados de la crianza de la madre, y no formen camada con ella, sin que se extienda á otro caso.

TITULO XXXV.

De los caminos y puentes.

LEY I. consiguiente á la 8.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 27 de Mayo de 1805. comunicada á los Directores generales de correos y caminos.

Conocimiento de la Direccion de caminos en el arbolado puesto para adorno y comodidad de ellos, y de las puentes y entradas de los pueblos, sin intervencion de la Marina.

Los Directores generales de correos me han expuesto, que la jurisdiccion de caminos, entendida hasta ahora con propiedad en las carreteras generales, se ha re-

gulado á treinta varas colaterales de los caminos, para proporcionar por este medio la seguridad y recreo de los caminantes, quitando los embarazos que podrian inutilizarle. En tal concepto, y con el fin de cortar contestaciones entre los empleados de caminos y de la Real armada, proponen se fixe en la Direccion de caminos el conocimiento de lo relativo al arbolado que á expensas de la misma Direccion y de los pueblos se hubiese plantado y plantare en lo sucesivo para adorno y comodidad de los caminos, puentes y entradas de los pueblos sin intervencion de la Marina: y enterado de esta propuesta, me he servido conformarme con ella.

TITULO XXXVI.

*De las ventas, posadas y mesones.*LEY I. *consiguiente á la 2. y 3.*

D. Carlos IV. en Madrid por Real orden de 8 inserta en circular de 13 de Julio de 1805.

Observancia de exención de alcabalas concedida á las posadas; y su encabezamiento, por lo perteneciente á cientos y millones.

He resuelto, que se observe la exención de alcabalas concedida por los Señores Reyes Católicos á las posadas del Reyno que se hallen en despoblado (*leyes 2. y 3.*): que por lo perteneciente á cientos y millones se encabezen ó ajusten los posaderos con las Justicias de los respectivos pueblos en una moderada cantidad, de suerte que resulte beneficio á los vecinos en los encabezamientos constituidos en utilidad pública: que así los pueblos como los posaderos deberán reclamar qualquiera perjuicio que se les irroque ante el res-

pectivo Subdelegado; quien los oirá, sin causar costas ni dilaciones, remitiendo el expediente instructivo que se hubiere formado á la Superintendencia general de la Real Hacienda, para que de acuerdo con el Ministesio de Estado, se decida la disputa, bien recaiga sobre el agravio del encabezamiento, ó sobre si la posada debe gozar de la referida exención y beneficio. Ultimamente, que en este medio y regla no deben comprehenderse las posadas inmediatas á Madrid, á excepcion de las que se hallen con las licencias correspondientes, á las cuales se permitirá la venta de las especies de consumo, y necesarias al pasagero, sin embargo de la Real orden de 3 de Marzo próximo anterior, ajustandose ántes dichas pasadas con la Villa de Madrid por el ramo de Sisas, y con los Diputados de los cinco Gremios mayores por los demas derechos Reales.

LIBRO OCTAVO

DE LAS CIENCIAS, ARTES, Y OFICIOS.

TITULO PRIMERO

*De las escuelas y maestros de Primeras letras y de educacion de niñas.*LEY I. *consiguiente á la 10.*

D. Carlos IV. por Real orden de 3 de Abril inserta en circ. del Consejo de 4 de Julio de 806.

Establecimiento de Juntas en las capitales del Reyno para el exámen de maestros de Primeras letras, y su arreglo.

He resuelto, que en todas las capi-

tales del Reyno se formen Juntas compuestas de los Gobernadores ó Corregidores respectivos, como Presidentes; de dos ó tres maestros de Primeras letras de los mas recomendables por su instruccion y buenas circunstancias; y de un Secretario que podrá serlo el Escribano de Ayuntamiento que nombre el Presidente.

Será del cargo de estas Juntas el

H 2

exáminar á los que en sus respectivos distritos quieran habilitarse para enseñar las Primeras letras en todos los ramos que comprehende la 1.^a enseñanza; á saber, en Doctrina cristiana, en Aritmética, en Gramática, y Ortografía castellana, en el Arte de leer, en el de escribir, y en el de comunicar á los niños todos estos conocimientos por el orden y método mas breve y provechoso; exigiendo ademas de los exáminandos las informaciones y documentos que previene la Real provision de 11 de Julio de 1771 (*ley 2. de este tit.*); y los que en lo sucesivo no fueren exáminados en esta forma, y aprobados por sus Juntas respectivas, no podrán ser maestros, ni obtener del Consejo el título de tales.

Para ocurrir á los gastos que necesariamente han de ocasionar estas Juntas, de cada examinando que aprueben exigirán una contribucion moderada, la suficiente para el intento; debiendo cuidar cada Junta de la buena distribucion de estos ingresos con la aprobacion precisa de sus Presidentes.

El fixar la quíota de estas contribuciones, así como el establecer y arreglar todas las Juntas (á excepcion de la de Madrid,) correrá al cuidado del Consejo Real, baxo cuya dependencia y proteccion inmediata estarán las referidas Juntas provinciales, aunque siempre con arreglo á la Real órden de 11 de Febrero de 1804 (*l. 7 de este tit.*), la qual debe quedar en toda su fuerza y vigor en quanto no sea contrario á lo prevenido en la presente.

En quanto á la Junta de exámenes de Madrid he resuelto, que en lo sucesivo conste de un Presidente que lo será el Corregidor que es ó fuere; de un Vice-Presidente que lo será el Visitador general de Escuelas que es ó fuere; de un Secretario con voto; de un Religioso de las Escuelas Pías á nombramiento de sus

Prelados ; relevando á los dos individuos del Colegio que hasta ahora han sido vocales de ella , para que puedan mas libremente dedicarse al cuidado de sus respectivas escuelas, y á los ejercicios utiles del Colegio Académico , sin que la asistencia á la Junta los distraiga del cumplimiento de unas obligaciones tan perentorias.

Los vocales nombrados celebrarán sus Juntas en una Sala de las Casas Consistoriales de esta Villa, una vez lo menos cada semana, en un dia fixo que señalará la misma Junta, y á la hora precisa que establezca, sin que dexe de hacerlo aunque falte el Presidente ó qualquier otro individuo; pues á la hora establecida empezarán la sesion los que se hallaren presentes presididos por el Vice-Presidente, ó por el vocal mas antiguo en su ausencia; y será de 200. reales la contribucion que exija esta Junta de los exâminandos que apruebe.

Resultando las mas perniciosas consecuencias de que entiendan en el gobierno de un mismo ramo muchas manos diferentes; es mi voluntad, que ni la Junta general de Caridad, ni su Zelador general, ni ninguno de sus individuos, ni otro Cuerpo qualquiera que sea, baxo ningun título, pretexto ni motivo se entrometa directa ni indirectamente en punto ninguno que tenga concernencia con las escuelas de Primeras letras, con sus maestros, ni con los asuntos que son de la particular incumbencia de la Junta de exámenes de Madrid, que debe conocer exclusivamente en ellos.

Y lo mismo respectivamente deberá entenderse de las Juntas Provinciales, las quales no tendrán mas dependencia que la del Consejo; quedando por consiguiente derogadas quantas órdenes, privilegios ó gracias se hayan expedido en la materia á favor de otros Cuerpos, ó particulares.///

11) De resultas de esta circular se hicieron al Consejo varias representaciones proponiendo las dificultades ocurridas en su execucion, y en el establecimiento de dichas juntas en algunas cabeceras de Partido p.^a falta de maestros q.^e exercian las funciones de examinadores, y la asignacion de quota con q.^e ha de contribuir cada exa-
mando, y su distribucion, y en su villa declaro el Consejo q.^e las juntas se formen en cada capital de reyno o provincia, y compongan unicamente del Gobernador o corregidor q.^e la ha de presen-
tar los dos maestros de 1.^a letria, y de un 3.^o, q.^e lo podra ser el c.^o de ayuntamiento, que en dhas. ju-
tas han de ser examinados los q.^e aspiran al magisterio de 1.^a letria, precediendo la presen-
tacion de todos los documentos q.^e previene la referida circular; y aprobados con su certi-
ficacion, y exhibicion de las muestras de letra, y cuentas presentadas ala junta, re-
bricado, y firmado todo p.^a el Jefe deberan los interesados acudir al Consejo a
obtener el titulo competente, in caia circunstancia no podran exceder al magisterio
que se de luego cesaren las juntas formadas en los pueblos q.^e no sean capitales de
provincia o reyno. Que todos los examinandos contribuiran, sin distincion alguna de pueblos, a
la cantidad de 100 d. de los quales se asignan 20 a cada examinador 30 al secretario p.^a
todos sus dias de juntas, escrito, certificacion, y demas, 10 al portero, y los 20 restantes
p.^a el fondo q.^e ha de formar se conque ocurriran a gastos generales y extraordinarios
asignacion a los presidentes aquienos servira de merced el c.^o en su desamp.
comunicacion en circular de 6 de octubre de 1807.

TITULO IV.

De los Estudios de las Universidades ; y su reforma.

LEY I. *consiguiente á la 6.*

D. Carlos IV. por resol. á cons. de 20 de Noviembre y circular del Consejo de 22 de Diciembre de 1806.

El grado de Bachiller en Artes supla el curso de Filosofía Moral, que se requiere para entrar en el estudio de la Jurisprudencia.

De resultas de varios recursos hechos por algunos cursantes de Jurisprudencia de la Universidad de Alcalá, que

siendo Bachilleres en Filosofía se veian precisados por el estatuto á estudiar ademas la Filosofía Moral, antes de entrar en la carrera de las Leyes :::: he tenido á bien mandar por punto general, que el grado de Bachiller en Artes supla el curso de Filosofía Moral, que ahora se requiere por separado para entrar en el estudio de la Jurisprudencia ; sin perjuicio de que los que no acreditasen haber recibido el grado, hayan de presentar certificacion del año de Filosofía Moral, con separacion de todo otro estudio como hasta el presente.

TITULO VII.

De las matriculas, y cursos ó años escolares en las Universidades.

LEY I. *consiguiente á la 6.*

D. Carlos IV. por Real orden de 28 de Noviembre, y circular de 10 de Diciembre de 1803.

Habilitacion de los estudios que hicieron los Regulares en sus Religiones, para recibir los grados de Licenciado y Doctor en Teología

En el plan de Estudios que se dió á la Universidad de Salamanca en 3 de Agosto de 1771, se impuso á los Regulares la obligacion de asistir á las cátedras como los seculares, para recibir los grados de Licenciado y Doctor en Teología. Esta providencia, que entónces se creyó útil, ha demostrado la experiencia que perjudica á la disciplina regular, y que obliga á las Religiones, ó á no gra-

duar, ó á destinar á muchos sin el debido conocimiento á la carrera de Maestros públicos, y á sufrir otros gravisimos perjuicios, que me han expuesto varios Prelados y Maestros de la Universidad de Salamanca: y estando muy satisfecho de la pureza de doctrina de las Religiones de mis dominios, he tenido á bien conceder á todos los Regulares, que al modo que sucede con los mas de los Seminarios conciliares, se les pasen los estudios que hicieron en sus Religiones para presentarse á exámen y recibir los grados de Licenciado y Doctor en Teología, con tal que no sean de ménos años que los prevenidos en los planes de Estudios, y y de que tengan por sus Religiones el título y nombramiento de Maestros (1).

(1) En circular del Consejo de 21 de Diciembre de 806., en conformidad de lo resuelto por S. M. en esta Real orden de 28 de Noviembre de 803, se declaró que todos los Regulares, que se hubiesen gra-

duado de Bachilleres en Filosofía, puedan ser admitidos á las oposiciones de las cátedras vacantes en las Universidades del Reyno.

TITULO XI.

*De los Médicos, Cirujanos y Barberos.*LEY I. *consiguiente á la 8.*

D. Fernando VI. en Buen-Retiro por Real orden de 7 de Diciembre de 761.

Observancia de la ley prohibitiva de ejercer el arte de sangradores los que no esten examinados por el Proto-barberato, ni tengan título para ello.

Enterado de los graves inconvenientes y perniciosas consecuencias que resultan á la salud pública de el abuso con que, en contravencion á lo prevenido por la ley 8. de este título, se permite y tolera, y aun se protege por las Justicias del Reyno, que en los pueblos practiquen el arte de sangradores, y las demas cosas anexas á él, muchos sugetos que no están

examinados por el Tribunal del Proto-Barberato, ni tienen título para ello, y especialmente aquellos que se hallan con tiendas abiertas solo para afeitar de nabaja ó tixera; no habiendo bastado á remediar estos excesos las repetidas Reales órdenes y provisiones del Consejo expedidas á este fin, ni las continuadas providencias del Protobarberato: mando, que por el Consejo se den las mas estrechas órdenes á todas las Justicias del Reyno, advirtiendole de lo referido, y que con el mas vigilante cuidado celen en sus respectivos pueblos se observe la expresada ley; pues de continuar como hasta aqui el referido abuso, tomaré la mas severa providencia con las mismas Justicias que le permitan, tolen ó protejan.

TITULO XII.

*De la Cirugía; su estudio y exercicio.*LEY I. *consiguiente á la 5.*

D. Carlos IV. por Real orden de 12 de Noviembre y circ. del Consejo de 10 de Dic. de 803.

Ningun Cirujano pueda revalidarse de Médico, sin haber estudiado esta Facultad en las Universidades.

He resuelto, que ninguno, sea ó no colegial de San Carlos, Cádiz, Barcelona ú otros Colegios de Cirugía, pueda revalidarse de Médico, á no ser que estudie en las Universidades esta Facultad; con la asistencia de Clínica que está mandado; así como ningun Médico podrá ser Cirujano, sino estudiase en dichos Colegios los años prevenidos en sus estatutos; con cuyo medio no se verificará el abandono de la Cirugía, y sí el que haya los profesores de ella que tanto se necesitan.

LEY II. *consiguiente á la 6.*

D. Carlos IV. por Real orden de 19 de Mayo inserta en circ. del Consejo de 6 de Junio de 1806.

Los Cirujanos aprobados por los Reales Colegios puedan establecerse en qualquiera pueblo.

Siendo conveniente á la mejor union de los profesores de Cirugía el que haya entre ellos absoluta libertad para fixar su residencia; y á fin de evitar discordias y disensiones sobre este punto, conformándose con lo que me propuso la Junta gubernativa de Cirugía en 8 de este mes, he resuelto, que todos los Cirujanos que fueren ó hayan sido aprobados en los Reales Colegios de Cirugía, puedan establecerse indistintamente en qualquiera pueblo del Reyno.

TITULO XIII.

De los Boticarios, visitas de boticas, y Junta superior gubernativa de Farmacia.

LEY I.

D. Carlos IV. por Real orden inserta en circular del Consejo de 5 de Marzo de 1805.

Los estudiantes matriculados en los Colegios de Farmacia no gocen la exención que les estaba concedida de quintas y levass.

Sin embargo de que por Real orden de 27 de Noviembre del año próximo, inserta en circular de 20 de Diciembre siguiente (*nota 5. tit. 6. lib. 6.*), tuve á bien

conceder á los estudiantes de Farmacia que se matricularen en los Colegios que han de establecerse para la enseñanza de esta Facultad, la exención de quintas y levass concedida á los estudiantes de las Universidades mayores graduados de Bachilleres en Artes; limitándose en la ordenanza de 27 de Octubre de 1800 para el reemplazo del ejército dicha exención á los Bachilleres en Facultad mayor, y no gozándola con arreglo á ella los Bachilleres en Artes; he resuelto que no tenga efecto la referida concesion.

TITULO XXIV.

De las Fábricas del Reyno.

LEY I.

D. Carlos IV. por Real orden de 13 de Abril, y circ. del Consejo de 23 de Mayo de 1806.

Reglas que han de observarse por particulares en la fábrica y venta de betunes.

En vista de lo representado por el Comandante general del Departamento de Cádiz, sobre que con motivo de la Real orden circulada por el Consejo en 21 de Agosto de 805, que manda se dé por de comiso en los reynos de Granada, Jaén, Sevilla, Córdoba y Murcia todo el betun que no lleve guia del Ministro de las fábricas de Castril, ó del de Segura de la Sierra, se pudren sin utilidad los troncos de pino de las inmediaciones de Sevilla, porque las personas que se emplearian en la fabricacion de aquella materia, se retraen de hacerlo, por los perjuicios que se les sigue de ir á buscar la guia para su conduccion á distancias tan largas; he tenido á bien mandar, para que se remuevan todos los obstáculos contra esta clase de industria, que se den las ex-

presadas guias en cada provincia por sus respectivos Contadores, ó por los destinados en las fábricas de betunes, autorizadas por los respectivos Comandantes Militares de Marina de las mismas provincias, ó por los Gefes facultativos de las citadas fábricas ó comisiones; y se observen ademas las reglas siguientes de elaboracion y venta.

1. Que los hornos se construyan en baldíos que no sean montes, aunque estén inmediatos á ellos.

2. Que solo se valgan de las raices y troncos que no pasen de media vara.

3. Que nada paguen á los dueños de las tierras, pues les hacen el beneficio de desembarazarselas de raices.

4. Que en el aprovechamiento de ellas, y de los troncos para el manifestado destino de betunes sean preferidos los dueños de las tierras, siempre que quieran valerse de esta antelacion; pero que pierdan este derecho, si demoraren su uso pasado un mes de la solicitud del particular extraño.

5. Que para estas solicitudes ocurran á los Gefes de Marina del partido, ó en

su defecto á las Justicias de los pueblos del término, por quienes no se les podrá negar.

6 Que á ninguna contribucion Real estén sujetos por razon de fábrica.

7 Que por el tiempo de diez años sean libres de todos derechos Reales en la introduccion de alquitran y brea de sus fábricas en los puertos del Reyno.

8 Solo tendrán los fabricantes la libertad de vender á estos, quando se verifique que están competentemente proveidos los arsenales; y como que la noticia de esto ó de lo contrario la deberán tener los Gefes facultativos de Marina, en los territorios en que hubiere fábrica de betunes, serán los mismos los que con este conocimiento den ó nieguen las licencias para la extraccion.

9 Quando en el modo explicado conste no hay falta de betunes en los arsenales, podrán los fabricantes llevarlos á vender á particulares á los parages que mas les convenga; con tal de que sea dentro del Reyno, en utilidad de los vasallos del Rey, que deben ser preferidos á los extranjeros; pues solo podria permitirse la extraccion á ellos, quando el fomento de las fábricas de betunes llegase á término de que la extraccion se hiciese á dominios extraños, despues de proveido el Reyno de quantos necesitase; en cuyo caso, que se considera no inmediato, se establecerian nuevas competentes reglas.

10 Para asegurar que la extraccion de betunes se hace á parages permitidos,

deberán sus dueños obtener licencias de los Gefes de Marina de las respectivas provincias; y estos (despues de asegurados que se hallan provistos los arsenales) obligarán á los que las pidan á que afiancen en la forma acostumbrada en otros géneros la entrega de tornaguías dentro de un término proporcionado á la distancia del parage que les indiquen.

Estas reglas no deben guardarlas los fabricantes por variacion de las anteriormente publicadas, y sí únicamente como explicacion suya, para evitar el abuso que algunos han pretendido hacer de ellas.

LEY II.

D. Carlos IV. por resol. á cons. de la Junta general de Comercio de 18 de Septiembre y circular de Diciembre de 1806.

Libertad para fabricar aguardiente del orujo de la uva, con derogacion de las ordenanzas que lo prohiben.

He venido en conceder libertad absoluta en España para fabricar aguardiente de orujo ó casca de uva, con las precauciones que se observan con el que se hace por el método comun, para asegurar el pago de los derechos correspondientes á la Real Hacienda; derogando en virtud de esta facultad las ordenanzas de 2 de Diciembre de 1770, y 1.º de Septiembre de 1772, mandadas observar á los fabricantes de aguardiente de Cataluña, y qualesquiera otras que lo prohiban.

TITULO XXV.

De los privilegios y exenciones de los fabricantes.

LEY I. consiguiente á la 3.

D. Carlos III. en Aranjuez por resolucion de 31 de Mayo de 1779.

Libertad de derechos en la introduccion del lino y cáñamo extranjero por los puertos que se expresan, con destino á fábricas ó manufacturas de hilados y texidos.

Habiendo concedido por mi Real orden de 22 de Febrero de 1775 (*ley 5.*), libertad de todos los derechos de entrada

del lino y cáñamo de dominios extranjeros en rama, rastrillados y sin rastrillar, que se introdugere por los puertos de Galicia, Asturias y quatro villas, por las aduanas de Cantabria y de la frontera de tierra de Navarra y Francia; me he servido declarar, que debe gozar de la misma libertad de derechos el lino y cáñamo extranjero, que con destino á fábricas ó manufacturas de hilados y texidos se introduzcan por los puertos de los reynos de Andalucía, Murcia, Valencia, Mallor-

ca, Principado de Cataluña, y las islas de Canarias; quedando sujetos al pago de derechos el lino y cáñamo extranjero, que no llegue á manufacturarse en estos reynos, y sea para consumo de embarcaciones extranjeras y otros usos distintos que los de hilados, tejidos y otras labores; para que de este modo sean iguales los medios para el adelantamiento de las industrias en todas las provincias de estos reynos.

2 Para conceder en las aduanas la libertad de los derechos de entrada y salida al lino y cáñamo extranjero, serán documentos bastantes las certificaciones de las Sociedades de las provincias, de las Compañías de fábricas, y de los fabricantes particulares, en que conste la cantidad de lino y cáñamo extranjero para hilados, tejidos, ú otra qualquier clase de manufacturas, que introduzcan de su cuenta, ó compren en los puertos ó en los almacenes de las aduanas ántes del pago de derechos.

3 Los Administradores de las aduanas concederán la libertad de los derechos en la forma expresada, sin precisar á las Sociedades, Compañías y fabricantes particulares á la obligacion de hacer constar haberse manufacturado el lino y cáñamo extranjero, ni á otra formalidad alguna que pueda servir de obstáculo al fomento de la industria; pues cumplirán dichos Administradores con un prudente cuidado de estar á la mira de que no se destine á otros usos, y con dar cuenta á la Direccion de Rentas de los recelos que tengan, para que averiguado el abuso que se haga de estas gracias, se proporcione el remedio castigando á los delinquentes.

4 Los utensilios y máquinas para el hilado, torcido y tejido del lino y cáñamo serán francos de derechos en su introduccion de dominios extraños por todas las aduanas del Reyno.

5 Estando mandado, que de la seda en rama y de los tejidos y manufacturas de este fruto, y de los de la lana, lino, cáñamo y algodón de las fábricas de estos reynos no se cobren derechos Reales ni particulares á su entrada por tierra en Sevilla, Cádiz, Puerto de Santa Maria y otras aduanas, se extenderá con la calidad de por ahora la libertad de los propios derechos Reales, municipales y particulares al lino y cáñamo del Reyno en

cerro ó rastrillado, que se introduzca por Sevilla, Cádiz y demas aduanas interiores, exigiéndose solamente los derechos de alcabalas y cientos, á que están sujetos estos frutos en los demas pueblos de Castilla.

LEY II. *consiguiente á la 7.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. de la Junta de Comercio circulada en Junio de 805.

Extension de la gracia de alcabalas y cientos concedida á las manufacturas de lino y cáñamo.

Con el fin de fomentar la fabricacion de tejidos de lino y cáñamo en España, me he servido resolver, que la exención de alcabalas y cientos concedida á estas manufacturas al pie de la fábrica, ó para-ge señalado por tal por los reglamentos de Rentas Provinciales de 14 y 26 de Diciembre de 1785, se extienda en las provincias de Castilla y Leon, no solo en favor de los que las fabriquen por sí, sino de aquellos que las hagan fabricar de su cuenta, á la manera que está dispensado á los hilos de lino y cáñamo por Real orden de 15 de Abril de 1797 (*ley 7.*), y baxo las mismas prevenciones contenidas en ella, para evitar la mezcla de tejidos exentos con los contribuyentes.

LEY III. *consiguiente á la 18.*

D. Carlos IV. por resolucion á consulta de la Junta general de Comercio, comunicada en circular de 2 de Marzo de 1803.

Requisitos para la introduccion de instrumentos ó efectos, simples é ingredientes necesarios para las fábricas del Reyno.

He resuelto, que en lo sucesivo cada fabricante haga presente al Intendente de su Provincia el número de instrumentos, ó la cantidad de efectos simples é ingredientes que necesite introducir del extranjero para el consumo de sus manufacturas: que el Intendente, tomando las noticias oportunas de las Justicias respectivas en razón del surtido que necesitare cada fabricante, y previo el exámen de los Administradores y Contadores de provincia ó de partido, señale el número ó la cantidad á que deba limitarse el permiso de introduccion de cada fabricante, y la adua-

na por donde hubiere de realizarla: que en estas se dexarán entrar los efectos señalados en el permiso que diere el Intendente, con las libertades y franquicias que señalan los aranceles y Reales órdenes, bien que con sujecion á guia que los fabricantes sacarán para acreditar la legítima entrada; y que los Intendentes remitan cada año á la Secretaría de Estado y del Despacho universal de Hacienda de España una razon de los permisos dados, y de la cantidad de cada uno.

LEY IV. *consiguiente á la 14.*

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden circular de 30 de Noviembre de 1803.

Franquicias concedidas á las fábricas de extracto de regalíz.

Á fin de que consten en lo sucesivo las gracias y franquicias que hayan de gozar las fábricas de extracto de regalíz, establecidas y que se establecieren en el Reyno; he venido en declarar las siguientes, únicas que se habrán de disfrutar.

1 Que todos los dueños de las fábricas de extracto de regalíz gozarán la calidad de vecinos de las ciudades, villas ó lugares donde las establecieren, con los usos, derechos, beneficios y cargas de que disfruten los demas vasallos, para que no sean interrumpidos en estos establecimientos y en el aprovechamiento comun de las leñas precisas para las elaboraciones.

2 Tendrán facultad de arrancar la raíz del regalíz en todos los terrenos sin interés alguno, siempre que no causaren perjuicio á tercero, quedando ilesa á los

dueños, propietarios ó colonos, la libertad ó preferencia de ejecutarlo por sí y en su beneficio, así como la de venderlo á quien quieran, bien sea para las fábricas ó para extraerlo.

3 Finalmente gozarán los fabricantes por espacio de diez años de la libertad de derechos Reales, incluso el de tablas en Navarra, por el regalíz, orozuz ó palo dulce en pasta en su transporte de puerto á puerto, en su conduccion y salida á Navarra, ó para fuera del Reyno; y así el orozuz en pasta como en rama gozará de la misma libertad de derechos en la entrada de Navarra en Castilla.

LEY V. *consiguiente á la 17.*

D. Carlos IV. por resolucion á consulta de la Junta general de Comercio de 7 de Diciembre, y circular de Febrero de 806.

Libertad del derecho de alcabala al hierro y cobre de las fábricas de estos reynos.

Declaro generalmente libres del derecho de alcabala el hierro y el cobre que produxesen las fábricas del Reyno, no solo en las ventas que se hiciesen al pie de ellas, sino tambien en las que se verificasen en los almacenes que tuviesen los fabricantes en el pueblo de su vecindad y residencia; con la circunstancia de no mezclar con ellos otros artefactos que los propios de su establecimiento, pues en tal caso se les exigirá por todos el quatro por ciento, ó el diez si fueren extrangeros, y con tal que selle cada fabricante sus productos. (1, 2, 3 y 4)

(1) Por Real resolucion de 19 de Julio de 1798 se mandó, que en los puertos de mar habilitados sean libres de los derechos de alcabalas y cientos los fabricantes del Reyno, que de su cuenta conduxeren á ellos, para extraer ó vender por mayor, los texidos de sus fábricas, el lino, lana, seda y algodón; los sombreros, curtidos, papel, abanicos y otras manufacturas nacionales de telar y abuja ya sean de lino, cáñamo, algodón, seda ú otra ilaza, y los hilos de todas clases, como tambien los demas efectos, géneros ó manufacturas de fábricas del Reyno, á los quales por Reales órdenes se hallare concedida la exención al pie de fábrica; pero que en los demas parages donde se vendiesen, se cobre el dos por ciento: y que si los fabricantes mezclasen los texidos de sus fábricas con otros en los parages en que les está concedida la libertad, han de pagar de los de sus fábricas el dos por ciento de alcabalas y cientos del precio al pie de ellas.

(2) Por resolucion á consulta de la Junta de Comer-

cio de 17 de Julio, y circular de Octubre de 1800, se declaró por punto general en favor de las fábricas de xabon la facultad de venderle libremente al pie de ellas, sin mas sujecion que la de asegurar el pago de los Reales derechos, única calidad que les impone la cédula de 2 de Diciembre de 1768. (*ley 12. tit. 24.*)

(3) En Real orden de 8 de Diciembre de 1803 se mandó facilitar á las fábricas de Sal de Saturno el plomo que necesitaren para sus labores á costa y costas.

(4) Y por Real resolucion á consulta de la Junta general de Comercio de 22 de Octubre de 1805, comunicada en circular de 16 de Enero de 802, se sirvió S. M. declarar en favor de todas las fábricas de loza fina del Reyno la libertad de alcabala en las ventas que sus dueños hagan de su propia cuenta en los almacenes que podrán poner en todas las ciudades y pueblos, con calidad que no haya en ellos otra loza que la de las mismas fábricas.

LIBRO NONO

DEL COMERCIO, MONEDA Y MINAS.

TITULO II.

De los Consulados marítimos y terrestres.

LEY I.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real decreto de 30 de Abril de 1800.

Obligacion de los Consulados á presentar sus cuentas anualmente en la Junta general de Comercio para su exámen.

Deseando dar al sistema de cuenta y razon de los caudales que administran los Consulados de estos mis reynos toda la formalidad que corresponde á la naturaleza de los arbitrios que se les han concedido, y teniendo la mayor confianza en el zelo, exáctitud y luces de los individuos que componen la Junta general de Comercio y Moneda, á la qual corresponde la intervencion en todos los asuntos relativos á los Consulados; es mi voluntad el que todos los de España é islas, establecidos y que se establezcan, presenten en ella sus cuentas en todo el mes de Febrero de cada año, formadas con arreglo á la instruccion que acompaña (a), y que exáminadas por la Junta, me haga presente sobre ellas lo que se la ofrezca, para acordar lo conveniente.

(a) La citada instruccion que sigue á este Real decreto contiene veinte artículos respectivos, los seis primeros al cargo de las cuentas, y los restantes á la data; con varias prevenciones y reglas para la formacion de ellas, y su presentacion anual en la Junta general de Comercio.

(1) En Real orden circular de 6 de Abril de 1800, para evitar las disputas sobre el asiento de los Asesores

LEY II. consiguiente á la 15.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 25 de Marzo de 1803 circulada á los Consulados.

Formacion de libro reservado para salvar sus votos los Jueces que no se conformaren con los demas, así en el Consulado como en el Tribunal de Alzadas.

Accediendo á la solicitud del Prior y Cónsules de la ciudad de Málaga, me he servido mandar, que tanto en el Consulado, como en el Tribunal de Alzadas se forme un libro reservado en donde los Jueces, que no se conformaren con el dictámen de los demas, salven sus votos, y firmen la providencia con los otros; colocándose dicho libro en una arca sobre la tabla del Tribunal, si la usare, ó en otro sitio equivalente, con llave que guardará el Presidente; el que baxo del juramento prestado para el exercicio de su empleo, está obligado á tenerlo reservado, y á no revelar á persona alguna los votos que contengan, cuya obligacion es comun á los demas Jueces. (1)

de Alzadas en concurrencia con el Prior, Cónsules, Adjuntos ó Consiliarios á alguna funcion de su ministerio, se mandó por punto general, que siempre que dichos Asesores unan á esta calidad la condecoracion de Ministros de Chancillería ó Audiencia, tengan el primer lugar despues del Presidente; y el inmediato despues del Cónsul, Adjunto ó Consiliario mas moderno, si careciesen de aquella distincion.

TITULO IV.

*De los mercaderes y comerciantes.*LEY I. *consiguiente á la 15.*

D. Fernando VI. en Buen-Retiro por Real órden de 13 de Julio de 1752.

Requisitos para el reconocimiento de libros y papeles de los comerciantes en causas de contrabando.

He resuelto, que así como está prevenido por Reales resoluciones, que en las causas de contrabando no se proceda á la manifestacion de los libros y papeles, sino precediendo sumaria justificacion del fraude y suficiente motivo contra el comer-

ciante, así tambien no se proceda en las de extraccion de seda, que son de igual consideracion, al reconocimiento de libros y papeles de los comerciantes, sin que antecedan los expresados requisitos é indicios justificados para su execucion, aunque haya inquisicion general, en causas de sacas prohibidas; porque en estas se debe obrar por delaciones é informaciones de testigos, y solo se debe pasar al reconocimiento de los libros y partidas correspondientes, quando resulta contra algun mercader prueba ó sospecha suficiente.

TITULO VIII.

*De los navíos y mercaderías.*LEY I. *consiguiente á la 7.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real órden de 14 de Abril de 1802, á consulta de la Junta del Comercio de 25 de Febrero de 1798.

Gratificaciones concedidas por equivalencia de los premios de acostamiento á los que extraigan en embarcaciones españolas géneros del Reyno al extranjero.

Enterado de que los premios concedidos á favor de la construccion y navegacion en la pragmática de 20 de Marzo de 1498, y Real cédula de 13 de Abril de 1790 (*leyes 4 y 7 de este tit.*), no han correspondido, en el modo que se ordenaron, á las soberanas intenciones; he resuelto, que por la extraccion para paises extranjeros de los frutos, géneros y efectos

de mis dominios en embarcaciones españolas, que comprehende la adjunta razon, se adjudiquen las gratificaciones que en ella se expresan (1 y 2); y para la satisfaccion de estas, que son por equivalencia de los premios de acostamientos y abono del dos por ciento del importe de derechos concedidos por los capítulos 1 y 12 de la Real cédula de 13 de Abril de 1790, que en esta parte quedan derogados, se observen las reglas siguientes.

1 Que únicamente se verifique el pago de las referidas gratificaciones en las respectivas aduanas y administraciones de la Renta de Salinas, al regreso ó retorno directo de las embarcaciones españolas á los puertos del Reyno (3).

2 - Que para ello se ha de justificar ha-

(1) En otra Real órden de 14 de Abril del mismo año de 802 se concedió libertad de los derechos de introduccion á la pez, brea y alquitran extranjero que se conduzca en embarcaciones españolas, para auxiliar su construccion y reparos; con declaracion de ser este medio uno de los equivalentes á los premios de acostamiento de que se trata en la pragmática de 20 de Marzo de 1498, y cédula de 13 de Abril de 1790 (*ley 7. de este tit.*) que por consecuencia quedan derogadas en esta parte.

(2) Y en otra de igual fecha, á consulta de la Junta de comercio y navegacion, se sirvió S. M. declarar exentas de los derechos de alcabalas y cientos todas las ventas de embarcaciones españolas y extranjeras que se executen en los puertos de estos dominios á favor de naturales de ellos.

(3) En Real órden de 2 de Septiembre de 1803, deseando S. M. facilitar los progresos de la Marina mercante, y teniendo presente lo dispuesto en otra Real órden de 14 de Abril de 802 se sirvió declarar, "que

berse cargado los frutos, géneros y efectos gratificados en puertos del Reyno; conducidos en embarcaciones españolas, y desembarcados en puertos extranjeros de fuera de la península; con declaracion de que en quanto á la extraccion de los puertos de las provincias exéntas, de frutos, géneros y efectos que hayan pasado por las aduanas, ha de constar tambien su embarco en buques españoles por cer-

para que los buques españoles disfruten de los premios asignados en ella, bastará que acrediten los Capitanes, con certificacion de los Cónsules de S. M., la arribada á puertos extranjeros con los frutos y efectos de la pe-

tificaciones del Juez de contrabando de Bilbao, ó San Sebastian respectivamente.

3 Que las gratificaciones expresadas sean extensivas á los buques y maríneros de las provincias exéntas, mientras concurren á las obligaciones de la matrícula, y á las reglas que tenga por conveniente establecer para ocurrir á la tripulacion de los buques de la Real Armada.

nínsula con bandera española; derogándose la condicion señalada en este capítulo, de ser preciso el retorno directo de las embarcaciones de España á los puertos de esta."

TITULO XII.

De las cosas prohibidas de introducir en el Reyno.

LEY I. *consiguiente á la 12.*

D. Fernando VI. por resolucion á consulta de la Junta de Comercio de 25 de Marzo de 745, 6 de Mayo de 746, y 5 de Noviembre de 750.

Prohibicion de introducir alhajas de piedras falsas engastadas en plata ú oro.

He resuelto prohibir la introduccion, fábrica y venta de las alhajas de todas especies de piedras falsas engastadas en oro y plata que imiten á las finas; conociéndose de las causas de denunciacion, que se executen á la entrada, por la Superintendencia general de la Real Hacienda, á quien toca lo general del contrabando; y entendiendo la Junta de Comercio y Moneda de lo respectivo á lo interior del Reyno, reconocimientos y registros de platerías y demas parages.

LEY II. *consiguiente á la 28.*

D. Carlos IV. en Figueras por Real orden circular de 24 de Octubre de 1802.

Declaracion sobre la introduccion prohibida de libros encuadernados fuera del Reyno.

En beneficio de la industria se prohibió por la Real cédula de 2 de Junio de 1778 (*ley 28 de este tit.*) la introduccion en el Reyno de libros encuadernados en el extranjero: por Reales órdenes de 3 de

Agosto del mismo año y 21 de Junio de 79 se declaró, que esta prohibicion no se entendia con el eclesiástico que llevase sus breviarios ú otros libros de devocion, ni con los particulares transeuntes que conduzcan algunos pocos para su uso, sino precisamente con los que comercian y grangean en libros: y por Real declaracion de 15 de Abril de 1790 se permitió la introduccion de un solo exemplar encuadernado, aun entre los que vienen de surtido. Però habiéndose llegado á abusar de estas consideraciones en términos de venir algunas remesas de libros extranjeros encuadernados en pasta, componiéndose todas de un solo exemplar de diversas obras; me he servido declarar, que desde ahora en adelante solo se permita la entrada del libro del Oficio divino que traigan consigo los eclesiásticos que vienen á estos Reynos, ó los de su devocion para su propio uso, y algunos pocos que del mismo modo pudiesen traer los particulares transeuntes para igual efecto. Que si algunos particulares tuviesen el gusto de encargar por sí, de su cuenta y riesgo, y no por conducto de librero ó tratante en el ramo, un exemplar de alguna obra encuadernada en pasta ó de otro modo, se les permita su entrada, satisfaciendo por derecho de encuadernacion el importe del doble precio que costaria si se hubiera hecho en el Reyno, regulándose por persona inteligente segun su calidad

y tamaño; y que conforme á lo prescrito en la citada Real cédula, que ha de tener observancia sin excusa ni interpretacion alguna, qualesquiera otros libros enquadernados procedentes del extrangero, sean para particulares, libreros ó tratantes, ó de qualquiera procedencia, y aunque compongan un solo exemplar, no han de poder ser introducidos en el Reyno; debiendo para su internacion quitarseles las pastas ó cubiertas á presencia de los dueños ó sus comisionados, conforme á lo prevenido en Real orden de 7 de Agosto de 1787, y Real declaracion de 15 de Abril de 1790 ya citada, que debe subsistir únicamente en esta parte, pues queda derogada en todo lo demas; y obligándose los dueños á sacarlas del Reyno, y acreditar su paradero donde les destinaren: y si, por residir en Madrid, les acomodare presenciar la operacion, se executará así, luego que lo pidieren al Administrador de aquella provincia, ó al de la aduana de entrada; pues para la conduccion y remesa de libros á aquella Corte está prevenido el modo y forma en circular de 4 de Abril de este año.

LEY III. *consiguiente á la 24.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 3 de Febrero de 1803.

Declaracion de las reglas contenidas en la ley 24 de este título, para la introduccion de algodón y sus manufacturas, con prohibicion de las extrangeras.

Enterado de las dudas propuestas por algunos Subdelegados del Reyno sobre la execucion de la Real orden de 20 de Septiembre próximo pasado (*ley 24 de este tit.*), en la qual se prohíbe la entrada y venta en el Reyno de las manufacturas extrangeras de algodón, y con presencia de lo representado por algunas casas de comercio, me he servido declarar lo siguiente.

1. Que la libertad de derechos concedida por el artículo 1.º á el algodón de América en su entrada en el Reyno, no comprehende al derecho de Consolidacion de Vales, ni al que se exige en los Consulados para reintegro de las cantida-

(1) En Real orden de 20 de Junio de 1804, para evitar dudas sobre la imposicion de esta multa de treinta por ciento, se declaró, que ha de hacerse indistin-

des que han anticipado á la Real Hacienda, los quales se continuarán cobrando por la calidad privilegiada de su destino y por ser temporales: mas no se exigirá otro alguno, tenga la denominacion que tuviere, incluso el de marchamo.

2. Que los algodones en rama que traxere la Compañía de Filipinas, siendo produccion de estas islas, gocen de la misma exención de derechos que el algodón de nuestras Américas.

3. Se habilita la entrada en la península é islas adyacentes del algodón en rama de Fernambuco, acreditando su procedencia con las certificaciones correspondientes de los Cónsules, segun por punto general se halla prevenido en la Real orden de 19 de Noviembre de 1802; siendo mi voluntad que se le cobre á la entrada en el Reyno ocho maravedís en libra por Rentas generales, dos por ciento por razon del derecho de internaciones, y el cinco por ciento para Consolidacion.

4. El algodón hilado en España gozará de la libertad de todos derechos que previene el artículo 7 de la Real orden de 20 de Septiembre último, incluso los de puerta de Barcelona, y qualesquiera otros que se hallaren establecidos.

5. La exención de derechos Reales y municipales, concedida por el artículo 8 á las manufacturas españolas de algodón, es absoluta: y comprehende hasta los recargos y alcabalas que se hayan establecido en el interior del Reyno, ó en sus puertos con qualesquiera motivo, sin exceptuar el subsidio de los trescientos millones.

6. La multa de treinta por ciento (1) impuesta en el art. 15 á los algodones que se decomisen en lo sucesivo, es la única que se debe exigir, quedando abolida con ella la de veinte reales en vara que señalan las órdenes anteriores.

7. El referido treinta por ciento se cobrará del importe que dieren los Vistas de las aduanas á los géneros, y no del que resultare en la venta pública de los mismos.

8. En el conocimiento, modo de substanciar las causas y aplicacion de comisos en los géneros de algodón, se observará lo dispuesto en la Real cédula de 17

tamente sobre todos los géneros de algodón de contrabando, bien sean muselinas, cotonadas, medias ú otras qualesquiera.

de Diciembre de 1760, y en las Reales órdenes de 2 de Enero y 7 de Diciembre de 1801, mientras no se prevenga otra cosa.

11 Finalmente los Jueces ó Justicias ordinarias solo deben conocer á prevención con los Subdelegados de Rentas, quando las aprehensiones de los géneros de algodón, de que se trata en el artículo 16 de la circular de 20 de Septiembre próximo, se hagan por ellos ó por los dependientes de sus Juzgados, conforme á lo dispuesto en la Real resolución de 24 de Enero de 1802.

LEY IV. consiguiente á la 24.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 24 de Abril de 1804.

Observancia de la Real cédula prohibitiva de la introduccion del algodón hilado extranjero.

Enterado del aumento que toma la fabricacion é hilado de algodón, y convenido de la utilidad que de ello se sigue al Estado, así como de lo mucho que in-

teresa á éste el progreso de una industria tan digna de fomento en un Reyno como España, en donde es propia la materia primera; no solo he desestimado como ruinosas algunas solicitudes relativas á la introduccion del algodón hilado extranjero, sino que en uso de mi soberana autoridad, y por efecto del cuidado paternal que me merecen las clases útiles, me he servido mandar, que se observe con el mayor rigor la prohibicion; sin que se varíe en cosa alguna lo dispuesto en la Real cédula de 20 de Septiembre de 1802 (*ley 24 de este tit.*), referente á las antiguas Reales determinaciones que se acordaron y publicaron al propio fin (1): hallándome á mas dispuesto á tomar quantas providencias parezcan oportunas para llevarla á efecto, y ofreciendo dispensar á las filaturas y á las fábricas de algodón toda mi proteccion, y quantos auxilios necesiten para su mayor prosperidad.

Se hará circular esta soberana resolución á todos los fabricantes de las provincias, á fin de que se estimulen en el adelantamiento de un ramo tan precioso, y tan digno de sus especulaciones. (2, 3 y 4)

(1) En otra Real orden de 22 de Febrero de 1804 se declaró, que el espíritu de la citada de 20 de Septiembre de 802 (*ley 24 de este tit.*), es el terminar absolutamente la introduccion y venta en el Reyno de manufacturas de algodón de fabrica extranjera.

(2) En Real orden de 14 de Septiembre de 1803 se declaró prohibida la entrada en el Reyno del nuevo tejido llamado Siwandeson, por contener mezcla de lana y algodón

(3) En otra de 28 del mismo mes y año se prohibió

la entrada de muñecas, con la cara, pecho y manos de madera, y el resto del cuerpo figurado con valdés, por quanto en esta ocupacion puede emplearse la industria española.

(4) Y en otra de 15 de Octubre del mismo año se mandó, para que se observe por regla general, que al que presente en las aduanas géneros que por qualquiera razon se hallen prohibidos á comercio, se les permita que los vuelvan á extraer sin mas vejacion ni molestia, á no dar con su conducta motivo á sospecha.

TITULO XIII.

De la saca prohibida del oro, plata y moneda del Reyno.

Notas de la ley 18 de este título.

En Real orden de 6 de Marzo de 1799, para evitar la extraccion de plata á Francia por Aragon y Cataluña, se dispuso que por ningun motivo ni pretexto se diesen guias para conducir pesos duros á la demarcacion, sino solo para oro ó plata menuda, ni en mas cantidad que de veinte dos mil reales; dandose siempre estas guias á los naturales de los pueblos de la demarcacion que hiciesen constar ser dicha suma producto de su industria, ó de frutos ó efectos propios de su país traídos á vender, y por

ningun caso á los forasteros extranjeros.

Y por Real resolución comunicada en circular de 18 de Septiembre de 1800, con referencia de la anterior, para evitar los perjuicios causados por la mala inteligencia y extension que se la habia dado; se mandó quedase sin efecto, observándose con puntualidad las reglas, que para evitar la extraccion de moneda del Reyno se prescribieron en las Reales cédulas de 15 de Julio de 1784. (puestas por leyes 14 y 18 de este título)

TITULO XV.

De la extraccion de ganados, granos y aceites.

LEY I. consiguiente á la 12.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 15 de Marzo de 1803.

Permiso para extraer los ganados de Galicia; y aumento de derechos en la introduccion de los extrangeros.

Con motivo de haberme manifestado la Sociedad económica de Santiago de Galicia la decadencia que se experimenta en la cria de ganados de aquel Reyno, asi

por hallarse prohibida la saca de ellos á Portugal, como por la falta de consumo de varias ciudades que se surten del extranjero; he resuelto, que sea libre la extraccion de los ganados del Reyno de Galicia, pagando por todos derechos el quatro por ciento de venta que previene el reglamento de 14 de Diciembre de 1785; y que al ganado extranjero, que en lo sucesivo entrare en el Reyno, se le exijan dos tercios mas de derechos de Rentas generales que los que se cobran en la actualidad.

LIBRO DECIMO

DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES; TESTAMENTOS
y herencias.

TITULO II.

De los esponsales y matrimonios.

LEY I. consiguiente á la 19.

D. Carlos IV. en Aranjuez por resol. á cons. del Consejo de Guerra y circular de 8 de Marzo de 1804.

Modo de obtener en el Consejo de las Ordenes la licencia para casarse los Militares condecorados con alguna de ellas.

Por resolucion de 25 de Diciembre del año próximo tuve á bien mandar, que á ningun Caballero de las Ordenes Militares, de qualquier condicion que sea, se le pueda conferir el Sacramento del matrimonio, sin que acredite por escrito la licencia del Consejo de las Ordenes, que se la concederá despues de haber visto y aprobado la informacion de limpieza de sangre, por lo ménos de la muger con quien intente casarse. Sin embargo de esto como los Oficiales del Ejército, que estan condecorados con alguna de las Ordenes mi-

litares, tienen que justificar en debida forma en el Supremo Consejo de la Guerra la posesion de hidalguia ó limpieza de sangre de los contrayentes, conforme á lo prevenido en los artículos 5. y 6. capítulo 10. del reglamento del Monte-Pio militar, para obtener la competente Real licencia; y á fin de evitar al que tenga aquella condecoracion, é intente casarse, los gastos que ha de ocasionarle la duplicacion de documentos; he resuelto, que obtenida que sea la licencia preferente como militar, deba solicitar la del Consejo de las Ordenes; supliendose las diligencias de estilo en este Tribunal con una certificacion librada de acuerdo del de la Guerra, en que se exprese haberse concedido la Real licencia, precedida la presentacion de los correspondientes documentos; con lo que se acredita hallarse calificada sin dispensacion alguna la limpieza de sangre de la contrayente.

TITULO X.

*De los arrendamientos.*LEY I. *consiguiente á la 7.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 3 de Junio de 1805.

Preferencia de los Militares en el arrendamiento de casas desocupadas.

He tenido á bien mandar, que se observe por punto general lo prevenido

por la Real orden circular de 11 de Marzo de 1790. (*ley 7. de este título*); declarando además, que el Militar que concurra con otro particular á arrendar una casa desocupada, no queriendola el dueño para sí ó su familia, sea preferido á qualquiera otro, por privilegiado que fuere, sin perjuicio de pagar los alquileres por meses, y dexandole salvo el beneficio de la tasa.

TITULO XII.

*De las ventas y compras; y derecho de alcabala.*LEY I. *consiguiente á la 14.*

D. Carlos IV. por Real orden de 7 de Junio de 1793.

Reglas para precaver los fraudes de los derechos de alcabala.

Para precaver los fraudes de los derechos de la alcabala, que se intentan en las ventas de bienes raices, imposiciones

Circular consiguiente á esta Real orden.

En observancia de lo prevenido por la ley 14. de este título, y con arreglo á lo mandado por diferentes órdenes é instrucciones, las escrituras de ventas é imposiciones de censos, y qualesquiera otras enagenaciones de bienes raices, deberán otorgarse precisamente ante los Escribanos del Número de las ciudades, villas y lugares, á que pertenecieren los términos en que se hallaren sitas las posesiones y heredades que se vendieren ó gravaren; y no habiendo Escribano del Número, ante el de la ciudad, villa ó lugar mas cercano, con tal que sea del partido; estando como está prohibido, y de nuevo se prohíbe á qualesquiera otros Escribanos Reales ó Notarios Apostólicos, que den fé, ó reciban tales contratos, baxo la pena de privacion de sus oficios y la de pagar á la Real Hacienda la alcabala, con el quatro tanto, que se adeudase en las prenotadas ventas

de censos y otras enagenaciones; he resuelto que por los Administradores generales y particulares de Rentas Provinciales se promueva y cele la observancia de las leyes y demas reglas dictadas para la mejor y mas pronta recaudacion de dichos derechos; expidiendose por la Superintendencia general la orden circular conveniente.

é imposiciones de censos.

Que los Escribanos, ante quienes se otorgaren estos contratos, han de ser obligados á dar á los Administradores de Rentas mensualmente testimonios de las escrituras que se hubieren otorgado ante ellos, con juramento de no haber recibido otras algunas, baxo las penas impuestas á los contraventores por dicha ley recopilada; y que baxo las mismas no puedan los Escribanos entregar las escrituras de venta á los compradores, sin constarles en debida forma estar satisfecho ó asegurado el derecho de la alcabala causado en dichas enagenaciones.

Y que para descubrir y castigar los fraudes que de ella se intentaren, ya simulandose otros contratos, ó ya adoptandose otros medios con que, segun ha hecho ver la experiencia, se defraudan los Reales derechos, las Justicias sean obliga-

das á hacer las averiguaciones convenientes; dando cuenta al Subdelegado del partido de los fraudes que descubrieren, para que se cobre la alcabala con el quatro tanto, con arreglo á lo mandado en la ley 19. de este título.

LEY II. *consiguiente á la 21. y 22.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden de 2 de Febrero de 1797.

Reduccion de los derechos de alcabalas y cientos por punto general al respecto de un quatro por ciento, excepto los de yerbas, bellota y agostaderos.

Deseoso de proporcionar á mis amados vasallos el alivio posible por aquellos medios que exige la igualdad, que se ha tenido por objeto en los últimos reglamentos; me he servido declarar por punto general para todo el Reyno, aun para los pueblos donde no se hallen establecidos dichos reglamentos, que los derechos de alcabalas y cientos de las ventas de posesiones é imposiciones de censos, excepto los de yerbas, bellota y agostaderos, en que no debe hacerse novedad (*ley 22.*), se exijan al respecto solo de un quatro por ciento desde la fecha de esta Real orden; baxo las prevenciones y conminaciones repetidas á los Escribanos en la de 17 de Junio de 1793 (*ley 21.*), de que no entreguen las copias de escrituras de ventas á las partes compradoras, sin que les presenten documento que acredite haber satisfecho los Reales derechos; encargandose á las Justicias den pronta noticia del sugeto que defraude los derechos, para que se le imponga la pena que previene aquella resolucion, haciendo á este fin las averiguaciones convenientes; con prevencion de que si faltaren á estas obligaciones, serán responsables del pago de los derechos que se averiguen haberse defraudado (1 y 2).

(1) En Real orden de 1 de Septiembre de 1797, con motivo de solicitud hecha por un albacea para que se le eximiese del pago de derechos en la venta de bienes del difunto su dueño, para invertir el importe de ellos en misas con arreglo á su última disposicion; tuvo S. M. por conveniente desestimar semejante instancia.

(2) Y en Real orden circular de 12 de Diciembre de 802. se mandó, que la exacción de los derechos de alcabalas y cientos de bienes mostrencos se observe por punto general en todas las provincias de Castilla y Leon.

LEY III.

D. Carlos IV. por resol. á cons. del Consejo de Hacienda de 21 de Junio inserta en circular de Diciembre de 1802.

Observancia de los pactos contenidos en los encabezamientos de los pueblos, sobre el derecho de alcabala que causen las ventas hechas en ellos por vecinos de pueblos administrados.

Con motivo de recursos de diferentes interesados, sobre si de las ventas executadas en pueblos encabezados debian pagarse en estos los derechos de alcabala ó en los de la vecindad de los vendedores; me he servido declarar, que en el sistema actual de administracion de Rentas no es conveniente ni adaptable el capítulo de la carta acordada del Consejo de Hacienda de 24 de Julio de 1643, repetida en 22 de Febrero de 1670, sobre que los vecinos de pueblos administrados paguen en ellos las alcabalas por las ventas de frutos y efectos en pueblos encabezados, si no que sobre las alcabalas que se causen en estos por los forasteros se guarden los pactos ó condiciones contenidos en los respectivos encabezamientos; previniendose á los Intendentes y Subdelegados de Rentas, que en los encabezamientos con los pueblos procuren arreglarse á los reglamentos de 26 de Diciembre de 1785 y formulario de 10 de Mayo de 786, á no ser que por las particulares circunstancias de algun pueblo ó partido convenga excluir determinado ramo de las ventas que en ellos se causen por forasteros; en cuyo caso deberán acordar los Intendentes y Subdelegados lo mas conveniente á la recaudacion de Rentas, oyendo ántes á los Administradores generales y particulares de ellas, y á las Contadurías de provincia y partido, ó proponer lo que estimen al Superintendente general de la Real Hacienda, siempre que la entidad del asunto ó su trascendencia lo exijan. (3)

(3) En Real orden circular de 28 de Julio de 1804 se mandó por punto general, que los derechos de alcabalas y cientos se incluyan en el encabezamiento de Rentas Provinciales de cada pueblo, como lo estaban ántes de los reglamentos del año de 1785, y formulario de 10 de Mayo de 86; tomando por presupuesto el valor de las ventas é imposiciones que se hayan verificado en diez años, y sacando, para aumentar el encabezamiento, el comun de ellos con respecto al quatro por ciento á que en la actualidad se halla reducida la exacción de dichos derechos.

TITULO XV.

De los censos.

Notas de la ley 27. de este titulo.

(1) Por Real orden de 18 de Julio de 1780. se encargó á la Contaduría general de la Renta del tabaco la toma de razon de las escrituras de imposicion que se hiciesen sobre dicha Renta en virtud de las Reales cédulas de 19 y 23 de Marzo del mismo año (ley 25 y nota 12 de este titulo) y 9 de Octubre de 1793. (ley 27)

(2) Y en otra Real orden circular de Marzo de 1800, con motivo de haberse extin-

guido por Real decreto de 25 de Septiembre de 1799 la Contaduría general de la Renta del tabaco, se mandó tomar la razon de todas las escrituras otorgadas desde la publicacion de dicho Real decreto, y de las que se otorgasen en lo sucesivo, por el Contador de Data de la Tesoreria mayor; y que así se previniese al final de las escrituras, como ántes se prevenia con respecto á la suprimida Contaduría.

TITULO XVIII.

De los testamentos.

LEY I.

D. Fernando VI. por Real orden de 11 de Diciembre de 1750, inserta en provision de 11 de Febrero de 751.

Manda forzosa en los testamentos de 48 maravedís en favor de los hospitales General y de la Pasion de Madrid.

He resuelto se imponga en todos los testamentos de seglares, que en adelante

(1) Para el cumplimiento de esta Real orden, á peticion de la Real Junta de hospitales General y de la Pasion de la Corte, por decreto del Consejo de 17 de Octubre de 757 se mandó, que en todos los titulos y aprobaciones de Escribanos que se despachen para dentro de las ocho leguas, se ponga la prevención de lo resuelto por S. M. á fin de que en todos los testamentos que ante ellos se otorguen de seglares,

se otorguen, una nueva manda forzosa consistente en 48 maravedís de vellon, y extensiva solo á los lugares del Vicariato de la Villa de Madrid, y á los de 8 leguas de distancia de ella, para dotacion de sus dos hospitales General y de la Pasion; encargandose al Visitador de la Villa y su partido en la exacción de este producto, y de que no dé por cumplidos los testamentos, sin que haya primero cobrado lo respectivo á cada uno (1).

lleven la imposicion como manda forzosa de la cantidad de 48 maravedis para alivio de los pobres en dichos hospitales; y en los que otorguen los eclesiásticos se les recuerde en nombre de S. M. que ejerciten la caridad á obra tan pia: y que lo mismo ejecuten los Escribanos de Provincia y Número de la Villa, y los Reales asistentes á sus oficios.

TITULO XXI.

De las testamentarias, inventarios, cuentas y particiones.

LEY I. consiguiente á la 6.

D. Fernando VI. en Buen Retiro por Real orden de 21 de Diciembre de 1752.

Conocimiento de los inventarios de bienes de los criados de la Real Casa.

Para evitar competencias, he resuel-

to, que siempre que muera algun criado de las Reales Casas dentro de Palacio, y su heredero ó herederos gozasen del mismo fuero, deba conocer y dar principio al inventario de sus bienes, y continuarlo hasta su fenecimiento en todas sus partes, el Juez propietario de la Real Casa á que corresponda la servidumbre

de aquel individuo; y en el caso de que sean muchos los herederos, y solo uno goce del fuero privilegiado, ó hubiere algun acreedor principal que goce de él, deban seguirse las reglas que el Derecho prescribe en tales casos con semejantes fueros privilegiados; y lo mismo si se formase concurso de acreedores, ya sea voluntario ó necesario: pero si el individuo de mis Casas Reales, que muriere dentro de Palacio, no dexase heredero que tenga el mismo fuero, deba el Juez privativo de la Real Casa, á que ha servido, hacer el inventario de los bienes que hubiere dexado en su habitacion; y evacuado esto, remitirá copia autorizada al Juez ordinario que hubiere elegido el heredero, para que lo continúe de los bienes que le perteneciesen fuera de Palacio, dexando el original en el oficio de Contralor; y si el difunto hubiere exercido empleo de Gefe de alguno de los oficios, y hubieren estado á su cargo algunos bienes, efectos, ó papeles pertenecientes á aquel oficio, podrá en este caso el Juez privativo de la Real Casa entender en ello hasta la reintegracion de los bienes y efectos mencionados; inventariandolos tambien, aunque sea fuera de las Reales Casas, habiendose executado, y remitiendo el conocimiento á la Justicia ordinaria; y quando el dependiente de las Reales Casas tenga desde luego solo el fuero personal y hubiere muerto fuera de Palacio, quiero que, luego que se acepte la herencia por los herederos con beneficio de inventario ó sin él, que no gozasen del fuero, no deba mezclarse el Juez privativo, ni entender en el inventario ni testamentaria del tal difunto, respecto de que con su muerte cesó el fuero que gozaba, y de estar su heredero ó herederos sujetos á la jurisdiccion Real ordinaria; siguiendose esta regla asi en los que mueren con empleo en las Casas Reales, como en los que fallecen abintestato. (1)

(1) En Real orden de 21 de Octubre de 1780, con motivo de competencia entre el Juez de la Real Cámara y un Alcalde de Casa y Corte, sobre conocimiento en el inventario del abintestato de un Ayuda de Cámara con destino al quarto del Principe; mandó S.M. que dicho Al-

LEY II. consiguiente á la 6.

D. Carlos III. en Madrid por resol. á cons. del Cons. de Indias de 19 de Dic. de 1778. y céd. de 13. de Nov. de 779.

Conocimiento de las testamentarias y abintestatos de los Ministros, subalternos y dependientes del Consejo de Indias.

He venido en declarar, que asi los Ministros de mi Consejo de las Indias, como los subalternos y demas dependientes de él, que tengan sueldo y plaza jurada, deben gozar del fuero pasivo en quanto á sus testamentarias abintestato, y sus incidencias; y que de estas causas solamente puede conocer en primera instancia el Juez que fuese de Ministros del propio Consejo, y en segunda este, conforme á la Instruccion siguiente.

1.º Será Juez propio y privativo para el conocimiento de todas las testamentarias, abintestatos y sus incidencias, de las personas que deben gozar de fuero pasivo en estas causas, y de que se hará expresion en el capítulo correspondiente, el Juez de Ministros que es ó fuere del Consejo de Indias; excepto que para algun caso particular ó extraordinario tenga á bien el Presidente ó Gobernador de este Supremo Tribunal nombrar á otro de sus Ministros, para que conozca en la testamentaria ó abintestato de alguna de las personas que fallecieron, y que deba gozar el enunciado fuero,

2.º Quando el Juez de Ministros se halle ausente, enfermo, ó legítimamente impedido, y ocurriese el fallecimiento de alguna de las personas que deben gozar del fuero, ejercerá la comision el Ministro que para este caso se halle nombrado por el Presidente ó Gobernador; y quando este nombramiento no se verifique, y falleciere alguno de los que deben gozar del fuero, hallándose enfer-

calde lo continuase con arreglo á la Real orden de 21 de Diciembre de 1752; y que siempre que se encontrasen libros ó otros efectos de S. A., los pusiera á disposicion del Juez de la Real Cámara.

mo, impedido, ó ausente el Juez de Ministros, y en esta Corte el Presidente ó Gobernador, le pasará el Decano el oficio correspondiente, dándole noticia del fallecimiento, para que en uso de sus facultades nombre otro que ejerza las de aquel; y si el Presidente ó Gobernador estuviese ausente, nombrará el Decano con acuerdo del Consejo, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, uno de los Ministros de la tabla que ejerza la comision; ó quando el caso sea urgente, y no dé lugar á la concurrencia y acuerdo del Consejo, lo nombrará el Decano, quien inmediatamente en uno y otro caso dará cuenta de todo al Presidente ó Gobernador, para que delibere lo que tenga por conveniente.

3.º Gozarán del fuero pasivo en las testamentarias, abintestatos y sus incidencias, los Ministros de la tabla, los jubilados, los ausentes de una y otra clase, sus mugeres, viudas, é hijos que estén baxo la patria potestad; y todos los dependientes y subalternos del Consejo que obtengan plaza jurada, y sueldo fixo, estén en actual exercicio, ó jubilados, aunque se hallen ausentes; como tambien sus mugeres, viudas, é hijos que estén baxo su patria potestad.

4.º Luego que muera algun Ministro de la tabla, ó subalterno que goce del enunciado fuero, tendrán cuidado los Fiscales, las Secretarías, Contaduría, y Escribanía de Cámara de pasar al Juez noticia de los expedientes, documentos y papeles, que deben parar en poder del difunto, para que los recoja con la brevedad posible, y los remita á la respectiva oficina, donde correspondan; y en caso de que en poder del difunto se hallasen expedientes ó papeles pertenecientes á la Via Reservada, dará noticia de ello á la Secretaría, para que disponga el que se recojan en el modo y forma que sea acostumbrado, ó que el Secretario de Estado tenga á bien se execute; procediendo en todos estos puntos el Juez, y en los demas de la testamentaria, segun le dictáre su prudencia, con atencion á las circunstancias, á las personas, á la última voluntad del testador, y á lo establecido por Derecho; á lo que se deberá arreglar para los casos en que corresponde proceder al juicio de inventario, particion y sus incidentes.

5.º Que en la insinuacion, apertura del testamento, nombramiento de depositario de bienes, de tutores, curadores, de defensor de ausentes, y en el inventario, particion y division de bienes, que estén dentro ó fuera de esta Corte, ó en América, con las demas incidencias de testamentaria de los Ministros y dependientes que gozan de fuero pasivo, como tambien de sus mugeres, viudas é hijos, deberá proceder el Juez privativamente con inhibicion de todo Tribunal en primera instancia; arreglandose en cada uno de los puntos que ocurran á lo prevenido por Derecho, y leyes de estos reynos.

6.º Que quando para alguna de las incidencias que ocurran, tuviese que librar algun despacho requisitorio á las Justicias y Tribunales de Indias, ó á los de estos dominios, deberá presentarse al Consejo, para que auxiliado por este supremo Tribunal, sea obedecido en todas partes, como se previene en las leyes 39. y 40. del tit. 1. lib. 2, y en la 2. tit. 2. del mismo libro de las municipales; y en el caso de urgencia, ó dias feriados en que no hay Consejo, quedará autorizado el Juez de Ministros, para extender los despachos necesarios, y remitirlos á las Justicias ó personas que convenga, autorizados con su firma y las otras dos de estilo, para evitar de este modo toda dilacion y competencia.

7.º Que si alguna de las partes interesadas en estos juicios de testamentaria ó sus incidencias se sintiese agraviada de las providencias del Juez, podrá usar del recurso de apelacion, que le deberá admitir en los casos prevenidos por Derecho, para el Consejo en Sala de Justicia; y con la sentencia que en esta Sala se diere, confirmando ó revocando la de Juez de Ministros, quedará acabado el juicio y executado, conforme á lo prevenido en la ley 65, tit. 2. lib. 2. de las municipales, y auto acordado del Consejo 115. concordante con la misma ley.

8.º Que el Escribano de Cámara ú Oficial mayor, y subalternos que actúen en los enunciados juicios de testamentarias, abintestatos y sus incidencias, lo han de hacer de oficio, pagándoles unicamente el papel y lo escrito; bien que si executasen algun trabajo extraordinario, con vista de lo que informe el Juez

de Ministros, resolverá el Consejo si se le debe dar ó no alguna gratificación, y en qué cantidad; y en la misma conformidad se evacuarán de oficio las diligencias que sean precisas por las demas oficinas del Consejo, sin que los interesados tengan que satisfacer mas que el gasto del papel, y lo escrito.

9.º Quando la persona que debe gozar del fuero pasivo, se hallare ausente de esta Corte, y falleciese en algun pueblo de estos reynos, podrá el Juez ordinario del territorio, no como tal ordinario ó nato, y sí como subdelegado del Consejo de Indias, proceder á practicar aquellas diligencias que pidan pronta expedición, y sean precisas y pertenecientes á la testamentaria ó abintestato del que falleciere, ínterin que se verifica que el Juez de Ministros tenga noticia de la muerte, y confiere su expresa comisión á la misma Justicia, ó á la persona que tenga por conveniente; en cuyo último caso se le entregarán al comisionado sin dilación alguna, por el Juez en cuyo poder se haláren, todas las diligencias y autos obrados para que las continúe, y exe-

cute todo lo prevenido en la comisión, que deberá comunicarse siempre autorizada con arreglo á lo prevenido en el cap. 6. de esta instrucción.

10.º En los dominios de Indias, así por lo mucho que distan de esta Corte, como porque las Audiencias de América, conforme á la ley municipal tienen nombrado un Ministro por Juez de bienes de difuntos, estos Jueces como delegados del Consejo conocerán privativamente en primera instancia de la testamentaria, ó abintestato de la persona que debe gozar del fuero, y falleciere en el distrito de su respectiva Audiencia; practicando por sí, ó por sus comisionados en su caso, todas las diligencias que ocurran en primera instancia hasta la definitiva; admitiendo las apelaciones, que de sus providencias se interpusieren en el modo y forma prevenido por Derecho, únicamente para el Consejo, y remitiendo los autos en este caso, como sus informes y demas que ocurra, por mano del Juez de Ministros del Consejo, con quien deberán comunicar y consultar quanto tengan por conveniente.

TITULO XXIV.

Del uso del papel sellado en las escrituras, autos é instrumentos públicos.

LEY I. consiguiente á la II.

D. Carlos IV. por Real orden de 30 de Marzo inserta en circ. de 10 de Abril de 1805.

En los Ministerios no se admitan memoriales ó pretensiones de empleos ó gracias sino en papel del sello 4.º

Estando prevenido en Real dec. de 4 de Abril de 1794 recopilado en el art. 4. de la Real céd. de 23 de Julio de dicho año (*ley II. de este tit.*), y en el art. 85. de la misma, que no se admitan en los Ministerios memoriales ó pretensiones de empleos, ó gracia de qualquiera clase, en otro papel que el del sello quarto; y

notandose que varias personas presentan solicitudes en papel de oficio, ó en el señalado para pobres de solemnidad, sin concurrir en ellos las circunstancias que para el uso del de esta clase exigen los artículos 82. y 83. de la citada Real cédula; me he servido mandar, que se observe puntualmente lo prevenido en ella; y que no se admitan en los Ministerios memoriales ó pretensiones de empleos y gracias de qualquiera clase (aunque sean de personas empleadas,) sino en papel del sello quarto de quarenta maravedís, no entendiéndose esto de los que se den solamente para hacer recuerdo de algun negocio ó pretension.

LIBRO UNDECIMO

DE LOS JUICIOS CIVILES ORDINARIOS Y EXECUTIVOS.

TITULO XI.

De los testigos y sus declaraciones.

LEY I. consiguiente á la 10.

D. Carlos IV. por Real res. de 18 de Julio ins. en céd. del Consejo de 10 de Agosto de 1805.

Sobre el modo y forma de jurar en juicio los Militares, los individuos de Marina, y del Ministerio Político y Hacienda de Guerra.

Considerando que es propia y peculiar de los Militares la prerrogativa de jurar, poniendo la diestra sobre la cruz de la espada, ó baxo la palabra de honor, en las declaraciones que dan en los Juzgados militares y políticos; y queriendo no se vulgarize esta distincion tan debida al servicio que hacen en la ilustre carrera de las Armas; conformandome con el dictámen del mismo Consejo de Guerra, he resuelto que esta fórmula de jurar en juicio se observe y guarde unicamente para los Militares vivos ó retirados, sin perjuicio de lo que está prevenido acerca de los Oficiales Generales; y que los individuos del Ministerio político y Hacienda de Guerra del Ejército, como los de Marina presten el juramento en forma comun, caso que no hayan de declarar por certificación en las cosas puramente de su ministerio y cargo. En su consecuencia queda anulado lo dispuesto en la Real Cédula de siete de Diciembre de mil setecientos noventa y uno para los individuos del Cuerpo político de la Armada.

LEY II.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden de 12 de Octubre de 1805, ins. en circ. del Consejo de 13 de Enero de 1806.

Sobre el modo de declarar á presencia del Juez los Oficiales militares desde Sargento mayor arriba.

He resuelto que se observen las Reales órdenes de 14 de Octubre de 1774, 18 de Diciembre de 87, y 11 de Marzo de 1800, como tambien la de Julio de 1775, para los casos en que hayan de declarar precisamente á presencia del Juez los Oficiales militares desde Capitan inclusive abaxo, por no permitir la causa poderse comisionar al Escribano; pero que en igual caso, en que sea necesario recibir declaracion á Oficiales propietarios, ó graduados de Sargento mayor inclusive arriba, pase el Juez de la causa á la posada del Capitan General como Presidente de la Audiencia, y no existiendo en el pueblo, lo haga en la Audiencia y Sala primera de ella, en las horas que se halle disuelto el Tribunal; y que quando ocurra la necesidad de recibir declaraciones á Oficiales de dicha graduacion en los pueblos donde ni resida Audiencia ni el Capitan General, por su Corregidor, Alcalde mayor, ó Juez ordinario ó delegado de distinta jurisdiccion, pase el uno á recibirla, y el otro á darla á las Casas consistoriales.

Nota consiguiente á la 6.^a

1. Por Real resol. comunicada en circ. de 29 de Octubre de 1804, con motivo de recurso hecho por el Asesor del Gobierno militar de Zamora, quejandose de que el Director de aquella Academia y Asesor del Cuerpo de Ingenieros pretendia hacerle comparecer para evacuar una declaracion; resolvió S. M., que respecto á

que dicho Asesor, ademas de serlo de aquel Gobierno, ejercia jurisdiccion como Alcalde mayor en varios pueblos correspondientes á la Dignidad Episcopal y Orden de San Juan, solo debia declarar en caso necesario por certificación, sin ir á casa del Juez.

TITULO XXVII.

De los juicios de hidalguía y sus probanzas; y del modo de calificar la nobleza y limpieza.

LEY I.

D. Carlos IV. por Real orden de 16 de Junio inserta en circ. del Consejo de 2 de Julio de 1802.

Prohibicion de hacer certificaciones de genealogias, y demas funciones propias de los Reyes de Armas, los que no tengan este titulo.

Estando prohibido por Real orden de 17 de Noviembre de 1749, que nin-

guna otra persona que los Reyes de Armas de Número, y los Supernumerarios, pueda emplearse en las funciones peculiares de estos destinos, ni en hacer los instrumentos, certificaciones de genealogias, y entronques que les pertenecen; y habiendose sin embargo entremetido desde aquel tiempo muchos sugetos á exercer estas funciones; he resuelto, que se renueve la expresada prohibicion.

LIBRO DUODECIMO

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS; Y DE LOS JUICIOS CRIMINALES.

TITULO VIII.

De los falsarios.

LEY I. *consiguiente á la 5.*

D. Felipe V. en Madrid por pragm. de 7 de Abril de 1716.

Observancia y execucion de todas las leyes penales contra monederos falsos.

Todas las leyes de estos reynos, que imponen penas contra los monederos falsos, sean inviolablemente observadas; y se executen no solamente contra los que fabricaren moneda falsa con cuño ó estampa de estos reynos, sino tambien con los de qualesquiera otra Corona, ó Potencia soberana, aunque las dichas monedas no se admitan ni corran en estos mis reynos: y mando á los Jueces que conocieren de estas causas, que procedan en ellas con el mayor rigor, sin remitir ni moderar con pretexto alguno las penas de las leyes mandadas guardar nuevamen-

te, y declaradas por esta mi Real pragmática, la qual quiero tenga fuerza de ley, como si fuese hecha y promulgada en Cortes.

LEY II. *antecedente á la 6.*

D. Fernando VI. en Aranjuez por Real orden de 9 de Junio de 1755.

Conocimiento de las Justicias ordinarias en causas sobre falsificacion de moneda.

Conformandome con lo que me ha representado la Junta de Comercio y moneda; he resuelto que cese en el conocimiento de las causas, que se ventilan sobre el trato ú contrato particular, cometiendole á las Justicias ordinarias: que todas las causas que ocurrieren sobre moneda falsa, se sigan por las mismas Justicias, con los recursos á las Salas y Tribunales su-

periores que correspondan; y concluidas, se remitan á la Junta los cuerpos de delitos, que consten en las monedas falseadas é instrumentos y materiales de la falsificación: y que, por si se halle inconveniente de estar privada en algun caso particular de avocar el conocimiento de alguna causa criminal ó negocio, tenga esta facultad, como la tiene el Consejo por varias leyes.

LEY III. consiguiente á la 8.

El Consejo en Madrid por Auto consultado de 11 de Mayo de 1795.

Cuidado de las Justicias en la averiguacion y castigo de los monederos falsos, expendedores é introductores.

Mandamos á todos los Jueces y Jus-

ticias, que cada uno en sus distritos y y jurisdicciones con el mayor cuidado sigilo, zelo y aplicacion, y usando de los medios que discurriesen mas eficaces, procedan á la averiguacion y prision de todas y qualesquier personas que fabricaren, expendieren ó introduxeren moneda falsa en estos nuestros reynos; comunicándose unos á otros las noticias que adquirieren con toda reserva para el logro de las prisiones; y executadas, procederán contra los reos á sus castigos, como se previene por las leyes de nuestros reynos que sobre ello tratan, con subordinacion al Consejo y Tribunales superiores respectivos, con remision de los autos.

TITULO IX.

De los desertores del Real servicio; su persecucion y castigo.

LEY I. consiguiente á la 6.

D. Carlos IV. por resolucion á consulta del Consejo de Guerra de 17 de Enero comunicada en circular de 8 de Febrero de 1806.

Pena del que desertare segunda vez, y se presentare voluntariamente.

Con motivo de haberse impuesto por el delito de segunda desercion á un soldado, que á poco se presentó á la Justicia de un pueblo inmediato, la sentencia de quatro carreras de baquetas por doscientos hombres, y ocho años de arsenales que señala el artículo 3 de la Real resolucion de 29 de Agosto de 1794. (*ley 6. de este título*) mandada observar por otra de 4 de Julio de 1805; y enterado de lo que me consultó el Consejo Supremo de Guerra acerca de la diferencia que parece debe haber entre la pena del desertor aprehendido, y del que voluntariamente se presenta, para evitar que los buenos soldados arrepentidos de un exceso, á que los arrastró tal vez un mal consejo ó una imprudencia momentanea, dexen de volver á sus banderas; me he servido declarar, que los que se hallen en igual caso

solo deben sufrir la pena de ocho años de arsenales.

LEY II.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 20 de Marzo de 1806.

Pena de los desertores de segunda y tercera vez indultados de las anteriores.

Enterado de las dudas que se me han propuesto acerca de si los desertores de segunda y tercera vez, que han sido indultados de las anteriores, deberian sufrir la pena de diez años de presidio.... me he servido resolver, conformandome con el parecer del Supremo Consejo de Guerra, que á los desertores de segunda vez indultados de la primera se les imponga la pena de volver á servir en su propio regimiento todo el tiempo de su primer empeño, con dos años mas de recargo; y que al desertor de tercera vez, indultado de la primera y segunda, se le destine por diez años á presidio, por considerarse incorregible, ser gravoso á la Real Hacienda, é indigno de continuar en la honrosa carrera de las Armas que tantas veces ha abandonado.

L

TITULO XII.

*De los ayuntamientos, bandos y ligas; cofradías y otras parcialidades.*LEY I. *consiguiente á la 2.*

D. Fernando VI. en Aranjuez por decreto de 2 de Julio de 1751.

Prohibicion de las congregaciones de Franc-masones en estos reynos.

Hallándome informado de que la invencion de los que se llaman Franc-masones es sospechosa á la Religion y al Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede debaxo de excomunion, y tambien por las leyes de estos reynos que impiden las congregaciones de muchedumbre, no constando sus fines é institutos á su Soberano; he resuelto atajar tan graves inconvenientes con toda mi autoridad; y en su consecuencia prohibo en todos mis reynos las congregaciones de los Franc-masones debaxo de la pena

de mi Real indignacion, y de las demas que tuviese por conveniente imponer á los que incurrieren en esta culpa. Y mando al Consejo, que haga publicar esta prohibicion por edicto en estos mis reynos, encargando en su observancia al zelo de los Intendentes, Corregidores y Justicias, aseguren á los contraventores; dándoseme cuenta de los que fueren por medio del mismo Consejo, para que sufran las penas que merezca el escarmiento; en inteligencia de que he prevenido á los Capitanes Generales, á los Gobernadores de plazas, Gefes militares é Intendentes de mis exércitos y armada naval, hagan notoria y celen la citada prohibicion, imponiendo á qualquiera Oficial ó individuo de su jurisdiccion, mezclado ó que se mezcláre en esta congregacion, la pena de privarle y arrojarle de su empleo con ignominia.

TITULO XVII.

*De los vándidos, salteadores de caminos y facinerosos.*LEY I. *consiguiente á la 5.*

D. Carlos IV. en San Ildefonso por Real orden de 31 de Agosto de 1804.

Gratificacion de la tropa por la prision de contrabandistas y malhechores; y orden para la manutencion y entrega de ellos.

Enterado de lo expuesto por el Gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte acerca de las reglas que conviene establecer, en punto al modo de satisfacer á las partidas de tropa destinadas á la persecucion de contrabandistas y malhechores, las gratificaciones señaladas por las aprehensiones que verifiquen, y asimismo para fixar el orden de la manutencion y entrega de los reos; me he servido resol-

ver, que la expresada gratificacion se dé á la tropa como hasta aquí; y si resultase injusta la prision, se avisará al Capitan General de quien dependa la partida, ó haya dependido quando la verificó, para que les exija la gratificacion: que los socorros ó alimentos de los reos aprehendidos por dichas partidas y dependientes de la Jurisdiccion ordinaria se saquen de los bienes de los mismos reos; en su defecto de los fondos de penas de Cámara y gastos de Justicia de los pueblos donde se siga su causa; y á falta de éstos, del Tribunal de provincia respectivo; supliéndose los gastos de conduccion por los pueblos del tránsito, ó donde fueren aprehendidos. Que la tropa haga la entrega de los presos en los distritos de las Chancillerías de Valladolid y Granada, y Au-

diencia de Extremadura en los pueblos de su comprehension donde haya cárceles seguras, ó en la cabeza del partido, recogiendo de las Justicias las certificaciones competentes; lo que deberá entenderse con los reos que hayan de ser juzgados por la Jurisdiccion ordinaria; pero

(1) Por Real resolucion de 6 de Junio de 1806 mandó S. M., que á los Oficiales militares comisionados en la persecucion de malhechores y contrabandistas, no se les impida de modo alguno perseguirlos y arrestarlos aun fuera de los límites de sus pasaportes.

(2) Y en Real orden de 25 de Marzo inserta en circular del Consejo de 16 de Mayo de 1806, con motivo

los que lo han de ser por la militar, se pondrán donde disponga el Capitan General á quien corresponda, conforme está prevenido por la Real instruccion de 29 de Junio de 1784 (*ley 5. de este tit.*), y órdenes posteriores de 19 y 30 de Marzo de 1802. (*ley 8.*) (1 y 2)

de haberse resistido la Sala del Crimen de la Audiencia de Sevilla á entregar los reos aprehendidos por la Jurisdiccion ordinaria, cómplices de un cabeza de cuadrilla preso y procesado por la militar; declaró S. M. que en este y otros casos semejantes conozca de todos la Jurisdiccion en donde se hallare el reo principal; y no constando cuál es, ó dudándose de él, la que primero hubiere comenzado á conocer.

TITULO XIX.

Del uso de armas prohibidas.

LEY I. *consequente á la 21.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 24 de Junio de 1805.

Modo de proceder los Gobernadores de plazas marítimas en las causas sobre uso de armas prohibidas.

Enterado de los abusos que se han introducido en el Juzgado de armas prohibidas concedido por Real orden de 15 de Octubre de 1748 á los Gobernadores de las plazas de Cádiz y Málaga, y que se hizo extensivo á los demas Gobernadores de plazas marítimas por las de 1.º de Septiembre de 1760, y 28 de Julio de 1785 (*ley 21 y sus notas 15 y 16*), me he servido declarar.

1 Que los Gobernadores de las plazas marítimas, y baxo sus órdenes los Diputados de barrios, los Alcaldes, y demas ministros subalternos encargados de la policía y tranquilidad pública, celen con suma vigilancia que ninguno, sea de día ó de noche, lleve armas prohibidas de quantas estan declaradas como tales en las leyes y pragmáticas.

2 Que si alguno fuere aprehendido con ellas, ó la arrojaré huyendo de la Justicia ó rondas, proceda el Gobernador de plano y sumariamente á la justificacion del hecho; y oído el reo por medio de la declaracion que se le reciba, inmediatamente proceda á declararle, con acuerdo de

Asesor, incurso en las penas establecidas por la Real pragmática de 26 de Abril de 1761 (*ley 19 de este tit.*); sin que en esto pueda alegarse fuero por privilegiado que sea, ni oponerse excepcion de incompetencia; sin perjuicio de que si la persona á quien se aprehendiesen tales armas fuere de notable carácter ó circunstancias, haya de dar cuenta el Gobernador al Consejo de la Guerra con la justificacion del hecho.

3 En todas estas causas se asesorará el Gobernador precisamente con el Alcalde mayor, ó en su defecto con Letrado de ciencia y probidad que no tenga conexion con el reo, ó otra relacion que le constituya legalmente sospechoso; y la providencia que diere la consultará con remision de la causa, sin hacerla saber al reo, al Capitan General de la provincia; con cuya resolucion, dada con acuerdo del Auditor, y oído el Fiscal del Juzgado, quede enteramente fenecida y acabada.

4 Quando ademas del uso de armas prohibidas se verifique otro delito, como herida, muerte, robo ú otro, en el qual el uso de dicha arma sea mero instrumento para cometerle, ó cosa accesoría, en este caso conocerá el Juez de la jurisdiccion respectiva al reo, con la apelacion adonde corresponda.

5 Para que en estas causas no haya atraso, y pueda celarse la execucion de esta providencia, los Gobernadores den

cuenta cada quatro meses al Capitan General del estado de ellas, expresando el dia en que se comenzaron, progreso que han tenido, y su actual estado; y donde esté unido el Gobierno á la Capitanía General, se entenderá lo dicho con el Supremo Consejo de la Guerra.

6 Finalmente todos los Tribunales de

Guerra ó Marina, cuyas apelaciones proceden segun ordenanza para el expresado Consejo, le remitan cada quatrimestre una razon circunstanciada y auténtica de todas las causas criminales y testamentarias de oficio pendientes en cada uno, con la expresion indicada en el párrafo anterior.

TITULO XXXII.

De las causas criminales; y modo de proceder en ellas, y en el exámen de testigos.

LEY I.

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden de 4 de Noviembre inserta en circular del Consejo de 24 de Diciembre de 1805.

Obligacion de presentarse á declarar en las causas criminales militares ante los Oficiales encargados de ellas.

Enterado de haberse excusado un Ventiquatro de Sevilla á concurrir en casa de un Ayudante de la brigada de Carabineros Reales, para dar su declaracion en causa criminal contra un dependiente de ella; me he servido declarar, que debió presentarse en dicha casa á de-

clarar; y que á excepcion de los Jueces ordinarios ó delegados, que se hallen en actual exercicio de la Real Jurisdiccion ordinaria ó delegada, todas las demas personas, de qualquiera clase y distincion que sean, por empleo ni otro motivo puedan excusarse á comparecer en la casa del Oficial propietario, ó que haga sus veces de Juez Fiscal en las causas militares; que los Jueces de quien dependan las obliguen á comparecer y declarar, con decirse solo en los oficios que es necesario lo executen: y que no se moleste sobre este punto mi soberana atencion, ni se dé lugar á que se atrase la recta y pronta administracion de Justicia.

TITULO XXXVIII.

De los alcaides y presos de las cárceles.

LEY I. consiguiente á la 27.

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 13 de Mayo de 1805.

Manutencion en las cárceles de los desertores presos por otros delitos, y entregados á sus Cuerpos.

Enterado de la duda ocurrida acerca de si los soldados, que habiendo desertado y cometido despues de su desercion robos ú otros excesos en cuadrilla, y son juzgados por ellos segun lo mandado en la Real orden circular de 8 de Mayo de 1797 (*ley 5. tit. 9. de este lib.*), han de ser mantenidos, en el tiempo que dure su causa,

de cuenta de los Cuerpos á que pertenecian; me he servido mandar por punto general, que los reos de la especie indicada sean mantenidos por la Jurisdiccion que conozca de su causa; y si saliesen libres de ella, ó con pena menor de la que pueda corresponderles por el delito de desercion, el Juez, ó Tribunal que haya entendido en ella, pasará á los Cuerpos el cargo de los socorros suministrados, al mismo tiempo que le entregue el desertor, con arreglo á lo que previene la citada Real orden circular; debiendo los Cuerpos reintegrar en este caso el importe de los enunciados socorros.

TITULO LX.

*De las penas corporales ; su conmutacion y destino de los reos.******
LEY I. *consiguiente á la 11.*

D. Felipe V. á 29 de Agosto de 1742.

Las Justicias consulten con los Tribunales las sentencias que contengan penas graves infamatorias, y corporis afflictivas.

En vista de lo representado por el Fiscal de nuestro Consejo sobre que las Justicias ordinarias y de la Hermandad, especialmente las del distrito y circunferencia de la Corte, procedian en las causas criminales á la execucion de las penas graves que irrogaban infamia, y *corporis afflictivas*, sin consultarlas á la superioridad contra lo dispuesto por las leyes del Reyno, y práctica de los Tribunales superiores; mandamos á todas las Justicias no pasen ni procedan á la execucion de las sentencias que dieren en las causas criminales, de que entiendan, y en que se contengan penas graves que irrogen infamia, y *corporis afflictivas*, sin consultarlas primero con los del nuestro Consejo, ú otro qualquiera Tribunal á quien corresponda.

LEY II. *consiguiente á la 19.*

D. Carlos IV. en San Lorenzo por Real orden circular de 14 de Noviembre de 1805.

Pena y destino á las cárceles de las mugeres reos de contrabando.

He resuelto, que en las provincias donde no hubiese casas de reclusion, á que puedan destinarse las mugeres reos de contrabando, cumplan éstas su condena en la cárcel; y que se las obligue á que ganen su sustento con las labores que puedan desempeñar.

LEY III. *consiguiente á la 8. y 9.*

D. Carlos IV. en Aranjuez por Real orden circular de 5 de Enero de 1805.

Prohibicion de librar provisiones la Chancillería para alzar la retencion de los reos destinados á presidios, y en los demas casos en que haya de tratar con la Jurisdiccion militar.

Enterado de haber insistido la Chan-

cillería de Granada en que debe librar provisiones para alzar la retencion de los reos en los presidios, y no creer debe observar lo mandado en la Real orden que se expidió en 26 de Junio de 1802; he resuelto, que conforme á lo mandado en la Real orden de 30 de Enero de 1751, se abstenga de librar provisiones en este y otros casos en que haya de tratar con la Jurisdiccion militar, que como independiente en su línea, lo mismo que la ordinaria, solo pueden requerirse y exortarse por medio de oficios atentos, pero no mandarse entre sí; con lo que se evitará la confusion, el desórden, y los demas perjuicios que son consiguientes.

LEY IV. *consiguiente á la 21.*

D. Carlos IV. por resolucion de 14 de Julio de 1806, á consulta del Consejo de la Guerra.

Cumplimiento de las condenas de los confinados en la forma y parage que les asigne; abolicion de fianzas para tenerlos en libertad; y modo de extraer los refugiados.

En vista de una sumaria formada por el Veedor de Málaga contra un presidiario fugado de las obras públicas, que habia hecho resistencia con uso de armas á los que intentaron prenderle, y refugiado-se á sagrado; me he servido mandar, que en las causas de reos refugiados sujetos al fuero de Guerra proceda el Supremo Consejo del mismo modo que en las de los Militares, con arreglo á lo prevenido en la Real resolucion de 7 de Octubre de 1775: y mediante resultar de la citada sumaria que el referido presidiario se hallaba en libertad quando cometió la fuga, baxo de fianza de un tio suyo, y ser notorios los inconvenientes que se siguen de semejantes procedimientos contrarios á la verificacion del condigno castigo de los delitos; mando queden abolidas tales fianzas; y que todo confinado cumpla su condena en la forma y parage que se le señale, sin distincion de delitos ni otro pretexto alguno.

ADVERTENCIA.

En este Suplemento formado para el cumplimiento de lo resuelto por S. M. en su Real decreto de 2 de Junio inserto en cédula de 15 de Julio de 1805, y puesto por cabeza de la Novísima Recopilacion de Leyes de España, se han incorporado las últimas providencias expedidas en dicho año y en el de 1806, y añadido algunas de los anteriores no recopiladas en ella, por no haberse tenido presentes al tiempo de su formacion. Se han repartido en los libros y títulos á que corresponden segun la materia de sus disposiciones; principiando con ellas una nueva numeracion, así en las leyes como en las notas, que habrá de continuarse en las de los sucesivos quadernos ó suplementos que deben publicarse de las que se fueren expidiendo en cada año con arreglo al mismo decreto y cédula. Á las que no tienen preciso enlace ó conexión con alguna de las recopiladas, se ha puesto por cabeza el número que les toca en su respectivo título; pero á las que tienen alguna relacion con aquellas, porque las amplian, limitan ó declaran, derogan ó confirman, se añade á su propio número el de la ley ó nota recopilada á que es consiguiente, para excusar al lector el trabajo de buscar su antecedente entre todas las del título en la Recopilacion. Siguiendo este orden en los demas quadernos de suplementos anuales, quando llegue el caso de reimprimirla, se encuentra hecho el trabajo de buscar y dar á cada ley ó nota de las comprendidas en ellos, el lugar ó número que les toca ocupar entre las contenidas en los libros y títulos de dicho Código.

